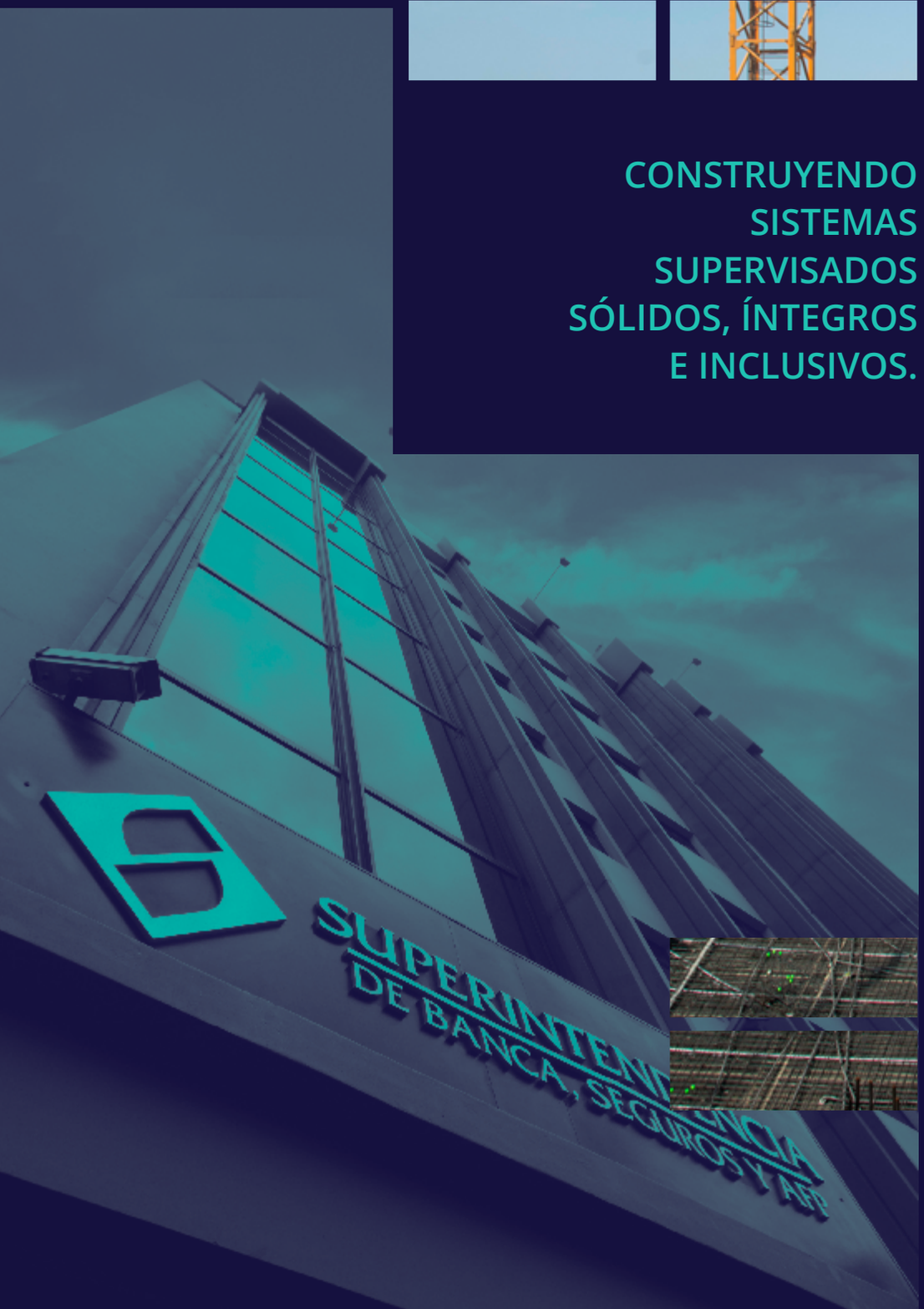
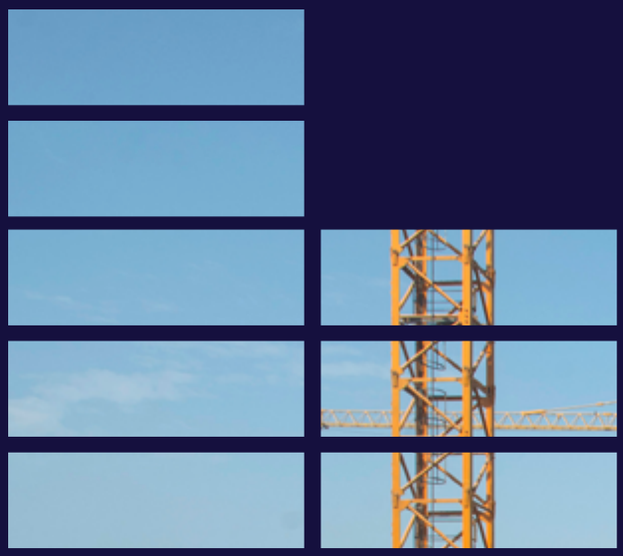
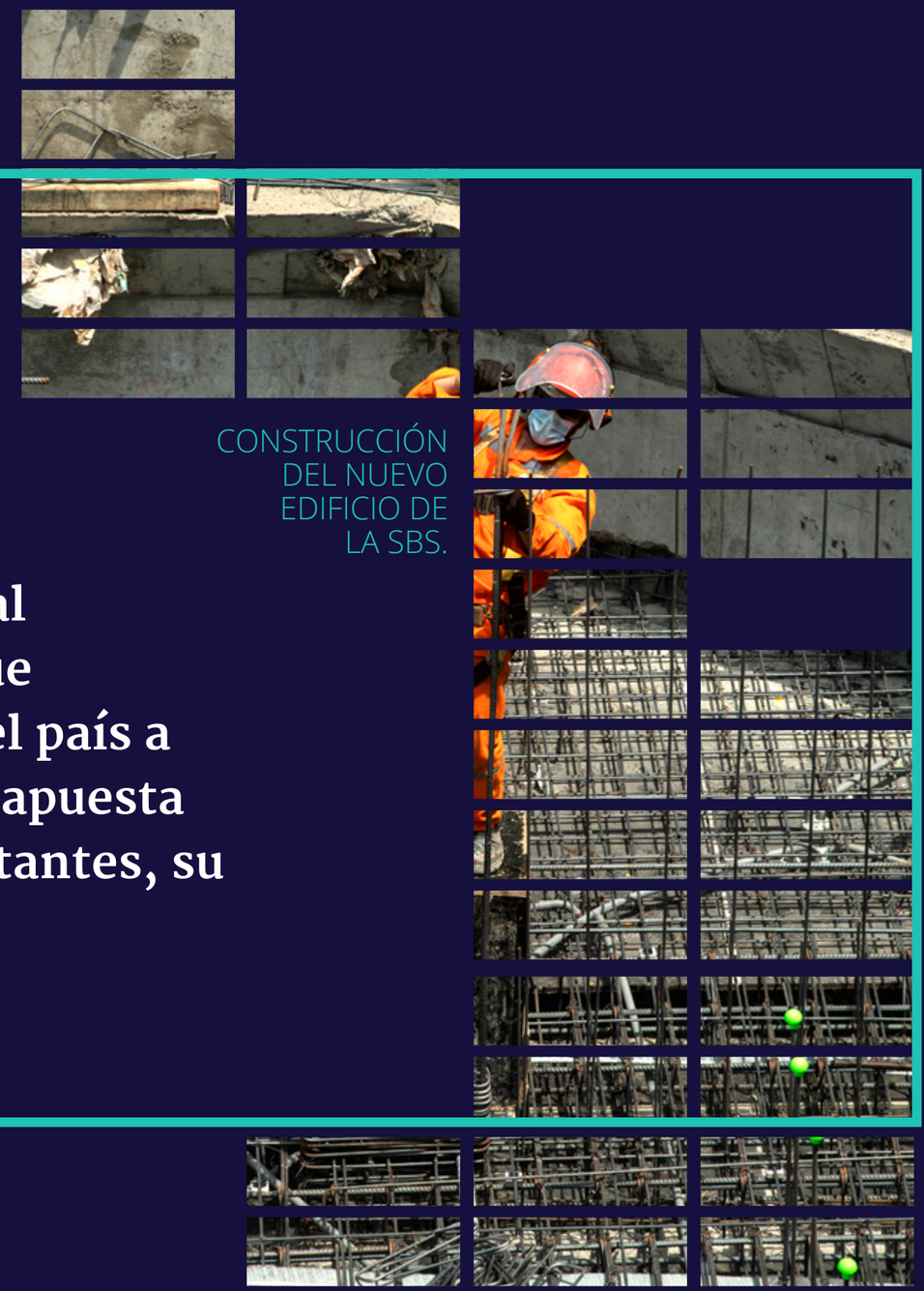
SUPERINTENDENCIA
DE BANCA, SEGUROS Y AFP
República del Perú

MEMORIA ANUAL **2020**





CONSTRUYENDO SISTEMAS SUPERVISADOS SÓLIDOS, ÍNTEGROS E INCLUSIVOS.



CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DE LA SBS.

La SBS entra a sus 90 años de vida institucional acompañando al país en su bicentenario y sigue trabajando para contribuir con el desarrollo del país a través del cumplimiento de sus mandatos y la apuesta permanente por uno de sus pilares más importantes, su capital humano.

CONTENIDO

Funcionarios
p. 6

Carta de la superintendenta
p. 8

Plan estratégico institucional 2016 – 2020
p. 14

Plan estratégico institucional 2021 – 2025
p. 22

Estrategia de la SBS en un marco de pandemia
p. 30

Estados financieros
por los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019
p. 110

1 Sistema financiero
p. 36

BOX 1
Digitalización de los servicios financieros

BOX 2
Créditos reprogramados durante el estado de emergencia nacional

BOX 3
Solvencia del sistema financiero

2 Sistema asegurador
p. 48

BOX 4
Desarrollo del modelo de capital basado en riesgos para las compañías de seguros

3 Sistema privado de pensiones
p. 56

BOX 5
Impacto de pandemia del covid-19 en los fondos privados de pensiones

BOX 6
Licitación de afiliados del SPP

4 Sistema cooperativo
p. 70

5 Mejora de la educación financiera y conducta de mercado
p. 78

BOX 7
Modificación del reglamento de gestión de conducta de mercado del sistema financiero: tratamiento de clientes con dificultades temporales para el pago de créditos durante el estado de emergencia nacional

BOX 8
Programas de educación financiera en marco del estado de emergencia nacional

BOX 9
Microscopio Global 2020

6 Prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo
p. 76

BOX 10
Planeamiento de la supervisión basada en riesgos

BOX 11
Rol del análisis operativo durante el estado de emergencia nacional

BOX 12
Capacitación del personal de la UIF y las entidades colaboradoras en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo

7 Gestión administrativa
p. 88

FUNCIONARIOS

SOCORRO *Heysen Zegarra*
SUPERINTENDENTA DE BANCA, SEGUROS Y AFP

JORGE *Mogrovejo González*
SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE BANCA Y MICROFINANZAS

CARLOS *Izaguirre Castro*
SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE SEGUROS

ELIO *Sánchez Chávez*
SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE AFP

SERGIO *Espinosa Chiroque*
SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

OSCAR *Basso Winffel*
SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE COOPERATIVAS

JAVIER *Poggi Campodónico*
SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS

MILA *Guillén Rispa*
SUPERINTENDENTA ADJUNTA DE ASESORÍA JURÍDICA

ALEJANDRO *Medina Moreno*
SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE RIESGOS

MARIELA *Zaldívar Chauca*
SUPERINTENDENTA ADJUNTA DE CONDUCTA DE MERCADO E INCLUSIÓN FINANCIERA

ALBERTO *Baba Arima*
GERENTE DE PLANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN

JOSÉ *Kanashiro Uechi*
SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL

CECILIA *Ames de Saavedra*
GERENTE DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y COMUNICACIONES

IGOR *Sakuma Carbonel*
GERENTE DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

DAVID *Cifuentes Mendoza*
GERENTE DE GESTIÓN HUMANA (E)

CARLOS *Melgar Romarioni*
SECRETARIO GENERAL

CARTA DE LA SUPERINTENDENTA

Socorro *Heysen Zegarra*
SUPERINTENDENTA

> El objetivo de la SBS, desde su creación, ha sido cautelar que los sistemas bajo su supervisión, que han aumentado a lo largo de los años -financiero, seguros, privado de pensiones y cooperativas- sean solventes, sostenibles e íntegros. Y, con esa finalidad, la SBS desarrolla una supervisión y regulación financiera exigente, permanente y alineada a valores como la prevención y prudencia.

No hay lugar a dudas que el quinquenio 2016-2021 ha sido un período lleno de retos para todos los peruanos y sus instituciones públicas y privadas. Hemos vivido una situación de permanente incertidumbre política, a lo que se sumó una crisis sanitaria mundial sin precedentes por la pandemia del Covid-19 en el último año, que ha golpeado duramente nuestra economía.

A pesar de este difícil contexto, un balance de la labor realizada en la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), en los últimos cinco años, muestra que se han realizado progresos notables, a partir de un plan estratégico quinquenal con seis objetivos que establecieron una hoja de ruta y permitieron a la entidad establecer prioridades, fortalecer procesos y asignar los recursos de la manera más eficiente para cumplir los mandatos para los que fue creada. Los progresos se evidencian no solo en el campo de la regulación y supervisión de los cuatro mandatos institucionales de la SBS (estabilidad financiera, integridad financiera, conducta de mercado y protección social en el campo del sistema privado de pensiones), sino también en el fortalecimiento de la gestión interna de la institución, a través del desarrollo y consolidación de políticas de manejo financiero, gestión humana, control interno y gobierno corporativo. Todo esto ha preparado a la SBS para recibir su 90 aniversario, este 23 de mayo del 2021, como una institución sólida y con reconocido prestigio internacional, y que, cada vez más, aporta valor a los ciudadanos y contribuye al desarrollo económico al Perú.

El objetivo de la SBS, desde su creación, ha sido cautelar que los sistemas bajo su supervisión, que han aumentado a lo largo de los años -financiero, seguros, privado de pensiones y cooperativas- sean solventes, sostenibles e íntegros. Y, con

esa finalidad, la SBS desarrolla una supervisión y regulación financiera exigente, permanente y alineada a valores como la prevención y prudencia. Ello demanda que la SBS ejerza su función y autonomía con integridad, responsabilidad y vocación de servicio, y que desarrolle un trabajo de mejora continua del marco prudencial de regulación y supervisión, a través del monitoreo de los riesgos individuales y sistémicos, de la aplicación de un modelo robusto de supervisión basado en riesgos, de la implementación de sistemas de información avanzados, que en conjunto permiten tomar acciones oportunas para prevenir crisis financieras. Gracias a este trabajo continuo, los sistemas que supervisamos han podido, durante el 2020, hacer frente a una doble crisis, sanitaria y económica, sin precedentes y cuyos efectos seguiremos viendo en los próximos años.

Al inicio del año 2020, se esperaba un período de calma y estabilidad hasta que en marzo se declaró el estado de emergencia nacional debido a la pandemia del Covid – 19. A partir de ese momento y con el objetivo de cumplir su mandato de preservar la estabilidad del sistema financiero, así como evitar el rompimiento de la cadena de pagos de la economía, la SBS, en estrecha coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Central de Reserva, tomó diversas medidas macroprudenciales y microprudenciales. Así, en un contexto de elevada incertidumbre con respecto al impacto de la crisis sobre la situación financiera de los deudores, la SBS facultó a las entidades del sistema financiero a reprogramar créditos de sus clientes afectados por la coyuntura, sin que esta modificación suponga un deterioro en su calificación crediticia, posibilitando un diferimiento de provisiones. Al mismo tiempo, la SBS acompañó los programas de créditos con garantía del estado, como Reactiva Perú y FAE-MYPE, con medidas de flexibilización prudencial que apoyaron su éxito.

Al inicio del año 2020, se esperaba un período de calma y estabilidad hasta que en marzo se declaró el estado de emergencia nacional debido a la pandemia del Covid – 19. A partir de ese momento y con el objetivo de cumplir su mandato de preservar la estabilidad del sistema financiero, así como evitar el rompimiento de la cadena de pagos de la economía, la SBS, en estrecha coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Central de Reserva, tomó diversas medidas macroprudenciales y microprudenciales.

Asimismo, se suspendió la exigencia del requerimiento de cobertura de liquidez, y facultó a las empresas supervisadas a disponer del patrimonio efectivo adicional acumulado por el componente del ciclo económico, exhortándolas también a capitalizar la totalidad de sus utilidades del 2019, con lo cual el porcentaje de capitalización de utilidades subió de 54.1% en 2018 a 76.1% en 2019.

A través de los requerimientos de regulación y supervisión prudenciales, se buscó reducir el riesgo de quiebras de empresas supervisadas, haciendo que sus accionistas y directivos internalicen los costos de asumir grandes riesgos y tomar malas decisiones; y, asegurando que las empresas estén lo suficientemente fuertes para afrontar situaciones adversas. También, se buscó que, en caso de ocurrir el riesgo de salida de alguna empresa del mercado, esto genere el menor impacto posible sobre la estabilidad del sistema, a través de un proceso ordenado y transparente, evitando un efecto contagio y la interrupción significativa de los servicios financieros para los usuarios. Por ello, el rol y opinión de la SBS, en la recientemente aprobada Ley de control previo de operaciones de concentración empresarial, por parte del Congreso de la República, fue fundamental.

El compromiso de la SBS es seguir implementando las medidas que sean necesarias para contribuir a atenuar el impacto de la crisis económica, que generó la crisis sanitaria, en el sistema financiero y en sus usuarios, pero sobre todo seguir trabajando para que los sistemas sean solventes y confiables. Y, para ello, es importante continuar nuestra labor de supervisión bajo las nuevas condiciones de trabajo. En el contexto de la nueva normalidad, la institución ha fortalecido su supervisión extra situ, a través de la mejora de los sistemas de supervisión y regulación modernos que aprovechen los avances tecnológicos, así como la constante capacitación de su personal.

Tan importante como preservar la estabilidad financiera de los sistemas supervisados, es asegurar la integridad de estos. Es así que, en los últimos años, la SBS ha emitido normas de gobierno corporativo e idoneidad moral, que buscan asegurar en los supervisados un comportamiento íntegro y responsable en la gestión de sus entidades y ha promovido la aprobación de legislación y regulación para fortalecer el sistema de prevención y detección de lavado de activos.

Buscamos además que las empresas del sistema financiero, asegurador y privado de pensiones tengan un buen comportamiento para con sus clientes. Para lograr esto se ha requerido emprender un trabajo de largo aliento de mejora continua de la regulación y supervisión de la SBS y de una estrecha cooperación con otros organismos públicos que comparten esa responsabilidad y desarrollan labores complementarias, como es el caso de Indecopi. Más aun en un entorno de acelerada digitalización y en el extremadamente difícil contexto de la pandemia.

La SBS emitió normas para la adecuada conducta de mercado del sistema financiero en 2017 y del sistema de seguros en 2019. Estas normas requieren que los directorios de las empresas asuman la responsabilidad de adoptar prácticas acordes con los derechos de los consumidores, considerando aspectos como un trato justo y equitativo; información suficiente, apropiada, clara y oportuna; y, la implementación de mecanismos de solución de reclamos imparciales y ágiles asociados a la gestión de los productos y servicios ofrecidos. Adicionalmente, en 2020, incorporamos importantes modificaciones al reglamento de tarjetas de crédito dirigidos a mejorar la interacción entre el consumidor y la entidad en un entorno más moderno y ágil; y, a fin de proteger a los deudores con dificultades de pago en el contexto de la pandemia, dictamos normas complementarias para

que estos tuvieran acceso a información adecuada y oportuna sobre su situación crediticia y pudiesen elegir entre al menos dos opciones al reprogramar sus deudas. Todo esto fue acompañado de un mayor alcance de los canales de atención de la SBS. Las nuevas regulaciones y mejor supervisión llevaron a un gradual decrecimiento de los reclamos de clientes con respecto al número de transacciones realizadas. Sin embargo, esta tendencia decreciente se revirtió en el periodo de la pandemia. Esto nos impulsa a redoblar esfuerzos y a reafirmar nuestro compromiso de lograr la adecuada conducta de mercado de los sistemas que supervisamos.

La crisis económica que estamos atravesando también está afectando a la seguridad social. En los últimos años ha habido un esfuerzo por parte de la SBS de fortalecer el sistema privado de pensiones con el objetivo de brindar una protección adecuada a los afiliados durante la vejez y en situaciones de invalidez. Para ello, se ha desplegado esfuerzos para aumentar la competencia, flexibilizar el esquema de inversiones, dar mayor libertad al afiliado para que pueda decidir el fondo y la entidad donde quiere mantenerlos reduciendo los plazos en los traslados, y reducir las comisiones a través de las últimas licitaciones.

Sin embargo, desde el inicio del estado de emergencia nacional y con la finalidad de mitigar los efectos de la pandemia en la población, durante el año 2020, se han presentado una serie de iniciativas legislativas en el Congreso de la República, como los retiros extraordinarios de los fondos de pensiones, que sumadas a leyes adoptadas en el quinquenio pasado, están poniendo en peligro el objetivo de todo sistema de pensiones en el mundo que es proveer de una pensión a los afiliados para que transiten seguros durante sus años de jubilación. Desde la SBS, consideramos importante y necesario que nuestro país realice una reforma de los sistemas de pensiones que se construya sobre los elementos positivos de los actuales sistemas y corrija sus debilidades, basándose en criterios técnicos y experiencias internacionales, para lograr los siguientes objetivos esenciales de un sistema de pensiones: ampliar la cobertura y el nivel de las pensiones a fin de reducir la pobreza en la vejez, mejorar la eficiencia y reducir los costos en beneficio de los afiliados, mejorar el actual proceso de inversiones y mejorar la oferta de productos pensionarios para el afiliado. Todo esto cuidando la sostenibilidad fiscal de la economía.

Seguimos trabajando en la Política Nacional de Inclusión Financiera (PNIF), la cual busca promover la inclusión financiera a través de la ejecución de acciones multisectoriales, contribuyendo al desarrollo económico, descentralizado e inclusivo, con la participación de los sectores público y privado; y, en el marco de la preservación de la estabilidad financiera.

La crisis económica ha demostrado que fomentar la inclusión financiera sigue siendo una tarea pendiente para el país y que debe de haber un compromiso de Estado. En tal sentido, en el marco de la PNIF, la SBS, como parte de la Comisión Multisectorial de Inclusión Financiera (CMIF), ha tenido una activa participación para fortalecer la inclusión financiera de los ciudadanos, tales como: la promulgación de la Ley N° 31120 del 07.02.2021, que estableció el marco regulatorio de la Cuenta-DNI; el incremento del límite de operaciones con dinero electrónico y cuentas básicas; la modificación del marco normativo aplicable al dinero electrónico a fin de establecer medidas que impulsen el uso de cuentas de dinero electrónico como instrumento de inclusión financiera; el fortalecimiento de la educación financiera en las escuelas a través del Programa de Asesoría a Docentes "Finanzas en el Cole" y las acciones coordinadas con el Ministerio de Educación (Minedu) para el despliegue de recursos educativos utilizados por la iniciativa de "Aprendo en Casa"; entre otros.

Cumplir con todos los mandatos ha requerido repensar la entidad, verla como una unidad y desarrollar un plan estratégico para los próximos cinco años que continúe con la hoja de ruta trazada en el 2016. Con esa finalidad, ha sido necesario hacer un rediseño organizacional que ha ido desde la necesidad de una sede única y propia, ya en construcción y que, pese a los retrasos impuestos por la pandemia, estará lista en 2022. La construcción de esta nueva sede responde a la idea de ser cada vez más eficiente, mejorar la integración y fortalecer la cultura organizacional de una entidad necesaria para el desarrollo del país, todo ello en el marco de una actuación responsable y transparente en el manejo de los recursos.

La SBS se ha ido preparando para entrar al bicentenario de vida republicana con un gobierno corporativo fortalecido, en medio de un proceso de transformación digital que acelere y simplifique sus procesos y, sobre todo, por la permanente apuesta por su capital humano para lograr de este el rendimiento máximo a través del entrenamiento continuo y la adopción de adecuadas políticas internas que reconozcan ese esfuerzo, siempre alineado a los valores institucionales. Contribuir al fortalecimiento del capital humano de la SBS ha sido un compromiso de esta gestión con una entidad que va a cumplir 90 años de vida institucional, pero, principalmente, con el país. El Perú requiere de funcionarios públicos con conocimiento, bien entrenados y con sentido de urgencia para enfrentar los retos que el progreso del país demanda.

En el 2021 la SBS cumplirá 90 años de vida institucional y seguirá enfrentando retos, pero el más relevante, en medio de esta crisis sanitaria que ha golpeado al mundo y a nuestro país, será el de velar por la estabilidad de los sistemas que supervisa para que estos puedan acompañar el desarrollo de la actividad económica del país y, sobre todo, para proteger el dinero de los depositantes. Y, es que para acompañar ese crecimiento, el país requiere de sistemas supervisados sólidos, íntegros e inclusivos, tarea que un buen regulador y supervisor financiero debe llevar adelante en un entorno cada vez más cambiante y en el que los cambios coyunturales exigen a las organizaciones siempre replantear sus objetivos estratégicos para ser sostenibles y, principalmente, relevantes en el largo plazo, teniendo en cuenta que entidades técnicas como la SBS no solo enfrentan retos técnicos sino también enfrentan retos políticos.

Nos queda un largo camino por recorrer con muchos retos por delante, pero reafirmo nuestro indesmayable compromiso de seguir trabajando para lograr que los sistemas supervisados sigan siendo confiables y provean servicios de calidad, con la seguridad que necesitamos y merecemos los peruanos, y que contribuyan al desarrollo de nuestro país.

Socorro
Heysen Zegarra
SUPERINTENDENTA

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

2016 – 2020

A continuación se lista la relación de principales acciones estratégicas realizadas durante el periodo 2016 – 2020, que incluye las normas emitidas, modificadas y aprobadas, los sistemas implementados, constitución de comités, definición de lineamientos y procesos, entre otros importantes logros realizados.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Cautelar que los sistemas supervisados gestionen prudentemente sus riesgos, sean íntegros, solventes y sostenibles

1. Emisión de normas o disposiciones:

- Reglamento para la ampliación de operaciones y/o servicios de las empresas de operaciones múltiples.
- Reglamento del fondo de solvencia para las asociaciones de fondos regionales o provinciales contra accidentes de tránsito (Afocat).
- Reglamento para la contratación y gestión de reaseguros y coaseguros.
- Reglamento para la gestión del riesgo de mercado.
- Reglamento de constitución de reservas matemáticas de seguros de rentas y del análisis de la suficiencia de activos.
- Normas especiales para la implementación de la Ley que modifica y fortalece el funcionamiento de las cajas municipales de ahorro y crédito (CMAC) – (Ley N°30607).
- Reglamento de participación de las CMAC en la Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado.
- Reglamento de Registro Nacional de cooperativas de ahorro y crédito no autorizadas a captar recursos del público y de las centrales (Coopac).
- Reglamento de regímenes especiales y de la liquidación de las Coopac.
- Reglamento del Fondo de Seguro de Depósitos Cooperativo.
- Reglamento de gestión de riesgos técnicos para las Afocat.
- Reglamento general de las Coopac.
- Reglamento de supervisión y control de los corredores de reaseguros.
- Reglamento de supervisión y control de los corredores y auxiliares de seguros.
- Reglamento de la hipoteca inversa.
- Reglamento para la gestión de la continuidad del negocio.
- Reglamento de la reserva técnica de siniestros.
- Reglamento de empresas de arrendamiento financiero.
- Disposiciones extraordinarias para la constitución de provisiones por riesgo de crédito para la parte de los créditos que cuente con la garantía del Programa de Garantías Covid-19.
- Normas para la cobertura recursos y pago de imposiciones cubiertas del Fondo de Seguro de Depósitos (FSD).
- Precisiones que deben ser consideradas por las Coopac que participen en el marco del Fondo de Apoyo Empresarial (FAE) -Turismo y FAE - Agro.
- Disposiciones extraordinarias para la constitución de provisiones por riesgo de crédito para la parte de los créditos que cuente con la garantía del programa Reactiva Perú.
- Disposiciones especiales para la constitución de provisiones por riesgo de crédito para la parte de los créditos que cuente con la garantía del FAE-MYPE; y, para el cálculo del requerimiento de patrimonio efectivo por riesgo de crédito para la parte de las exposiciones que cuente con la garantía del FAE-MYPE.

2. Modificación de normas:

- Reglamento de gobierno corporativo y de la gestión integral de riesgos.
- Reglamento de requerimientos patrimoniales de las empresas de seguros y reaseguros.
- Reglamento de medición del riesgo cambiario en empresas de seguros.
- Reglamento para la supervisión consolidada de los conglomerados financieros y mixtos.
- Reglamento para la reestructuración, repotenciación, disolución y liquidación de las derramas, cajas de beneficios y otros fondos que reciban recursos de sus afiliados otorguen pensiones de cesantía, jubilación y similares.
- Reglamento de registro de modelos de pólizas de seguro y notas técnicas.
- Reglamento de las inversiones de las empresas de seguros.
- Reglamento de constitución de reservas matemáticas de seguros de rentas y del análisis de la suficiencia de activos.
- Reglamento para la gestión del riesgo de liquidez.
- Reglamento de gestión actuarial para empresas de seguros.
- Reglamento de factoring, descuento y empresas de factoring.
- Reglamento para la evaluación y clasificación del deudor y la exigencia de provisiones.
- Reglamento para la administración del riesgo de sobre endeudamiento de deudores minoristas.
- Reglamento para la elección de los representantes al directorio de las CMAC.

3. Se implementaron los siguientes sistemas, aplicativos, herramientas o módulos:

- Central de riesgos del seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT) y vehicular.
- Sistema de Registro de directores, gerentes y principales funcionarios (Redir).
- Sistema de Reporte de Auditoría (Sirai Coopac).
- Sistema para el reporte de eventos de interrupción significativa de operaciones (aplicativo Siris).

4. Otros

- Creación de Comité de Estabilidad Financiera.
- Elaboración y publicación del Informe de Estabilidad del Sistema Financiero.
- Elaboracion y publicación del Boletín especial del sistema financiero - Covid-19: Programas del Gobierno y medidas de la SBS.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2

Contribuir con la prevención y lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT)

1. **Se emitieron las siguientes normas o disposiciones:**

- Norma para la prevención del LA/FT aplicable a los agentes de aduana autorizados para operar como despachadores de aduana.
- Norma sobre funciones y cargos ocupados por personas expuestas políticamente (PEP) en materia de prevención del LA/FT.
- Norma para la gestión de riesgos y prevención del LA/FT aplicable a los concesionarios postales y operador designado, autorizados a prestar el servicio postal de remesa y/o giro postal.
- Norma que regula la forma y condiciones en que se debe proporcionar a la UIF-Perú, la información protegida por el secreto bancario y/o la reserva tributaria.
- Disposición que establece como comunicaciones de inteligencia financiera nacional, de carácter confidencial y reservado, al informe de inteligencia para levantamiento de reservas y a la nota de inteligencia financiera espontánea emitido por la UIF-Perú.
- Norma para la prevención del LA/FT aplicable a los sujetos obligados bajo el sistema acotado.
- Reglamento para la prevención del LA/FT aplicable a las Coopac.
- Se aprueba las instrucciones para la presentación del registro de operaciones únicas y múltiples (Instructivo RO) aplicable a sujetos obligados.
- Plantilla Rosel que deben utilizar sujetos obligados a informar para cumplir con su obligación de comunicar a la UIF-Perú.

2. **Se modificaron las siguientes normas:**

- Normas para el registro de empresas y personas que efectúan operaciones financieras o de cambio de moneda, supervisadas en materia de prevención del LA/FT por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), a través de la UIF-Perú.
- Reglamento de gestión de riesgos de LA/FT.
- Reglamento de infracciones y sanciones en materia de prevención de LA/FT.

3. **Se implementaron los siguientes sistemas, aplicativos, herramientas o módulos:**

- Sistema de consulta en línea sobre la existencia de reportes de operaciones sospechosas (ROS) y envío de comunicaciones.
- Aplicativo informático para recepción y explotación de información de operaciones de los sujetos obligados de mayor riesgo que cuentan con supervisor propio.
- Sistema de gestión de información proporcionada por ciudadanos sobre posibles hechos vinculados al LA/FT
- Sistema informático para la recepción y explotación del registro de operaciones.
- Módulo de búsquedas plataforma BINI en intranet SBS.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3

Cautelar que las empresas supervisadas implementen adecuadas prácticas comerciales respetando los intereses y los derechos de los consumidores.

1. **Se emitieron las siguientes normas o disposiciones:**

- Norma que regula los servicios que brinda la SBS a los ciudadanos y la atención de denuncias contra las empresas supervisadas.
- Reglamento de comercialización de productos de seguros.
- Reglamento de gestión de conducta de mercado del sistema financiero.
- Disposiciones que definen las actividades orientadas a promover la inclusión financiera, en el marco de lo establecido en la Ley marco de licencia de funcionamiento (Ley N° 28976).
- Reglamento de cuentas básicas.
- Reglamento de gestión de conducta de mercado del sistema de seguros.
- Reglamento del régimen especial para la gestión de conducta de mercado del sistema financiero.

2. **Se modificaron las siguientes normas:**

- Reglamento de operaciones con dinero electrónico.
- Reglamento de canales complementarios de atención al público de las empresas del sistema financiero y de las empresas emisoras de dinero electrónico.
- Circular de atención al usuario.
- Norma que regula los servicios que brinda la SBS a los ciudadanos y la atención de denuncias contra las empresas supervisadas.
- Norma que regula la constancia de depósitos u otros productos pasivos de personas fallecidas.
- Reglamento de tarjetas de crédito y débito.

3. **Se implementaron los siguientes sistemas, aplicativos, herramientas o módulos:**

- Plataforma de registro de orientación al ciudadano.
- Plataforma virtual de Servicios SBS en Línea.
- Desarrollo e implementación de chatbot Sebas.
- Canal virtual de recepción de reclamos del sistema privado de pensiones (SPP).
- Librerías virtuales en las que se incorporaron materiales de educación financiera.
- Mejora del aplicativo Reporte de Deuda SBS en el portal web.
- Mejoras en la atención al ciudadano en los siguientes módulos: (i) notificación; (ii) ventanilla virtual; (iii) solicitud de corrección para caso de aplicativo de constancias de estado pensionario; y, (iv) certificado del seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR) y de monitoreo de atención de trámites.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4

Cautelar el buen funcionamiento del SPP

1. **Se emitieron las siguientes normas o disposiciones:**
   - Normas complementarias y procedimientos operativos aplicables al régimen de reprogramación de aportes al fondo de pensiones (Repro-AFP).
   - Disposiciones para la flexibilización del pago de aportes voluntarios en el SPP.
   - Uso obligatorio de tablas de mortalidad para el cálculo de las reservas matemáticas de las pensiones en las modalidades de renta vitalicia familiar y renta vitalicia diferida, así como de aplicación gradual y obligatoria para el cálculo anual de la modalidad de retiro programado en el SPP y otros.
   - Metodología de las tasas de actualización, aplicables al cálculo del capital requerido de las pensiones definitivas de invalidez y sobrevivencia en el ámbito del modelo de póliza colectiva de administración de riesgos (Sisco).
   - Disposiciones que establecen los planes por descuento en las comisiones que cobran las AFP a sus afiliados.
   - Procedimiento operativo para el régimen especial de jubilación anticipada para desempleados (REJA).
   - Precisiones respecto al trámite de la jubilación anticipada ordinaria (JAO) y REJA.
   - Procedimiento operativo para el retiro extraordinario facultativo de hasta el 25% de fondos en el SPP.
   - Procedimiento operativo para el retiro extraordinario facultativo de fondos en el SPP (Ley N° 31068), en el contexto del estado de emergencia nacional.
   - Normas complementarias y procedimientos operativos aplicables al Repro-AFP II.
2. **Se modificaron las siguientes normas:**
   - Estructura del estado de cuenta de los afiliados al SPP.
   - Procedimiento operativo para disponer hasta el 25% del fondo de pensiones de los afiliados del SPP destinado a la compra de un primer inmueble.
   - Requerimientos mínimos de inversión de los fondos de inversión y mutuos dentro del SPP.
   - Reglamento operativo para la libre desafiliación informada y el REJA.
   - Manual de evaluación y calificación del grado de invalidez (Mecgi).
3. **Se implementaron los siguientes sistemas, aplicativos, herramientas o módulos:**
   - Nueva metodología de cálculo de la rentabilidad de los fondos de pensiones en los sistemas de información.
   - Mejoras en el sistema mercado electrónico de rentas y retiros (Meler) del SPP.
   - Mejoras en el módulo del bono de reconocimiento del padrón de afiliados del SPP.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5

Contar con personal altamente capacitado, comprometido y alineado a los valores institucionales para cumplir con los mandatos de la SBS

1. **Se emitieron las siguientes normas y disposiciones**
   - Política Salarial que define elementos para la administración correcta y transparente de la equidad interna y la competitividad de nuestra oferta salarial en el mercado laboral a fin de atraer y retener a los profesionales idóneos para la institución.
   - Procedimiento que reglamentará la selección de trabajadores Beca SBS que permite estudios de alta especialización.
   - Lineamientos de Competencias Organizacionales y Directivas para regular las expectativas de comportamiento con los trabajadores y directivos en función de la estrategia y de los valores institucionales.
   - Protocolos de Seguridad y Salud en el trabajo para las pruebas COVID que aseguren la salud y bienestar de todos los colaboradores.
2. **Se implementaron los siguientes sistemas, aplicativos, herramientas, módulos y actividades:**
   - Fortalecimiento de la cultura organizacional desde 2017, que involucró a la alta dirección, al 60% de los trabajadores de la SBS así como la conformación de un grupo de trabajo representativo de trabajadores con la Superintendenta. El resultado del proceso fueron las definiciones de valores y sus conductas, siendo estas últimas reportadas en el documento de lineamientos de competencias organizacionales y directivas.
   - Proceso de Desarrollo Directivo, que involucra desde 2019 al 80% de los intendentes de áreas de Línea y Asesoría Experta para el desarrollo de las 8 competencias directivas y que en 2020 continuaron de manera virtual.
   - Mecanismos para la continuidad de las operaciones a través de la implementación del trabajo remoto.
   - Acompañamiento a los colaboradores y sus familiares que fueron impactados por la pandemia u otras afecciones médicas por la emergencia.
   - Programas de bienestar orientados a la salud preventiva y recreación de la familia para enfrentar efectos derivados de la pandemia.
   - Se impulsó la capacitación en un entorno virtual, promoviendo el uso de tecnologías y nuevas herramientas digitales para el trabajo remoto. Se logró una cobertura del 82% de colaboradores capacitados.
   - El Programa de Extensión XXII se desarrolló por primera vez en un entorno completamente digital, desde el proceso de reclutamiento, selección y desarrollo de una malla curricular adecuada a este formato, manteniendo un alto estándar en la seguridad de cada etapa.
   - Se implementó el programa de mentoring en el entorno virtual con la finalidad de acompañar en el proceso de aprendizaje laboral a los nuevos trabajadores provenientes del programa de extensión.
   - Se reforzó el programa SBS Trainer con la finalidad de constituir un equipo selecto de entrenadores para fortalecer la gestión del aprendizaje y el conocimiento especializado en nuestra institución.
   - Se diseñó e implementó la Librería Digital SBS, cuyo objetivo es compartir contenidos digitales como cursos, videos y ponencias para el auto-aprendizaje de todo el personal.
   - Comunidades de Aprendizaje en la SBS, se implementaron con la finalidad de identificar y sistematizar los conocimientos y buenas prácticas generados por los diferentes equipos durante el proceso de supervisión; a fin de ponerlos a disposición para los miembros de cada comunidad especializada.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

6

Contar con un diseño organizacional, procesos, tecnología e infraestructura que busquen la eficiencia y contribuyan al logro de las metas y la rendición de cuentas en la SBS

1 **Nueva sede institucional que albergue a todos los trabajadores de la SBS**

- Adquisición de terreno para nueva sede.
- Construcción de nueva sede institucional a finalizarse el 2022.

2. **Se constituyeron los siguientes Comités:**
- Comité de Alta Dirección.
- Comité de políticas de supervisión.
- Comité de transformación digital.
- Comité de desarrollo organizacional y capital humano.
- Comité de estabilidad financiera.
- Comité de estándares de regulación financiera.
- Comité de inclusión financiera.
- Comité directivo de control interno, riesgos y cumplimiento.
- Comité directivo de tecnologías de información.

3. **Se efectuaron cambios en la estructura organizacional:**
- Se crearon la Gerencia de Gestión Humana, la Superintendencia Adjunta de Cooperativas y la Gerencia de Asuntos Internacionales y Comunicaciones.

4. **Se ha avanzado con los lineamientos preliminares relativos a la:**
- Cultura de Integridad, la cual está basada en altos estándares acordes con el rol de autoridad supervisora y la relevancia de los mandatos legales; y en consistencia con las directrices aplicables al sector público en general.

5. **Se implementaron los siguientes sistemas, aplicativos, herramientas o módulos:**
- Sistema integrado de gestión.
- Mejoras en el aplicativo Sircon para una mejor gestión en la revisión, registro, estadísticas y/o aprobación de modelos de pólizas de seguro y las cláusulas generales de contratación.
- Modelo de gestión de servicios basado en la biblioteca de infraestructura tecnología de información
- Aula virtual para examen de postulantes a peritos valuadores - persona natural.
- Sistema de citas para postulantes al proceso de corredores de seguros - personas naturales.
- Aplicativo para el proceso de evaluación a postulantes a corredores de seguros - personas naturales.
- Aplicativo para el proceso de certificación de regímenes especiales en el intercambio de información entre la SBS y las administradoras.
- Aplicativo el proceso de intercambio de información entre entidades públicas.
- Aplicativo para las solicitudes de acceso a la información.
- Notificación electrónica a los supervisados (SAFP), a través del portal del supervisado.
- Rediseño del aplicativo Secban a fin de ampliar la atención a los pedidos de las autoridades y entidades públicas.
- Aplicativo para la actualización de datos personales del maestro de deudores por empresas.
- Aplicativo para el procedimiento de cobranza coactiva.
- Sistema de Registro Coopac.
- Sistema de envío de información de las Coopac.
- Mejoras en la notificación electrónica a supervisados a través del portal del supervisado y mejoras en herramientas de gestión documental.
- Mesa de Partes Virtual para personas naturales, personas jurídicas, supervisados e instituciones en producción.
- Rediseño del portal web SBS con criterios de usabilidad para mejorar la experiencia del ciudadano.
- Rediseño de subportales de la SBS, creando el sitio web SBS para Ciudadanos.
- Página Covid-19: normas y recomendaciones en el marco del Estado Nacional de Emergencia.
- Publicación de opinión institucional sobre Proyectos de Ley en el portal de la SBS.
- Desarrollo e implementación de estrategia de comunicación digital para redes sociales institucionales.
- Desarrollo e implementación de una identidad visual de la SBS para piezas gráficas y audiovisuales y para productos digitales.
- Elaboración, distribución y publicación semanal del Boletín Informativo SBS.
- Rediseño de Intranet SBS para fortalecer la comunicación interna de la SBS.

6. **Fortalecimiento de relaciones interinstitucionales con:**

- Congreso de la República.
- Medios de comunicación.
- Ciudadanía.
- Organismos reguladores y supervisores.

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

2021 – 2025

Se han definido los objetivos estratégicos y sus respectivas líneas de acción, para el periodo 2021 –2025 que definirán los proyectos y acciones de los años siguientes.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

1

Cautelar que los sistemas supervisados gestionen prudentemente sus riesgos, sean íntegros, solventes y sostenibles

Las principales líneas de acción son:

Adaptar a la realidad del país estándares regulatorios internacionales reconocidos como una buena práctica por instituciones de renombre mundial y establecer el marco de resolución para las entidades supervisadas.

Realizar una supervisión especializada, integral y discrecional procurando que los supervisados sean sólidos, íntegros, inclusivos y gestionen apropiadamente sus riesgos, especialmente por la crisis sanitaria.

Monitoreo de riesgo sistémico y preparación para crisis: desarrollar un conjunto de acciones encaminadas a establecer un marco integral para la gestión de crisis del sistema financiero.

Supervisión de las Coopac registradas en concordancia con los principios cooperativos y con el apoyo del colaborador técnico.

Estabilidad financiera: monitoreo y respuesta a la crisis, supervisión (principalmente riesgos de crédito y de liquidez) y actualización de la normativa del manejo de empresas en problemas y los protocolos de intervención.

También se realizará esfuerzos importantes en los siguientes aspectos:

Sistema financiero

- Actualizar el mapa de indicadores macroprudenciales del sistema financiero y la metodología de estimación del nivel de endeudamiento de la cartera minorista y no minorista.
- Monitorear la implementación de nuevas tecnologías de productos y servicios financieros.
- Programa Fintech en cuanto a criptoactivos, openbanking, soluciones de pago, supervisión por actividades, mecanismos para innovación, identificación y contratación digital y Suptech, participando , de manera conjunta con la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV) y el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), en el proyecto de Ley para normar las actividades Fintech, en el que la SMV sería la entidad encargada de su regulación y supervisión.
- Fortalecimiento institucional para la gestión de crisis
- Mejoras al modelo endeudamiento minorista y no minorista: inclusión de nuevas variables, ejercicios de sensibilidad.
- Implementar Basilea: IRB de riesgo de crédito, NSFR, riesgo de mercado (SA y SA simplificado), provisiones, riesgo operacional, proporcionalidad (en ámbito regulatorio) y revisión del proyecto Pilar 3.
- Implementar modelos base y especializados para la supervisión del sistema financiero.
- Mejoras en la regulación y supervisión de prevención de manipulación de mercado e implementación de Trade Repositories para derivados.
- Propuesta de norma sobre agregación de datos y reporte de riesgos.
- Evaluar la implementación de un equipo sectorial de respuesta ante incidentes de ciberseguridad.

Sistema de seguros

- Implementar las centrales de riesgos / información: SCTR, Seguro vida ley, certificado contra accidentes de tránsito (CAT), seguro de crédito, cauciones y fianzas, SOAT y vehicular, seguro escolar, seguro de desgravamen y renta particular, entre otros.
- Implementar los modelos base y especializados para la supervisión del sistema de seguros Dashboard (supervisión de seguros, inversiones, actuarial, de reaseguros y Afocat).
- Mejorar el proceso de supervisión de inversiones de seguros, y la implementación de un software actuarial para la evaluación de reservas matemáticas de empresas de seguros y de un modelo de supervisión basado en riesgos para Afocat.
- Propuesta de norma para el seguro desgravamen.
- Mejoras al modelo de estrés en solvencia y liquidez; inversiones para el sistema de seguros; e, implementación del marco institucional de gobernanza del modelo.
- Nuevo software actuarial y software de reserva CAT.
- Nueva tabla de mortalidad.
- Propuesta de norma del sistema de prevención del LA/FT por segmento y la norma de contratación pública de corredores de seguros.
- Propuesta de norma de gestión de incidentes y gestión de CAT y tipificación de sanciones.

SPP

- Mejoras al modelo de estrés en solvencia y liquidez; inversiones para el SPP e implementación del marco institucional de gobernanza del modelo.
- Implementar recomendaciones metodológicas para la valorización de renta fija local.

Sistema cooperativo

- Implementar modelos bases y especializados para la supervisión.
- Implementar reporte de las Coopac a la Central de Riesgos.
- Consolidar sistemas para las Coopac (ISOC, IAOC, Sanciones, SIA Sacoop, mapas de vinculación, registros, entre otros).
- Implementar la supervisión de riesgo operacional para las Coopac nivel 3 y 2B; vinculación y grupo económico; tratamiento del patrimonio efectivo, supervisión consolidada para las Coopac nivel 3 y 2b; y conducta de mercado (gradualidad) para las Coopac nivel 3, 2b, 2a y 1.
- Implementar la supervisión de otros riesgos para las Coopac nivel 2a y 1.
- Divulgar la información financiera de las Coopac nivel 3, 2b, 2a y 1.

Transversales

- Aprobar las nuevas políticas de supervisión y normas internas, e implementación de indicadores y alertas.
- Consolidar inspecciones no presenciales incluyendo casos o regímenes especiales.
- Mejora continua del proceso de supervisión extra situ.
- Migración del sistema de generación de boletines de información estadística (sistema financiero, sistema de seguros y SPP).
- Ejercicio sectorial de continuidad del negocio 2022.
- Propuesta de norma de reclamos adaptada a nuevo entorno, con mejoras en la consistencia de la información (incluye al SPP).
- Mejora de información para la medición de la inclusión financiera.
- Implementar en Sucave los anexos requeridos por el Reglamento para la supervisión consolidada
- Propuesta de norma para la gestión de seguridad de la información y ciberseguridad.
- Propuesta de modificatoria del Reglamento de Auditoría Interna, el Reglamento de Auditoría Externa.
- Propuesta de norma para la autorización de empresas y representantes de los Sistemas Financiero y de Seguros.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2

Contribuir con la prevención y lucha contra el LA/FT

La principal línea de acción es continuar con la implementación de las recomendaciones del Informe de evaluación mutua del Grupo de Acción Financiera (GAFI), en el marco de las competencias de la SBS, para cumplir con los estándares internacionales establecidos por dicho organismo y que los países deben implementar para combatir el LA/FT.

Del mismo modo, se realizarán esfuerzos importantes en los siguientes aspectos:

- Continuar con la mejora de los procesos internos de la UIF-Perú y los sistemas relacionados con el oficial de cumplimiento, los sujetos obligados y los registros de operaciones de compraventa de divisas.
- Identificación, mitigación de riesgos LA/FT y enfoque de supervisión basado en riesgos.
  - Nueva evaluación nacional de Riesgos de LA/FT y monitoreo de riesgos identificados.
  - Riesgos LA/FT del Poder Judicial y evaluaciones sectoriales de riesgos las organizaciones sin fines de lucro.
- Gestión de la Información.
  - Implementar sistema para recepción del reporte de operaciones para tres sectores cada año.
  - Gestión de datos asegurando su calidad.
- Gestión de la Integridad.
  - Sistema de gestión de integridad y modelo de gobierno de control de acceso.
  - Gestión de riesgos internos y externos.
  - Gestión de información; clasificación, monitoreo y control de accesos.
- Transformación digital.
- Mejora de procesos y sistemas.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3

Cautelar que las empresas supervisadas implementen adecuadas prácticas comerciales respetando los intereses y los derechos de los consumidores.

La principal línea de acción es continuar mejorando la supervisión de la gestión de conducta de mercado fomentando que los supervisados procuren sanas prácticas comerciales alineadas a los intereses de la ciudadanía para incrementar la confianza en el mercado.

Del mismo modo, se realizarán esfuerzos importantes en los siguientes aspectos:

- Mejorar los servicios al ciudadano: rediseño de aplicativos; atención virtual especializada (SBS T-Conecta) y WhatsApp SBS; certificado de seguros de vida para personas vivas; sistema omnicanal para gestionar la atención del ciudadano y aplicativos del portal web e intranet SBS.
- Mejorar la información para la medición de la inclusión financiera.
- En el mercado de seguros:
  - Difusión de resultados sobre conocimiento, percepción, barreras de acceso y uso de los seguros.
  - Propuesta de políticas y mejoras regulatorias para impulsar el desarrollo de seguros privados de salud.
  - Desarrollo de metodología para la evaluación y diseño de un seguro obligatorio.
- Empoderamiento al consumidor:
  - Adecuación de los servicios de la SBS para competencias interculturales.
  - Implementación estrategia digital de educación financiera.
- Implementación de la estrategia nacional de inclusión financiera.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4

Cautelar el buen funcionamiento del SPP

Las principales líneas de acción son:

- Incrementar la cobertura previsional, propiciar mayor bienestar, beneficios y prestaciones para los afiliados y así reducir los costos.
- Optimizar el proceso de inversiones en cuanto a maximizar rentabilidad (alternativas de inversión y límites), minimizar costos (simplificación de la regulación), lineamientos de negociación, gobierno corporativo, conflicto de intereses e información al afiliado.
- Contribuir con la reforma del SPP.

Del mismo modo, se realizarán esfuerzos importantes en los siguientes aspectos:

- Evaluar mecanismos no convencionales o alternativos de recaudación de aportes previsionales.
- Ampliación de la cobertura previsional: aporte voluntario sin fin previsional e independientes.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5

Contar con personal altamente capacitado, comprometido y alineado a los valores institucionales para cumplir con los mandatos de la SBS

Las principales líneas de acción están relacionadas a:

- Implementar las mallas curriculares y la línea de carrera.
- Implementar un nuevo modelo de evaluación de desempeño.

Se realizarán esfuerzos importantes en los siguientes aspectos:

- Implementar el modelo de integridad institucional.
- En el Programa de Extensión, alineación a mallas curriculares SBS y framework ASBA / Basilea.
- Determinación de necesidades e implementación de programas formativos según modelo de gestión del desempeño y mallas curriculares SBS.
- Gestión integral del aprendizaje y conocimientos alineado a los mejores estándares de transformación digital.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 6

Contar con un diseño organizacional, procesos, tecnología e infraestructura que busquen la eficiencia y contribuyan al logro de las metas y la rendición de cuentas en la SBS

Las principales líneas de acción son:

- Fortalecer la gestión interna de la SBS aplicando el modelo de las cuatro líneas de defensa y la incorporación de comités directivos como órganos de gobierno.
- Transformación digital: desarrollar e implementar un Plan de Gobierno Digital.
- Aplicar metodologías ágiles para la gestión de procesos.

También se realizarán esfuerzos importantes en los siguientes aspectos:

- Finalizar la construcción de la sede institucional.
- Mejorar los procesos de explotación de data mediante la implementación de software de auto servicio para la preparación, exploración y visualización de datos, y de una solución tecnológica de gestión de metadatos en la plataforma de datos y analítica.
- Digitalizar las comunicaciones externas y el flujo documental interno.
- Capacidades para gestión, análisis y explotación de datos.
- Adopción de servicios en la nube.
- Migración a tecnología basada en web y desarrollo de aplicaciones móviles.
- Incorporación de nuevas tecnologías (BPMS, BD documentales, Blockchain).
- Implementación de modelo de servicio de atención al usuario.

ESTRATEGIA DE LA SBS EN EL CONTEXTO DEL ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL

EN EL 2020, EL PERÚ Y EL MUNDO TUVIERON QUE HACER FRENTE A UNA DE LAS MAYORES CRISIS DE LA HISTORIA, COMO CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA DEL COVID-19. Las diversas medidas implementadas por los gobiernos —confinamientos y restricciones de la actividad económica— para contener su propagación y sobrellevar esta crisis sanitaria, en medio de una gran incertidumbre, tuvieron un impacto en el producto bruto interno (PBI) global y, particularmente, en el PBI peruano. Según cifras oficiales, la economía peruana se contrajo 11,5%.

En este contexto, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) implementó políticas macroprudenciales que buscaron fortalecer el sistema financiero en su conjunto y, así, prevenir que los riesgos latentes provocaran un agudizamiento de la crisis económica. Las primeras medidas se enfocaron en facilitar liquidez al sistema financiero.

Con esa finalidad, la Superintendencia, en coordinación con el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), dispuso que los requerimientos mínimos del ratio de cobertura de liquidez en moneda nacional y extranjera fuesen temporalmente suspendidos. La medida permitió que el sistema financiero liberara los colchones de liquidez que mantenían las entidades y se pudiera hacer frente a potenciales necesidades de liquidez ante el estado de emergencia nacional. Esta medida fue acompañada de otras que dictó el BCRP; entre ellas, la reducción de la tasa de encaje en ambas monedas y del porcentaje de las obligaciones sujetas a encaje que, como mínimo, las entidades financieras deben mantener en la cuenta corriente en el ente emisor.

Según cifras oficiales, la economía peruana se contrajo

11.5%

De manera similar, para fortalecer el patrimonio de las entidades financieras, la SBS las exhortó a capitalizar las utilidades obtenidas en el ejercicio 2019. Esta medida permitía darle al mercado una señal clara de que el sistema financiero contaba con los colchones de capital necesarios para cubrir, de manera adecuada, los riesgos que enfrentaría en un futuro cercano. En respuesta a ello, la mayoría de las entidades financieras optaron por retener un porcentaje bastante mayor de sus utilidades, en comparación con lo observado en años anteriores. En paralelo, la Superintendencia facultó a las entidades financieras a disponer del patrimonio efectivo adicional acumulado por el componente de ciclo económico, de modo que pudieran afrontar pérdidas no esperadas en el contexto del estado de emergencia nacional. El colchón de capital por ciclo económico que las entidades financieras fueron acumulando, desde el 2012, como un requerimiento adicional al mínimo regulatorio, viene permitiéndoles absorber pérdidas, reprogramar créditos y otorgar nuevos créditos y así evitar el rompimiento de la cadena de pagos, sin tener la presión del capital regulatorio.

> Se dictaron medidas para favorecer el funcionamiento de los programas de Gobierno, creados con el objetivo de garantizar el financiamiento para capital de trabajo de las empresas del sector real y de las personas naturales con negocio, y para brindar alivio a los deudores, tanto personas naturales como micro y pequeñas empresas (mype), mediante la reprogramación de los créditos.

Con la finalidad de facilitar las reprogramaciones de créditos, se flexibilizaron los requerimientos de capital y provisiones. Así, se permitió que los factores de ponderación de los activos no se incrementaran por la ampliación del plazo de los créditos y que se otorgaran en el marco de las reprogramaciones, para evitar mayores cargas de capital. Además, al considerarse que las reprogramaciones no afectaban la calificación crediticia de los deudores, estas no tuvieron un impacto inmediato sobre el requerimiento de provisiones específicas.

Adicionalmente, se dictaron medidas para favorecer el funcionamiento de los programas de Gobierno, creados con el objetivo de garantizar el financiamiento para capital de trabajo de las empresas del sector real y de las personas naturales con negocio, y para brindar alivio a los deudores, tanto personas naturales como micro y pequeñas empresas (mype), mediante la reprogramación de los créditos. La SBS estableció que, a la parte de las exposiciones que cuenta con la cobertura de la garantía estatal, se le aplique, de manera excepcional, una tasa de provisión por riesgo de crédito de 0% y un factor de ponderación de 0% para efectos del cálculo del requerimiento de patrimonio efectivo por riesgo de crédito bajo el método estándar.

De otro lado, como parte de las políticas de carácter microprudencial, la SBS estableció medidas para evitar el rápido deterioro de la clasificación de los deudores y un incremento de los requerimientos de provisiones, situación que podría haber profundizado el impacto de las medidas dictadas por el Gobierno para hacer frente a la pandemia del covid-19 sobre el riesgo de crédito y la estabilidad financiera. De este modo, se facultó a las entidades financieras a reprogramar los créditos de clientes que presentaron problemas para cumplir sus pagos, mediante una evaluación individual en el caso de los créditos mayoristas, y por medio de reprogramaciones individuales y masivas, en el

ESTRATEGIA DE LA SBS EN EL MARCO DEL ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL

caso de créditos minoristas, siempre y cuando dichos problemas no obedecieran a dificultades estructurales en la capacidad de pago de los deudores y que estos se encontraran al día cuando se declaró el estado de emergencia nacional. Además, se facultó a las entidades supervisadas a mantener la situación contable y la clasificación crediticia de los deudores que presentaban atrasos al inicio del estado de emergencia nacional (inicialmente, por un plazo de 15 días, el cual fue extendido a 30 días), disposición que se mantuvo hasta agosto. Estas medidas requirieron un seguimiento cercano del supervisor, con el fin de evitar un incremento significativo del riesgo de crédito que pudiera conllevar al debilitamiento de la solvencia de las entidades financieras.

Con la finalidad de facilitar las transacciones de las personas durante el estado de emergencia nacional; en particular, para la disposición y el uso de los fondos otorgados o liberados por las leyes que emitieron el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República, la SBS dispuso una serie de medidas que mejoraron el uso de canales e instrumentos digitales. Por un lado, se ampliaron los límites aplicables a las cuentas de dinero electrónico simplificadas y a las cuentas básicas, tanto para cada transacción como para transacciones acumuladas y saldos consolidados de las cuentas; y, también, para las conversiones a dinero electrónico. Además, se facultó a los emisores de dinero electrónico a emplear los depósitos de disposición inmediata en empresas de operaciones múltiples clasificadas en la categoría A+, en lugar de la constitución de un fideicomiso, como una modalidad alternativa de garantía para el valor del dinero electrónico emitido. Tales medidas configuraron un escenario propicio para la inclusión financiera, considerando la menor preferencia por el uso de dinero en efectivo que se observó por la crisis sanitaria.

Durante el confinamiento, todas las entidades financieras continuaron operando y ofreciendo sus productos y servicios. Para ello, fueron claves la activación temprana de los comités de crisis, la habilitación del trabajo remoto para su personal crítico y la disponibilidad de los canales digitales de atención de los usuarios. Al inicio, se establecieron

> En línea con su compromiso de promover un trato adecuado a los usuarios, cautelando que se respeten y protejan sus derechos, la SBS dictó medidas en materia de conducta de mercado, con el objetivo de fortalecer la confianza en el sistema financiero, así como la estabilidad e integridad financieras.

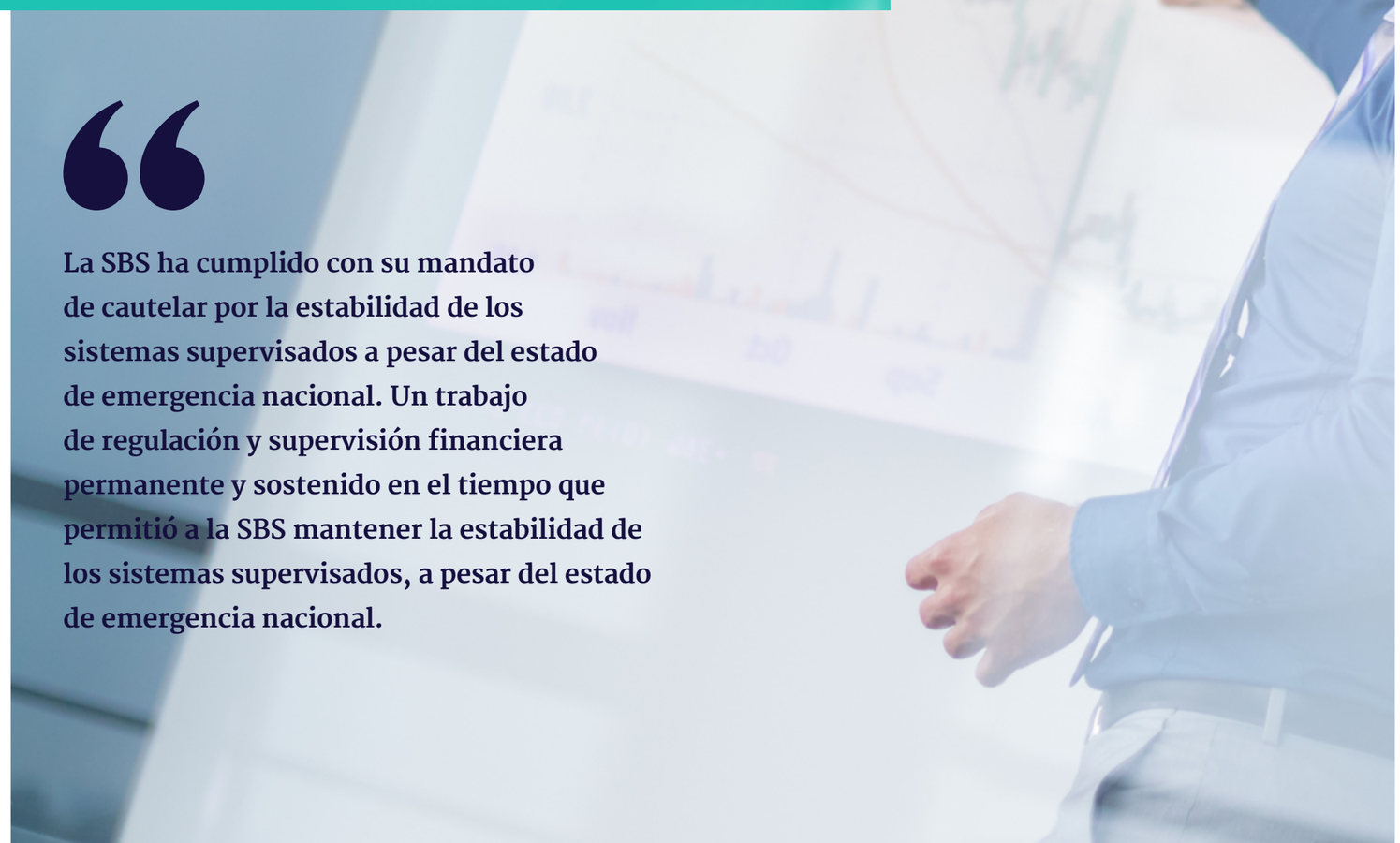
algunas medidas para suspender el cómputo de plazos administrativos y simplificar los requerimientos de información. Adicionalmente, se requirió a estas entidades a adoptar medidas que permitieran asegurar los servicios subcontratados y prepararse adecuadamente para hacer frente a la mayor demanda de los canales digitales de atención y los potenciales ciberataques; y se les facultó a modificar los horarios de atención al público de sus oficinas y a establecer protocolos de seguridad sanitaria para el desarrollo de actividades y atención a los usuarios. Aunque las entidades financieras no contaban con medidas específicas ante un escenario de pandemia, venían preparándose, desde hacía varios años, para responder ante eventos extremos, mediante la realización de ejercicios sectoriales de continuidad operativa. Estos permitieron el desarrollo de estrategias, como el trabajo remoto, planes de sucesión de personal y entrenamientos cruzados de funciones, así como la reducción de puntos únicos de falla en las cadenas de suministros y la definición de proveedores alternos, entre otras.

En línea con su compromiso de promover un trato adecuado a los usuarios, cautelando que se respeten y protejan sus derechos, la SBS dictó medidas en materia de conducta de mercado, con el objetivo de fortalecer la confianza en el sistema financiero, así como la estabilidad e integridad financieras. Por ello, modificó el Reglamento de Gestión de Conducta de Mercado del Sistema Financiero, con el fin de incorporar reglas mínimas para el adecuado tratamiento de aquellos usuarios que presentaran o pudieran presentar dificultades temporales para el pago de sus créditos debido al estado de emergencia nacional. Estas reglas mínimas abarcan todo el proceso de la reprogramación, aseguran su cumplimiento por parte de las entidades financieras y facilitan su comprensión. A partir de la citada modificación, se requirió a las entidades que implementaran mejoras en las políticas y procedimientos internos relacionados con la debida transparencia y la comunicación con los usuarios; a establecer canales de fácil acceso para recibir y atender sus solicitudes; asimismo, a informar y orientar a los usuarios sobre cada alternativa ofrecida y, en el caso de que se decidieran por alguna de ellas, obtuvieran su consentimiento. Además, se requirió el debido seguimiento y monitoreo periódico; de modo que, de identificarse usuarios con nuevas dificultades, se evaluara la posibilidad de ofrecerles un tratamiento adicional.

De manera similar, considerando el impacto económico del covid-19 y la eventual dificultad de los usuarios para cumplir el pago de sus obligaciones crediticias, la Superintendencia incorporó medidas adicionales para el producto tarjeta de crédito; por ejemplo, se estableció que las entidades emisoras ofrezcan al menos una tarjeta de crédito que no incluya el cobro de la comisión por concepto de membresía anual, la cual corresponde a un servicio adicional y complementario.

1

SISTEMA FINANCIERO



La SBS ha cumplido con su mandato de cautelar por la estabilidad de los sistemas supervisados a pesar del estado de emergencia nacional. Un trabajo de regulación y supervisión financiera permanente y sostenido en el tiempo que permitió a la SBS mantener la estabilidad de los sistemas supervisados, a pesar del estado de emergencia nacional.

1 SISTEMA FINANCIERO

> Uno de los principales objetivos de la SBS fue asegurar la continuidad de negocio de las entidades bajo su supervisión y la atención adecuada de los usuarios.

EL AISLAMIENTO SOCIAL, MEDIDA DECRETADA POR EL GOBIERNO PARA FRENAR EL CONTAGIO DEL COVID-19, restringió la actividad productiva del país y la movilización de recursos, lo que limitó a las entidades financieras a contar con el personal, propio o de terceros, para operar con normalidad. En ese primer momento, uno de los principales objetivos de la SBS fue asegurar la continuidad de negocio de las entidades bajo su supervisión y la atención adecuada de los usuarios.

La respuesta incluyó la autorización para que las entidades financieras redujeran sus horarios de atención; asimismo, la reducción de la carga de información periódica que deben remitir —restringida a lo mínimo necesario— y la postergación de la entrada en vigencia de algunas disposiciones normativas, entre otras, con el objetivo de que se centren en la continuidad de sus principales procesos y en la atención de los usuarios, incluyendo los servicios de pagos y el acceso a los fondos de ayuda otorgados por el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República. Se requirió, además, la adopción de protocolos de salud, en cumplimiento del párrafo 5.1 del artículo 5 del Decreto Supremo 083-2020-PCM.

En el ámbito de la regulación, se emitieron normas destinadas a facilitar la oferta y el uso de los medios electrónicos para la realización de transacciones financieras, como la ampliación de los límites aplicables a las operaciones con cuentas de dinero electrónico simplificadas[1], medida de carácter temporal para garantizar los fondos de dinero electrónico emitidos[2] y la ampliación de los límites aplicables a las cuentas de ahorro básicas[3]. Por su parte, el sistema financiero respondió de acuerdo con lo esperado, al poner en práctica lo requerido en la regulación de continuidad de negocios y lo aprendido en los ejercicios sectoriales de continuidad de negocios, que permitieron una adecuada respuesta de los comités de crisis y la habilitación del trabajo remoto.

1 Resolución SBS 1262-2020.
2 Resolución SBS 1354-2020 prorrogada hasta el 30 de junio de 2021, mediante Resolución SBS 3049-2020. Se establece que las empresas emisoras de dinero electrónico pueden emplear los depósitos de disposición inmediata en empresas de operaciones múltiples clasificadas en la categoría A+, como alternativa de garantía para el valor
3 Resolución SBS 1286-2020.

La pandemia del covid-19 y las medidas para contener su propagación ocasionaron una importante reducción de los ingresos de las familias y empresas, por lo que muchos deudores empezaron a enfrentar dificultades para cumplir con el pago de sus deudas. En este escenario, el principal riesgo que enfrentaba la estabilidad del sistema financiero[4] era el riesgo de crédito.

Así, reconociendo las limitaciones y la potencial afectación a los deudores, la SBS estableció una serie de disposiciones destinadas a facilitar la reprogramación de créditos, sin ser considerados refinanciaciones, lo cual permitió atenuar y diferir el impacto para los deudores y las entidades financieras[5]. Se facultó a las entidades financieras a modificar los contratos, con el fin de otorgar periodos de gracia y otras facilidades para el pago de obligaciones, de modo que alivien la carga financiera de los deudores y se eviten las moras. Se consideró la posibilidad de suspender el conteo de días de atraso, manteniendo la clasificación crediticia y la situación contable del crédito.

Cabe indicar que las entidades financieras podían reprogramar créditos de manera individual, cuando era posible contactar personalmente al deudor; y, de manera unilateral, cuando no era posible debido al aislamiento social decretado por el Gobierno (pudiendo ser revertida si el cliente no deseaba la reprogramación). Este último fue el caso de la mayoría de los créditos otorgados a la microempresa, tarjetas de crédito y otros créditos personales. De este modo, durante el estado de emergencia nacional, el cliente accedió a una reducción de sus cuotas o a un periodo de gracia que no ocasionó un deterioro de su clasificación e historial crediticio; mientras que las entidades financieras no se vieron afectadas por las mayores provisiones obligatorias y pudieron reconocer intereses devengados de operaciones reprogramadas.

Estas medidas, sin embargo, planteaban algunos retos, como que las provisiones regulatorias no llegasen a cubrir todo el riesgo de los deudores; que las reprogramaciones con periodos de gracia pudiesen dificultar el monitoreo del cliente en base a su comportamiento crediticio; que la limitación de la información de los clientes y la incertidumbre sobre sus flujos futuros pudiesen dificultar la evaluación de su capacidad de pago, entre otros. Por ello, se requirió a las entidades financieras a presentar un plan de gestión[6] con proyecciones para los años 2020 y 2021, que incorporase una evaluación del riesgo de impago de los créditos debido a la coyuntura, con la finalidad de diseñar estrategias y mecanismos para administrar la potencial cartera deteriorada, incluyendo la constitución de provisiones voluntarias y la puesta en marcha de acciones de fortalecimiento patrimonial, entre otras, que se estimen necesarias. Con la finalidad de asegurar un monitoreo cercano, respecto de la ejecución y el grado de avance del plan, se estableció que la gerencia debía informar al directorio, por lo menos, una vez al mes sobre su ejecución.

Asimismo, complementando lo requerido en el plan de gestión, la SBS requirió la incorporación de un ejercicio de suficiencia de capital 2021[7] para cuantificar las potenciales pérdidas que podrían afrontar las entidades financieras y el impacto en sus resultados y niveles de solvencia en el corto y mediano plazo, así como identificar las medidas que se adoptarían para mantener niveles patrimoniales que minimicen el riesgo de insolvencia y aseguren su viabilidad en el largo plazo.

A más de ocho meses de haberse declarado el estado de emergencia nacional, resultaba necesario que los estados financieros empezaran a reflejar adecuadamente el riesgo de la cartera reprogramada, pero a la vez preservando la estabilidad financiera. Por esta razón, en diciembre, se modificó el Reglamento para la Evaluación y Clasificación del Deudor y la Exigencia de Provisiones, a efectos de que las entidades financieras constituyan provisiones regulatorias para reflejar el mayor riesgo de las operaciones reprogramadas por la coyuntura, con un plazo de adecuación hasta diciembre de 2021[8].

4 El Fondo Monetario Internacional considera que un sistema financiero es estable si: 1) facilita la asignación eficaz de los recursos económicos, tanto geográficamente como en el tiempo, así como otros procesos financieros y económicos (como ahorro e inversión, préstamo y endeudamiento, creación y distribución de liquidez, fijación del precio de los activos y, en última instancia, acumulación de riqueza y crecimiento de la producción); 2) evalúa, valora, asigna y gestiona los riesgos financieros; y 3) mantiene su capacidad para desempeñar estas funciones, esenciales incluso cuando enfrenta shocks externos o un aumento de los desequilibrios.
5 Oficios múltiples 10997-2020, 11150-2020, 11170-2020, 12679-2020, 13195-2020, 13805-2020, 15944-2020 y 19109-2020.
6 Oficio Múltiple 13195-2020.
7 Oficio Múltiple 34786-2020.
8 Resolución SBS 3155-2020 y Oficio Múltiple 41970-2020.

BOX 1

Digitalización de los servicios financieros

El sistema financiero venía atravesando por un proceso de transformación digital en los últimos años. La pandemia del covid-19 impulsó este proceso. En el 2020, se incrementó significativamente el número de nuevos productos y cambios importantes implementados por las entidades del sistema financiero, pese a las limitaciones operativas de los primeros meses del estado de emergencia nacional (ver gráfico).

Las entidades financieras desarrollaron soluciones dirigidas a la apertura de cuentas de manera remota —bancarias y dinero electrónico—, al pago con códigos QR y tarjetas *contact less*, así como productos que permiten la transferencia de dinero y pagos utilizando solo un número y un teléfono celular. Se presentó, además, un incremento del número de transferencias interbancarias y de pagos virtuales[9], de 152% y 35%, respectivamente, con relación a 2019[10].

El desarrollo de servicios financieros digitales no implica únicamente cambios asociados a la tecnología, sino también a los procesos, estructura organizativa y personal, todo lo que expone a las entidades a más riesgos. Los principales son aquellos asociados a una mayor dependencia de servicios especializados provistos por terceros; a la seguridad de la información y ciberseguridad; y a la continuidad de las operaciones, fraudes y lavado de activos. Por ello, las entidades del sistema financiero deben contar con las capacidades necesarias para su adecuada gestión.

Ante esta situación, la labor de la SBS se ha enfocado en verificar que se identifiquen, evalúen, traten y monitoreen los riesgos asociados a los principales cambios que se llevaron a cabo en el 2020[11]. Del mismo modo, se intensificó la supervisión orientada a asegurar una adecuada gestión de los riesgos asociados a este tipo de iniciativas, incluidos aquellos esfuerzos asociados al proceso de transformación digital que vienen desplegando algunas entidades, aspectos que se prevé mantener en los próximos años.

Adicionalmente, se realizaron actividades orientadas a reforzar el marco regulatorio, a fin de ir ajustándolo al nuevo contexto. Se emitió el Reglamento para la Gestión de la Continuidad del Negocio, que busca reforzar la resiliencia del sistema financiero en el cada vez más complejo entorno de cambio; se modificó el Reglamento de Operaciones con Dinero Electrónico para modificar los límites y las garantías requeridas para su emisión, facilitando la implementación de soluciones basadas en dinero electrónico; y se publicó un proyecto de Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad, que incorpora requerimientos para fortalecer dicha gestión y establece condiciones mínimas que deben ser cumplidas en los procesos de autenticación digital y el procesamiento en la nube. Asimismo, se inició el estudio para el desarrollo de una norma sobre pilotos, que permita a las entidades financieras poner a prueba la viabilidad de sus iniciativas en los casos en los que, por ejemplo, no sea claro el marco regulatorio aplicable, dada la naturaleza innovadora del producto o servicio a ofrecer.

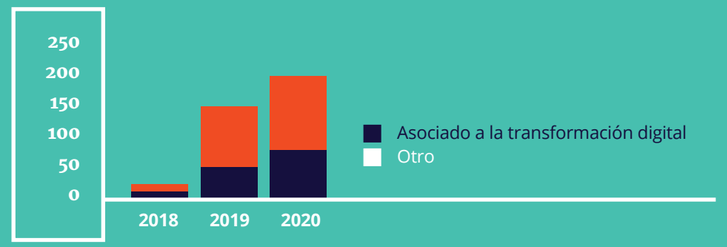
Finalmente, cabe precisar que, si bien la transformación digital es más evidente en el sistema financiero, no es ajena a los sistemas de seguros y privado de pensiones, por lo que los esfuerzos de supervisión y regulación que se vienen desplegando son aplicables a los tres sistemas supervisados.

Se presentó un importante incremento del número de transferencias interbancarias y de los pagos virtuales , reportándose un incremento de

152% y 35%

respectivamente, con relación a 2019.

Evolución de nuevos productos y cambios importantes en las empresas del sistema financiero 2018-2020



9 Pagos a través de internet, software corporativo, software de cliente, banca por teléfono y banca móvil.
10 Fuente: https://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/cuadros-de-la-nota-semanal.html
11 En el marco de la Circular SBS 165-2012, que requiere el envío de informes integrales de riesgo asociados a nuevos productos y cambios importantes implementados por las empresas.

BOX 2

Créditos reprogramados durante el estado de emergencia nacional

Ante las medidas de aislamiento social y restricción de las actividades económicas, decretadas por el Gobierno para hacer frente a la pandemia del covid-19, la SBS facultó a las entidades financieras a adoptar medidas de excepción, entre ellas, la reprogramación de créditos.

En marzo de 2020, las entidades financieras empezaron a reprogramar créditos, cuyo máximo nivel se registró en junio. En este periodo, el saldo de créditos reprogramados (S/ 130 000 millones) representó el 36% de la cartera bruta del sistema financiero y el número de deudores con créditos reprogramados (4,67 millones) era equivalente al 67% respecto del total de deudores. En los meses siguientes, los porcentajes en el saldo y número de deudores reprogramados fueron disminuyendo, debido al incremento de las cancelaciones y reversiones de los créditos reprogramados, así como por el otorgamiento de nuevos créditos.

Al 31 de diciembre de 2020, el saldo de créditos reprogramados ascendió a S/ 87 000 millones, monto equivalente al 23% del total de la cartera bruta del sistema financiero (S/ 371 000 millones); mientras que el número de deudores alcanzó 3,65 millones, el 40% del total de deudores (9,22 millones).

Por tipo de crédito, el saldo reprogramado de la cartera de la pequeña empresa representó el 37% del total, seguido del crédito de consumo (36%) y el crédito hipotecario (33%). En menor medida, se han reprogramado los créditos a la mediana empresa (24%), microempresa (18%), gran empresa (14%) y corporativos (4%).

En cuanto a los subsistemas, las empresas de desarrollo de la pequeña y microempresa (Edpyme) observaron una mayor proporción de sus carteras reprogramadas con 54% respecto de la cartera bruta total, seguidas de las cajas rurales de ahorro y crédito (CRAC), 48%; las financieras, 46%; y las cajas municipales de ahorro y crédito (CMAC), 36%. El saldo de créditos reprogramados de la banca múltiple representó el 21% de la cartera bruta total.

Al 31 de diciembre de 2020, el saldo de créditos reprogramados ascendió a S/ 87 000 millones, monto equivalente al

23%

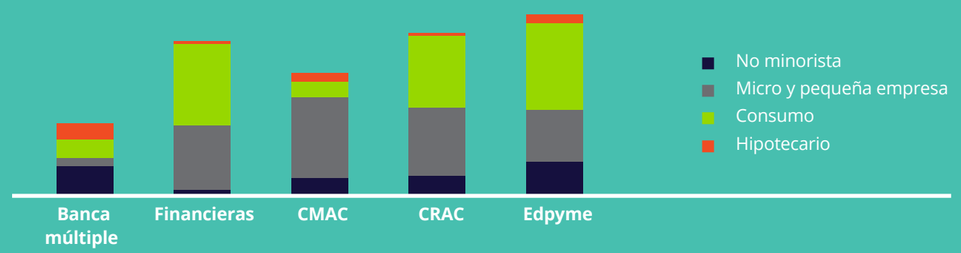
del total de la cartera bruta del sistema financiero.

Créditos reprogramados al 31 de diciembre de 2020

Tipo de entidad	Saldo capital			N° de créditos		
	Saldo capital total (En millones de S/)	Reprogramaciones totales		N° Deudores	Reprogramaciones totales	
		Saldo capital (En millones de S/)	Saldo (%)		N° Deudores	N° Deudores (%)
Banca múltiple	326 022	68 668	21%	4 313 802	1 741 086	40%
Financieras	13 341	6 078	46%	2 423 408	958 982	40%
CMAC	26 455	9 512	36%	1 761 338	655 317	37%
CRAC	2 394	1 159	48%	502 590	207 761	41%
Edpyme	2 550	1 366	54%	217 122	89 434	41%
TOTAL	**370 761**	**86 783**	**23%**	**9 218 260**	**3 652 580**	**40%**

Elaboración: SBS

Saldo reprogramado como porcentaje de la cartera total por subsistema (En porcentaje)



Elaboración: SBS

En una situación de incertidumbre, como la actual, generada por la pandemia del covid-19, las entidades financieras suelen restringir su apetito por el riesgo, reduciendo drásticamente el otorgamiento de nuevos créditos, coyuntura que, en ausencia de medidas gubernamentales, agravaría la situación económica. Por eso, los programas del Gobierno[12], cuyo objetivo era precisamente evitar el rompimiento de la cadena de pagos y que las empresas accedieran a créditos a tasas de interés más competitivas, permitieron que el flujo de nuevos créditos al sector real de la economía no se detuviera, gracias al otorgamiento de una garantía gubernamental

La SBS tomó medidas para contribuir a la implementación y funcionamiento de estos programas, y flexibilizó el tratamiento que aplican las entidades financieras a los créditos otorgados. Así, dispuso una tasa de provisión por riesgo de crédito de 0% y un factor de ponderación de 0% para el requerimiento de patrimonio efectivo por riesgo de crédito a la parte de los créditos que cuenta con la cobertura de la garantía gubernamental[13]. Además, en materia de responsabilidad de las entidades financieras, se establecieron requisitos a fin de implementar los controles adecuados y asegurar el cumplimiento de las condiciones de estos programas[14].

Las medidas de aislamiento social para contener el crecimiento de los contagios de covid-19, decretadas por el Gobierno, afectaron la actividad económica y los ingresos de las personas, y, por consiguiente, el sistema financiero se vio afectado. Ante esta situación, la SBS autorizó a las entidades financieras el uso de los colchones regulatorios de liquidez y capital, destinados precisamente a este tipo de escenario de estrés. Se suspendió, temporalmente, la aplicación de ratios mínimos de cobertura de liquidez[15] y se facultó el uso del patrimonio efectivo acumulado adicional por ciclo económico para absorber las pérdidas no esperadas u otorgar nuevos créditos[16]. Adicionalmente, con la finalidad de fortalecer el patrimonio efectivo de las entidades financieras, se exhortó a los miembros de las juntas generales de accionistas (JGA) a capitalizar el íntegro de las utilidades 2019[17].

En cuanto a su labor de supervisión, la SBS aplica un modelo que se sustenta en los principios básicos para una supervisión bancaria eficaz[18], los cuales se enfocan en la importancia de implementar una supervisión eficaz basada en el riesgo, así como en la necesidad de una intervención temprana y oportuna.

Al inicio del estado de emergencia nacional, se suspendieron, temporalmente, las inspecciones *in situ*[19] y se definieron tres lineamientos del trabajo institucional: 1) procurar una mejora significativa de la capacidad para trabajar a través de medios alternativos; 2) reducir el impacto operativo y los riesgos que enfrentan las entidades supervisadas, como consecuencia de nuestra actividad en regulación y supervisión; e 3) intensificar las inspecciones no presenciales.

En medio de una situación inédita y sin precedentes, la SBS priorizó determinadas actividades y acciones de supervisión para enfocarse en abordar los problemas iniciales de la crisis, como fueron las siguientes:

- Monitorear la capacidad operativa del sistema financiero en términos de agencias, cajeros automáticos, cajeros corresponsales, banca por internet, aplicaciones móviles, banca telefónica, etc., y su impacto en la oferta de productos y servicios específicos[20].
- Reforzar el monitoreo de la liquidez y los cambios en los patrones de retiro de efectivo e ingresos financieros.
- Seguimiento del riesgo de crédito de las carteras, incluida la presentación de informes específicos sobre la refinanciación y el reembolso de préstamos.
- Seguimiento del nuevo crédito otorgado para evaluar el impacto del aislamiento obligatorio en los flujos de crédito[21].

Ante la imposibilidad de realizar desplazamientos físicos, la labor de supervisión tuvo que adaptarse a un acelerado proceso de trasformación digital, un trabajo 100% remoto, uso intensivo del análisis de datos y un rebalanceo de la supervisión *extra situ* e *in situ*, con un mayor peso en la primera. Con el soporte de las herramientas tecnológicas, las inspecciones se han ejecutado de manera remota y se han enfocado en los aspectos que requieren estrictamente una verificación. La interacción y el contacto cercano y continuo con el directorio, la alta gerencia y los funcionarios de las entidades financieras se han intensificado y han resultado indispensables para acceder a información actualizada y prospectiva, con la finalidad de determinar problemas emergentes que deben ser gestionados oportunamente.

Pese a la incertidumbre sobre la reapertura de algunos sectores de la economía, la duración del estado de emergencia nacional, la eficacia de las medidas y el desempeño económico en general, el sistema financiero se ha mantenido resistente ante el choque adverso provocado por la crisis sanitaria. A febrero 2020, antes de la declaración del estado de emergencia nacional, el sistema financiero destacaba por su fortaleza, ya que reportaba adecuados niveles de capital, provisiones, liquidez y rentabilidad. Esta situación le permitió absorber el impacto inicial de la crisis, constituir provisiones voluntarias y capitalizar utilidades para absorber futuras pérdidas potenciales con colchones de capital[22], alcanzando un ratio de capital promedio de 15,6% a diciembre 2020, muy por encima del requerimiento mínimo legal de 10%.

Al cierre de año, los diferentes segmentos crediticios, que se han visto afectados por la crisis, venían mostrando una gradual recuperación con relación a los primeros meses del estado de emergencia nacional. Así, los desembolsos de créditos se vienen incrementando en los últimos meses, favorecidos, en parte, por los programas del Gobierno; las reprogramaciones están observando una reducción respecto de su nivel máximo de S/ 136 000 millones, registrado en junio de 2020; y el repago de los créditos también viene recuperándose, aunque aún sin retomar los niveles previos a la crisis.

Si bien la economía viene recuperándose, aún queda un largo camino por recorrer para alcanzar los niveles previos a la crisis. Por ello, en el 2021, los retos para el sistema financiero serán aún más grandes, en la medida en la que se mantiene la incertidumbre sobre la evolución del covid-19 en nuestro país. En este escenario, el foco de la supervisión de la SBS estará en el riesgo de crédito, la situación de los deudores pospandemia y su impacto en las reprogramaciones, la liquidez, las necesidades de capital, el seguimiento del uso de programas gubernamentales, los riesgos operacionales y tecnológicos asociados al proceso de transformación digital, sin descuidar la adecuada atención de los usuarios, la gestión de la conducta del mercado y la integridad del sistema financiero.

Con respecto a las cajas municipales de ahorro y crédito (CMAC), con el objetivo de continuar fortaleciendo el gobierno corporativo, se modificó el Reglamento para la Elección de los Representantes al Directorio de las CMAC[23], a fin de realizar precisiones con relación a las definiciones, actuación del director alterno, requisitos, documentación, procedimiento de designación y plazo de duración del cargo del director de los representantes de los pequeños comerciantes y productores.

Ante las medidas adoptadas por el Gobierno para hacer frente a la pandemia del covid-19 y el impacto de estas en la operatividad de estas entidades, la SBS modificó el Reglamento de Participación de las CMAC en la Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado y las normas especiales para la implementación de la Ley que modifica y fortalece el funcionamiento de las CMAC[24]. Adicionalmente, se incorporaron modificaciones en materia del cumplimiento de los estándares vinculados al buen gobierno corporativo y la gestión de riesgos de las CMAC, requisitos que determinan la participación de estas entidades en el mecanismo de Obras por Impuestos, así como el porcentaje de capitalización de utilidades de cada ejercicio que corresponde a los concejos municipales.

Finalmente, considerando que es función de la SBS preservar la estabilidad financiera y proteger a los depositantes, era necesario evaluar el impacto de las iniciativas del Congreso de la República relacionadas al sistema financiero. Si bien dichas iniciativas buscaban ayudar a los deudores perjudicados por la paralización de la economía, podían terminar afectando seriamente la estabilidad del sistema financiero.

Se evaluaron las iniciativas de moratorias y/o congelamientos de pagos o periodos de gracia generalizados, y de límites a las tasas de interés, determinando que estas podrían terminar asfixiando a un grupo significativo de entidades financieras y ocasionar situaciones de insolvencia que afectaría a los depositantes. Asimismo, este tipo de medidas restringiría el acceso a financiamiento, principalmente a los sectores más vulnerables, ocasionando una recesión más profunda.

12 Reactiva Perú y los fondos de apoyo empresarial a las mypes (FAE-MYPE), agro (FAE-Agro) y turismo (FAE-Turismo).
13 Resoluciones SBS 1314-2020, 1315-2020 y 2154-2020.
14 Oficios Múltiples 13652-2020 y 17555-2020.
15 Oficio Múltiple 11148-2020.
16 Resolución SBS 1264-2020.
17 Oficio Múltiple 11220-2020.
18 Comité de Supervisión Bancaria de Basilea – septiembre 2012.
19 En el caso del sistema financiero, se realizaban alrededor de 60 inspecciones (visitas de campo) al año.
20 Debido a las restricciones de movilidad impuestas, al principio el personal de la sucursal tenía problemas para llegar a sus centros de trabajo y los proveedores de servicios -como las empresas de TI y la banca telefónica- también se vieron afectados porque inicialmente no figuraban como sectores prioritarios.
21 Durante las primeras semanas del aislamiento social, se reportó una reducción en el flujo de los créditos nuevos, los cuales se recuperaron, hasta cierto nivel, gracias al otorgamiento de garantías en el marco de los programas del Gobierno.
22 Al 31 de diciembre de 2020, el sistema financiero mantenía provisiones adicionales por S/ 7721 mil millones y capital adicional por S/ 25 254 mil millones para cubrir futuros deterioros de cartera y afrontar potenciales contingencias.
23 Resolución SBS N° 1993-2020.
24 Resolución SBS N° 3301-2020.

BOX 3

Solvencia del sistema financiero

Como respuesta al impacto de la pandemia del covid-19, desde marzo 2020, la SBS dispuso una serie de medidas dirigidas a cautelar la solvencia del sistema financiero, entre ellas:

a. Permitir que las entidades financieras realicen reprogramaciones de créditos y que otorguen créditos con garantías de los programas del Gobierno sin mayores cargas de capital.
b. Disponer del patrimonio efectivo adicional acumulado por el componente de ciclo económico para afrontar pérdidas no esperadas provocadas por la coyuntura.
c. Ampliar, en un año, el plazo de autorización para el uso del método estándar alternativo para el cálculo del requerimiento de patrimonio efectivo por riesgo operacional[25].
d. Exhortar a las juntas generales de accionistas (JGA) a que capitalicen las utilidades del ejercicio 2019[26] para fortalecer el patrimonio.

Las tres primeras medidas estaban destinadas, principalmente, a asegurar el flujo de créditos a la economía y apoyar su reactivación, evitando el rompimiento de la cadena de pagos. Con el fin de neutralizar el incremento del requerimiento de patrimonio efectivo por riesgo de crédito, que podría haber ocasionado las modificaciones contractuales de los créditos reprogramados al extender los plazos de las operaciones, se modificaron las ponderaciones de los créditos de consumo e hipotecarios[27]. Asimismo, el uso del patrimonio efectivo adicional acumulado por el componente de ciclo económico (S/ 4 400 millones al 31 de enero de 2020) permitía a las entidades financieras absorber pérdidas u otorgar nuevos créditos sin la presión del capital regulatorio, hasta por aproximadamente S/ 40 000 millones.

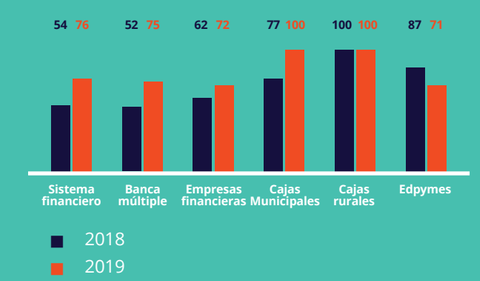
La cuarta medida estaba destinada a cautelar la solvencia y estabilidad del sistema financiero, dando una señal al mercado de que se contarían con los colchones de capital necesarios para una adecuada cobertura de los riesgos a enfrentarse en los meses siguientes. Así, el sistema financiero, en su conjunto, capitalizó el 76% de las utilidades generadas en el año 2019 (54% de las utilidades de 2018). Adicionalmente, algunas entidades aprobaron aumentos de capital, por parte de sus accionistas, o emitieron deuda subordinada.

Desde marzo 2020, el sistema financiero ha realizado aportes de capital por S/ 256 millones y ha comprometido, al menos,

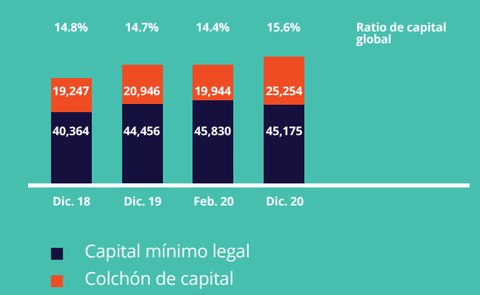
s/ 425 millones

adicionales para el año 2021.

Capitalización de utilidades



Capital (S/ millones)



Desde marzo 2020, el sistema financiero ha realizado aportes de capital por S/ 256 millones y ha comprometido, al menos, S/ 425 millones adicionales para el año 2021. Además, se autorizaron solicitudes por S/ 5 571 millones de deuda o préstamos subordinados, estando S/ 784 millones adicionales en evaluación al cierre del año.

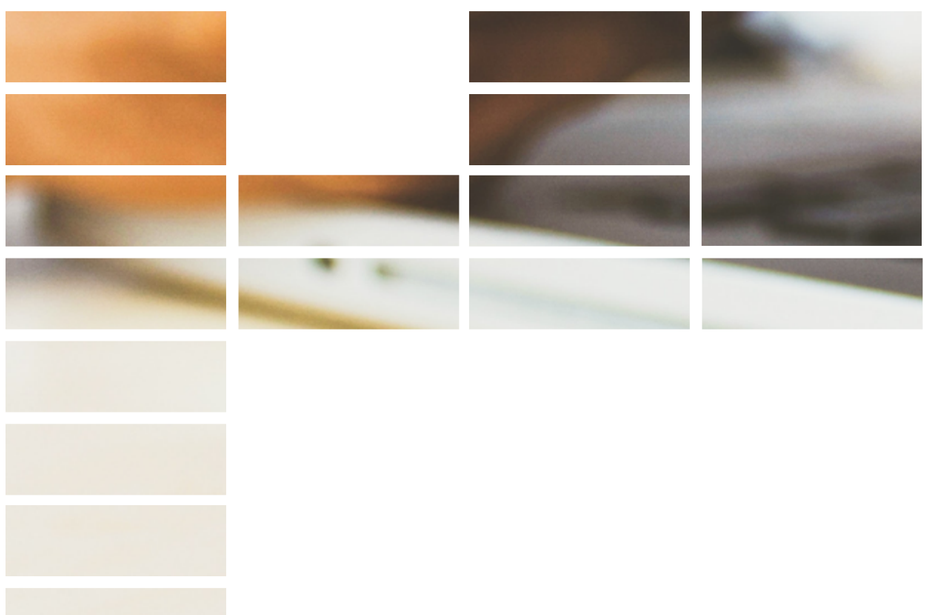
Finalmente, dada la magnitud del impacto de la pandemia del covid-19 sobre los resultados de las entidades del sistema financiero y el riesgo crediticio de sus portafolios, la SBS dispuso[28], con carácter excepcional y sujeto a autorización, que estas entidades puedan reducir su capital social, reserva legal y/u otras cuentas patrimoniales, con el objetivo de constituir provisiones para su cartera crediticia afectada por la coyuntura, siempre y cuando, cumplan con las siguientes condiciones: (i) presentar pérdidas netas o una utilidad neta al cierre del ejercicio 2020 que represente menos del 10% de la utilidad neta del año 2019; (ii) mantener una holgura mínima de 150 puntos básicos respecto a su límite ajustado al perfil de riesgo, luego de producida la reducción patrimonial; (iii) formalizar un acuerdo de capitalización por el 100% de las utilidades del año 2020 y, por lo menos, del 80% de las utilidades del 2021; y, (iv) las provisiones que se constituyan contra cuentas patrimoniales no podrán ser revertidas (únicamente reasignadas).

Las solicitudes presentadas por las entidades financieras vienen siendo evaluadas, teniendo en cuenta las particularidades de la solicitante, las condiciones establecidas por la SBS y su capacidad de generación de utilidades y compromiso de fortalecimiento patrimonial, tanto histórica como proyectada.

25 Resolución SBS N° 1265-2020.
26 El Poder Ejecutivo, a través del Decreto de Urgencia N° 053-2020 del 5 de mayo, dispuso la capitalización del 100% de las utilidades del año 2019 obtenidas por las CMAC y las cajas municipales de crédito popular, entidades de naturaleza pública, considerando las limitaciones de la capacidad de su principal accionista de realizar aportes de capital en efectivo.
27 Resolución SBS N° 1264-2020.
28 Oficio Múltiple N° 42138-2020.

2

SISTEMA ASEGURADOR



Durante el 2020 y en el marco de la crisis sanitaria, la SBS tuvo una actuación rápida para dictar medidas que aseguraron la continuidad de negocio en la institución, en las entidades supervisadas y en la atención de sus clientes y usuarios.

2

SISTEMA ASEGURADOR

> Se implementaron, también, soluciones tecnológicas que permitieron a la SBS continuar los procesos de supervisión de las compañías de seguros de forma remota, así como seguir cumpliendo su función de preservar la solvencia del sistema y proteger a los asegurados.

AL CIERRE DEL 2020, EL SECTOR ASEGURADOR ESTABA FORMADO POR 18 EMPRESAS, de las cuales cuatro se dedicaban exclusivamente a los ramos de vida, siete a los ramos generales y siete a ambos ramos. Se debe indicar que, mediante las resoluciones SBS 1749-2020, del 1 de julio, y 3286-2020, del 28 de diciembre, se autorizó a Rigel Perú S. A. Compañía de Seguros de Vida y a Coface Seguro de Crédito Perú S. A., respectivamente, su disolución y posterior liquidación voluntaria. Ambas solicitudes respondieron a la estrategia de sus accionistas, previa a la pandemia del covid-19.

Las medidas de aislamiento social y la restricción de las actividades económicas, decretadas por el Gobierno para hacer frente a la crisis sanitaria, plantearon retos a la SBS y a las compañías de seguros. Así, se emitieron oficios y resoluciones para aprobar medidas que tuvieron como objetivo atenuar el impacto de la crisis en las empresas del sector asegurador. Se postergaron las fechas de presentación de diversos reportes; se flexibilizaron las reglas para la constitución de provisiones por impago de las primas y para las comunicaciones vinculadas al aviso de siniestros, priorizando las correspondientes a asistencia médica y fallecimiento; se detuvo el conteo de los plazos administrativos; y se dictaron medidas excepcionales y temporales relacionadas a la gestión de las inversiones, con el objetivo de facilitar la administración de la liquidez de las aseguradoras y evitar que la volatilidad temporal de los mercados financieros local e internacional afectara su situación financiera.

18 **AL CIERRE DEL 2020, EL SECTOR ASEGURADOR ESTABA FORMADO POR 18 EMPRESAS,**

4 **EMPRESAS ASEGURADORAS EXCLUSIVAS A RAMOS DE VIDA**

7 **EMPRESAS ASEGURADORAS SE DEDICAN A RAMOS GENERALES**

7 **EMPRESAS ASEGURADORAS SE DEDICAN A AMBOS RAMOS**

Se implementaron, también, soluciones tecnológicas que permitieron a la SBS continuar los procesos de supervisión de las compañías de seguros de forma remota, así como seguir cumpliendo su función de preservar la solvencia del sistema y proteger a los asegurados. Esta mayor exigencia tecnológica representó una mayor carga de trabajo para las áreas encargadas de los sistemas de las aseguradoras y de la Superintendencia, lo cual determinó que la implementación de las centrales de riesgos de seguros avanzara a un ritmo menor. En el caso de las centrales de información del seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT) y vehicular, y del seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR), las aseguradoras se dedicaron a remitir la información histórica, y se trabajó en el desarrollo de los módulos de consulta del historial de pólizas adquiridas y siniestros, los cuales se espera que estén disponibles en el 2021.

Asimismo, se emitió la Circular S-671-2020, referida a la central de información sobre el seguro de vida ley, mediante la cual se reguló la obligación de las compañías de seguros de reportar, periódicamente, información para el desarrollo de la base de datos de las pólizas y certificados de este tipo de cobertura. Esta iniciativa permitirá acceder a información detallada sobre los contratantes (empleadores), coberturas adicionales, trabajadores y extrabajadores expuestos, así como a información sobre la siniestralidad de este seguro obligatorio, que está regulado por el Decreto Legislativo 688, Ley de Consolidación de Beneficios Sociales y sus ormas modificatorias.

En relación con la supervisión actuarial, se inició la implementación de un software actuarial como herramienta de supervisión para la modelación de flujos de pasivos de los seguros de vida —sistema privado de pensiones (SPP), SCTR, vida tradicional y vida con ahorro y/o inversión—. Esta herramienta permitirá realizar, de manera más eficiente, la supervisión del cálculo de las reservas matemáticas, tanto de la perspectiva del balance contable como del balance económico, y evaluar el impacto sobre el capital basado en riesgos. Además, se continuó trabajando en el perfeccionamiento de la propuesta normativa que establece lineamientos para la constitución de la reserva matemática de los seguros de vida de largo plazo —distintos al SPP y SCTR—, lo cual incluyó la renta particular, tomando en cuenta los comentarios y sugerencias recibidos durante el periodo de consulta de dicha propuesta.

Asimismo, se trabajó un proyecto normativo de calce integral de activos y pasivos, para establecer los lineamientos aplicables a todas las ramas de negocio de una compañía de seguros y gestionar los distintos riesgos de *asset liability management* (ALM). Finalmente, con respecto a la gestión actuarial, se evaluaron los informes de la función actuarial y la función de gestión de riesgos técnicos, presentados por las aseguradoras, con la finalidad de que las funciones de control se llevaran a cabo de manera efectiva.

En materia de inversiones, cuyo objetivo principal es el respaldo de obligaciones con los asegurados, se registró un crecimiento cercano al 12%[29] respecto del año anterior, superando los S/ 50 000 millones, pese al contexto de incertidumbre generado por la pandemia del covid-19.

Los esfuerzos se orientaron a la mejora de los procesos de supervisión aplicados a los portafolios de las aseguradoras, a través de la implementación y monitoreo periódico de un conjunto de indicadores definidos con visión prospectiva y de carácter prudencial (de tipo *stress test*), con miras a prevenir, de manera temprana, situaciones que pudieran afectar, de forma crítica, el adecuado respaldo de las obligaciones técnicas y el cumplimiento de los requerimientos patrimoniales.

En esa misma línea, se continuó la implementación del sistema informático desarrollado *in house* y especializado en la supervisión de inversiones, iniciándose su segunda fase. Sobre la base de lo avanzado, se implementaron tableros de control en tiempo real (en el *datawarehouse* SBS) que permiten acceder a información sobre el portafolio de inversiones, indicadores de cumplimiento normativo y supervisión basada en riesgos.

La supervisión de las operaciones de reaseguros se centró en el monitoreo continuo de la calificación de fortaleza financiera de los reaseguradores extranjeros y en el cumplimiento oportuno de sus obligaciones con el sistema asegurador nacional, respecto de su participación en los siniestros ocurridos, considerando el escenario económico internacional ocasionado por la pandemia del covid-19. En este sentido, la evaluación del riesgo de liquidez por reaseguro se realizó mensualmente, a través de la elaboración de matrices de transición de clasificaciones, el análisis de los importes por cobrar y fechas de registro de las cesiones de siniestros al reaseguro y su pago respectivo, y la revisión de los indicadores financieros relacionados a los activos recuperables por reaseguros. Asimismo, se evaluó la correcta aplicación de los programas de reaseguro para calcular la reserva de primas no devengadas cedida, que afecta directamente a la reserva de riesgos en curso; de esta forma, se coadyuva a la verificación de la suficiencia de reservas técnicas que estiman las compañías de seguros para afrontar siniestros futuros.

Con la finalidad de dotar a la SBS de las herramientas necesarias para la supervisión de la constitución de la reserva de riesgos catastróficos, debido a la alta exposición del Perú ante los riesgos de terremoto y tsunami por su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico, se llevó a cabo el proyecto de desarrollo e implementación de un sistema informático que permite aplicar la metodología contenida en las nuevas bases técnicas para la estimación de pérdidas frente a dichos riesgos, con la participación del Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres (Cismid/UNI). Esta alta especialización en la medición y cálculo de pérdidas estimadas, para las carteras de seguros a nivel nacional, permitirá garantizar la suficiencia de las reservas técnicas y coberturas de reaseguros requeridas para enfrentar el impacto de eventos catastróficos en el país; y, además, facilitará la revisión y control de calidad de la información de los bienes asegurados contra riesgos catastróficos con la que deberán contar las aseguradoras.

En cuanto a la intermediación de reaseguros, el enfoque de la supervisión se dirigió a verificar el cumplimiento de las disposiciones aprobadas por el Reglamento de Supervisión y Control de los Corredores de Reaseguros (Resolución SBS 810-2019), tales como los requerimientos hacia el directorio, el contenido del código de ética y conducta sobre las actividades permitidas y prohibiciones en la intermediación de reaseguros, el registro contable de las primas y siniestros recibidos por su actividad y el reporte de información enviado a la Superintendencia.

En materia de supervisión de intermediarios y auxiliares de seguros, en el contexto del estado de emergencia nacional, se aplicó una estrategia de supervisión que permitió verificar, de manera remota, el cumplimiento de las disposiciones y principios del Reglamento de Supervisión y Control de Corredores y Auxiliares de Seguros. Las inspecciones estuvieron enfocadas, principalmente, en determinar el cumplimiento de aspectos de la gestión de la conducta de mercado y de la transparencia en la intermediación de seguros, de acuerdo con lo dispuesto por la International Association of Insurance Supervisors (IAIS) en sus principios básicos de seguros 18 y 19, correspondientes a intermediarios y conducción del negocio.

Como parte de la mejora continua de la supervisión *extra situ*, se viene desarrollando el modelo de supervisión basado en riesgos, alineado a los mejores estándares internacionales de supervisión. Este modelo permite la evaluación integral de los riesgos más relevantes de los intermediarios y auxiliares de seguros e incorpora indicadores de riesgo diferenciados por línea de negocio y actividades principales, así como criterios para evaluar la conducta de mercado. De esta forma, se asegura un adecuado alcance y nivel de eficiencia de la supervisión a este segmento del sistema asegurador.

En el caso de las asociaciones de fondos regionales contra accidentes de tránsito (Afocat), se emitieron medidas de excepción, como la modificación de los parámetros de adecuación para la constitución del fondo de solvencia y la ampliación del cronograma establecido en el Reglamento del Fondo de Solvencia para las Afocat, con la finalidad de evitar problemas en la constitución de dicho fondo. Asimismo, se aprobó el Reglamento para la Administración Directa del Excedente del Fondo para las Inversiones de las Afocat (Reglamento de excedentes Afocat), en el que

En materia de inversiones, cuyo objetivo principal es el respaldo de obligaciones con los asegurados, se registró un crecimiento cercano al 12% respecto del año anterior, superando los

S/ 50 000 millones,

pese al contexto de incertidumbre generado por la pandemia del covid-19.

29 Crecimiento anualizado basado en información al cierre de noviembre de 2020, considerando solo inversiones elegibles aplicadas al respaldo de obligaciones técnicas.

se dispuso, transitoriamente, el uso de excedentes para el pago de gastos administrativos efectuados durante el estado de emergencia nacional.

Se continuó la evaluación del correcto cálculo de los componentes del fondo de solvencia de las Afocat, se comunicaron las diferencias encontradas y se activaron las medidas necesarias en situaciones de déficit del fondo. Se continuó, asimismo, la evaluación de las notas técnicas, con la finalidad de verificar el contenido mínimo de la información que deben acreditar estas entidades para sustentar adecuadamente el aporte cobrado a sus asociados. Además, se implementó el envío de información a la Superintendencia con relación a la gestión del riesgo técnico.

En el Reglamento de excedentes Afocat, se establecieron los requisitos para que estas entidades soliciten una autorización para el uso de los excedentes en inversiones vinculadas con actividades relacionadas al objetivo del fondo de solvencia; y se reconocieron las inversiones de los excedentes del fondo en activos inmuebles, vehículos de intervención rápida, equipos y sistemas informáticos antes de la entrada en vigor del referido reglamento. Asimismo, se prosiguió el desarrollo de proyectos normativos para la mejora de la gestión de los principales procesos de las Afocat, tales como la emisión de certificados de accidentes de tránsito (CAT) y la atención de siniestros; y para el requerimiento de la información necesaria con miras al desarrollo de una central de información de los CAT emitidos y los vehículos siniestrados.

Con la finalidad de fortalecer la capacidad de la SBS para evaluar los riesgos emergentes y entender cómo impactan en las aseguradoras, se reforzó el sistema de explotación y análisis de datos, mediante el traslado de los principales anexos y reportes que son remitidos por estas entidades a modelos base y especializados. Esto permitió desarrollar una primera versión de los tableros de control que ayudarán a identificar, de forma más rápida y eficiente, la situación de las compañías de seguros y Afocat.

Se continuó trabajando con las asociaciones regionales e internacionales de supervisores de seguros, con el fin de compartir experiencias, apoyar y aprender de sus colegas supervisores; y, de esta manera, elevar los estándares de supervisión en el ámbito internacional. La SBS mantuvo la vicepresidencia de la Asociación de Supervisores de Seguros de América Latina (Assal) y el cargo de representante de la región en el comité ejecutivo de la IAIS.

BOX 4

Desarrollo del modelo de capital basado en riesgos para las compañías de seguros

Como parte de su misión, la SBS busca preservar la estabilidad financiera del sistema de seguros y vela por que las entidades que participan sean sólidas, solventes y sostenibles en el tiempo, de modo que puedan cumplir las obligaciones y compromisos que contraen con sus asegurados.

Una de las herramientas más utilizadas por los reguladores, para preservar la solvencia de las empresas supervisadas, es el establecimiento de requerimientos de capital sensibles al riesgo. Asimismo, la International Association of Insurance Supervisors (IAIS) recomienda establecer requerimientos de capital en base a los riesgos reflejados, tanto en el activo como en el pasivo de las empresas de seguros, así como determinar las fuentes de capital para cubrir dichos riesgos.

El modelo de capital basado en riesgos (CBR), propuesto para las compañías de seguros del Perú, se basa en una estructura de tres pilares: pilar de requerimientos de capital (pilar cuantitativo); pilar de gobierno corporativo y gestión de riesgos; y pilar de disciplina de mercado. Mediante este modelo, también se definen los fondos propios con los que una aseguradora podrá cubrir sus riesgos. Se espera, a partir de los resultados de los estudios de impacto cuantitativos en los que participarán las aseguradoras, establecer un esquema de capitales mínimos del pilar 1.

El proyecto de CBR se inició en el año 2013, cuando la SBS emitió normativas para la medición de riesgos de mercado, con fines de gestión interna, basándose en el esquema regulatorio europeo denominado Solvencia II. Durante los años 2018 y 2019, se requirió información a las compañías de seguros para la calibración y definición de metodologías que permitan calcular el requerimiento de capital de los riesgos de mercado, de los seguros ramos de vida y de los ramos no vida. En agosto 2019, se compartió, con la industria de seguros, la propuesta general del nuevo estándar de solvencia para su evaluación y comentarios. Uno de los principales retos de proyecto ha sido, tanto para la industria como para el regulador, la disponibilidad y el tratamiento de la información, desde su extracción y validación hasta la construcción de las plataformas tecnológicas para su explotación.

En el 2020, se llevó a cabo la preparación del primer estudio de impacto cuantitativo (EIC N°1), que realizarán las compañías de seguros sobre la base del modelo de CBR propuesto por la SBS.

El objetivo del EIC N°1 es evaluar la consistencia del modelo y la capacidad de las aseguradoras para implementarlo. Para establecer las condiciones adecuadas que permitan la implementación del EIC N°1, se elaboró el documento de especificaciones técnicas que detalla las metodologías y parámetros que se deberán considerar para el cálculo del requerimiento de capital y la construcción del balance económico; y desarrolla tutoriales y una interfaz, a través de la cual los usuarios de las aseguradoras los podrán visualizar También se habilitó el canal *secure file transfer protocol* (SFTP), mediante el cual las aseguradoras podrán acceder y descargar las plantillas de cálculo y subir los resultados obtenidos.

El EIC N°1 se inició oficialmente en diciembre de 2020 y se espera contar con los resultados de las compañías de seguros en marzo de 2021. Durante dicho periodo, el equipo técnico de la SBS acompañará a la industria en el proceso de desarrollo de este primer estudio.

Con los resultados que se obtengan del EIC N°1, se podrá evaluar el modelo, a fin de realizar los ajustes necesarios con proyección al EIC N°2, el cual se estima ejecutar en el 2022. Ambos estudios ayudarán a estimar el periodo de adecuación y las acciones que permitirán a las compañías de seguros, cumplir con los nuevos requerimientos de capital, de tal manera que se pueda contar con un modelo de CBR ya implementado a nivel operativo en el periodo 2024-2025. Asimismo, durante el 2021, se trabajará una propuesta de modificación de la Ley General, que facilitará la implementación del modelo a nivel de exigencia de capital.

Como parte de su misión, la SBS busca preservar la estabilidad financiera del sistema de seguros y vela por que las entidades que participan sean sólidas, solventes y sostenibles en el tiempo, de modo que puedan cumplir las obligaciones y compromisos que contraen con sus asegurados.

3

SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES

Durante el 2020 se continuó desarrollando con éxito los programas de educación financiera, adaptándose a la nueva normalidad. La SBS, como institución, se adaptó a esta situación y mantuvo sus servicios operativos, a través de los canales no presenciales, y el personal desempeñó sus funciones en un 100% de manera remota.

3

SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES

DURANTE EL 2020, EL GOBIERNO Y EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA APROBARON NORMAS Y LEYES QUE AUTORIZABAN RETIROS EXTRAORDINARIOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES, gestionados por las administradoras privadas de fondos de pensiones (AFP), en el contexto del estado de emergencia nacional, que tenían como objetivo atenuar el impacto de las medidas de aislamiento social y restricción de la actividad económica en los ingresos de las familias.

Las normas emitidas fueron los decretos de urgencia (D. U.) 034-2020 y 038-2020 y las leyes 31017 y 31068. Las dos primeras, promovidas por el Poder Ejecutivo y excluyentes una de la otra, dispusieron el retiro de hasta S/ 2 000 de la cuenta individual de capitalización (CIC) de los afiliados al SPP, bajo ciertas condiciones, como haber dejado de aportar al fondo de pensiones en determinados periodos y/o acreditar la condición de suspensión perfecta de labores. Por su parte, la Ley 31017, complementaria al D.U. 038-2020 y descontada del D.U. 034-2020, dispuso el retiro de hasta el 25% del fondo de pensiones con un tope máximo de tres unidades impositivas tributarias (UIT)[30]; y, posteriormente, fue complementada con la Ley 31022, para asegurar la intangibilidad de los fondos retirados, y el D.U. 056-2020, que dispuso la apertura de cuentas en el sistema financiero para dichos efectos.

30 En el año 2020, el valor de la UIT fue de S/ 4 300.

> La SBS estableció disposiciones para que las AFP implementen un mecanismo alternativo para informar a los afiliados el monto acumulado en sus CIC por concepto de aportes obligatorios, aportes voluntarios, la rentabilidad obtenida y la comisión cobrada, entre otros.

Antes de finalizar el año, se aprobó la Ley 31068 que autorizó un nuevo retiro del fondo de pensiones, de hasta cuatro UIT, para aquellos afiliados que acreditaran, hasta el 31 de octubre de 2020, no haber aportado a su CIC, por al menos, durante 12 meses consecutivos y que no aplicaran al régimen especial de jubilación anticipada (REJA). Se autorizó también el retiro excepcional facultativo, de hasta una UIT, para aquellos afiliados que no registraron aportes en el mes de octubre de 2020 y que no fueran beneficiarios de dicha ley; y hasta de cuatro UIT —en un solo retiro— para aquellos afiliados que, estén o no aportando, sufran enfermedades oncológicas.

Por su parte, la SBS, mediante la emisión de diferentes instrucciones y normativas, ha buscado cautelar la continuidad del funcionamiento del SPP. Así, en cumplimiento de las normas que autorizaban el retiro extraordinario de los fondos de pensiones, se emitieron los procedimientos operativos correspondientes para que los afiliados pudieran disponer de sus recursos en el menor tiempo posible (circulares AFP-172-2020 y AFP-173-2020, resoluciones SBS 1352-2020, 2979-2020 y 3031-2020).

Para la atención de las solicitudes de retiro, el establecimiento del cronograma y el diseño de los procedimientos operativos, la SBS coordinó con diversas entidades del Estado, como el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), en lo que respecta a las consideraciones de los trabajadores en situación de suspensión perfecta de labores; la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat), a efectos de determinar la condición de acceso al REJA, a través del reporte de rentas de cuarta categoría; la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud), para determinar a las instituciones prestadoras de servicios de salud (Ipress) autorizadas a emitir los certificados oncológicos; y el Ministerio de Salud (Minsa), para el desarrollo de la plataforma web service que permita la recopilación de dichos certificados.

Fue necesaria también la participación de las entidades del sistema financiero para hacer efectiva la entrega de los recursos. Inicialmente, se convocó a las cuatro entidades financieras más grandes del país y que canalizan la recaudación de los aportes previsionales a nivel nacional; posteriormente, el 16 de abril se sumaron dos entidades financieras; y el 28 de abril se habilitó la opción para que el retiro se realizara en el Banco de la Nación, entidad con presencia en casi todo el territorio peruano, incluyendo 350 localidades donde se constituye como la única oferta bancaria. En los siguientes meses, se incorporaron otras entidades financieras, sumando 17 en total, siete de las cuales ofrecían la alternativa de efectuar abonos mediante el número de cuenta, y las otras diez, a través del código de cuenta interbancario (CCI) —esto último en atención a la Ley 31017—. Cuando se aprobó la Ley 31068, en los últimos meses del año, se disponía de diez entidades financieras para el abono mediante el número de cuenta, a las que se sumó el Banco de la Nación para atender a los afiliados en zonas donde esta entidad se constituía como plaza única.

Por otro lado, la SBS estableció disposiciones para que las AFP implementen un mecanismo alternativo para informar a los afiliados el monto acumulado en sus CIC por concepto de aportes obligatorios, aportes voluntarios, la rentabilidad obtenida y la comisión cobrada, entre otros.

Además, se verificó el correcto funcionamiento y mejora de los canales de atención de consultas y reclamos de los afiliados, los que, en un inicio, se vieron saturados por la alta demanda. Frente a esta situación, se hizo seguimiento de las iniciativas de las AFP para atender a los afiliados, tales como la creación de nuevos canales y el establecimiento de protocolos de atención, la contratación de *call centers* externos, la gestión de redes sociales y el desarrollo de aplicativos *(chatbot),* entre otras; y a las acciones emprendidas por estas entidades para difundir la información relacionada a los retiros, tales como el envío del estado de la solicitud vía correo electrónico, las comunicaciones mediante las redes sociales y la implementación de nuevos servicios de plataforma web para consultar el estado de la solicitud, entre otras.

En un inicio, en pleno periodo de aislamiento social, las AFP designaron a la entidad financiera para la atención de aquellos afiliados que no disponían de una cuenta bancaria, cuidando que esta cuente con una red de agencias en la ciudad de residencia señalada en la solicitud de retiro. Si bien se presentaron algunos problemas, se instó a las AFP a ofrecer soluciones a la brevedad. Así, se estableció que el afiliado se debía poner en contacto con su AFP y que el abono fuera redireccionado a otra entidad financiera o extornado para su pago en cuenta. Posteriormente, el Poder Ejecutivo emitió el D.U. 056-2020, que autorizaba a las entidades financieras —incluido el Banco de la Nación— la apertura de cuentas en favor de los beneficiarios de fondos otorgados o liberados por leyes y otras normas, lo que permitió una mejor atención de aquellos afiliados que no contaban con una cuenta bancaria.

Con respecto a la supervisión del SPP, a cargo de la SBS, se debe destacar que esta es una labor permanente, a través de acciones *in situ* y *extra situ.* Durante el estado de emergencia nacional, se realizaron inspecciones no presenciales, en reemplazo de la supervisión *in situ;* se mantuvieron las etapas: i) evaluación de riesgos; ii) planificación; iii) ejecución de modo remoto; iv) comunicación de resultados; y v) seguimiento de recomendaciones y consideraciones adicionales da la coyuntura. Desde la labor *extra situ,* que cobró mayor importancia, se analizó la información remitida por las AFP y se generaron reportes internos, a fin de monitorear su comportamiento.

Se realizaron inspecciones a las cuatro AFP y a la Caja de Pensiones Militar Policial (CPMP), las que se enfocaron en los riesgos emergentes y las nuevas prioridades producto de la coyuntura. Los siguientes son los principales aspectos evaluados: el comité de ética, el gobierno corporativo, el proceso de afiliación, el procedimiento de traspasos y la calculadora en el marco de la licitación de nuevos afiliados. Asimismo, se revisaron las medidas de seguridad de la información adoptadas, los procesos de elegibilidad de las inversiones desde el ámbito legal, la gestión de los reclamos y requerimientos, y la información que se difunde a los afiliados y al público en general.

El proceso de supervisión de la CPMP comprendió la revisión de las actas del Consejo Directivo, con la finalidad de tomar conocimiento de los acuerdos adoptados para gestionar los riesgos operacionales y de continuidad de negocios en el contexto del estado de emergencia nacional. Asimismo, se evaluó la gestión de la unidad de auditoría interna, la gestión de inversiones y los riesgos de inversión asociados a los fondos administrados. En cuanto al proceso de desacumulación, se continuó monitoreando la implementación de las recomendaciones que se le hiciera a la citada entidad en años anteriores, a través de reuniones de trabajo y pedidos de información complementarios, debido a que se identificaron nuevos riesgos en los procesos y en la gestión.

Respecto de la supervisión *extra situ*, se implementó un mecanismo de bloqueo de aportes indebidos al Sistema Nacional de Pensiones (SNP), en coordinación con la Sunat, que impide que los empleadores declaren en planilla o den de alta a una persona afiliada al SNP cuando esta se encuentre afiliada previamente al SPP. Con la finalidad de proseguir con su proceso de optimización, se continuó con la revisión de los procesos de intercambio de archivos de información de los afiliados, que se realiza entre la Superintendencia y las AFP. Asimismo, se llevaron a cabo acciones de supervisión del proceso de los retiros extraordinarios dispuestos por el Poder Ejecutivo y el Legislativo.

La supervisión del proceso de gestión de inversiones de los fondos de pensiones se enfocó, principalmente, en los siguientes aspectos: i) la aprobación y monitoreo de la política de inversiones de las AFP; ii) el monitoreo de la asignación estratégica, táctica y selección de activos o de instrumentos de inversión; iii) el gobierno corporativo del proceso de inversiones; iv) el monitoreo de la negociación y ejecución de las inversiones; v) la conducción del proceso administrativo de aprobación de autorización de inversiones; y vi) la fiscalización del proceso de elegibilidad y decisión de inversión en instrumentos complejos. De esta manera, se verificó que las AFP analicen información vinculada con los mercados financieros en los que realizan las inversiones; la rentabilidad esperada de los activos e instrumentos de inversión; los riesgos financieros, no financieros y legales de los instrumentos de inversión; los costos de las inversiones; y los impuestos asociados, en caso correspondan, entre otros aspectos.

A pesar de la volatilidad de los mercados financieros internacionales, debido a la pandemia del covid-19 y a los retiros extraordinarios autorizados por el Gobierno y el Congreso de la República, se deben destacar los buenos rendimientos obtenidos por los fondos de pensiones en el ejercicio 2020. Las rentabilidades nominales anuales (diciembre 2020/diciembre 2019) promedio del SPP fueron las siguientes: fondo 0, 3,02%; fondo 1, 9,32%; fondo 2, 10,52%; y fondo 3, 6,34%.

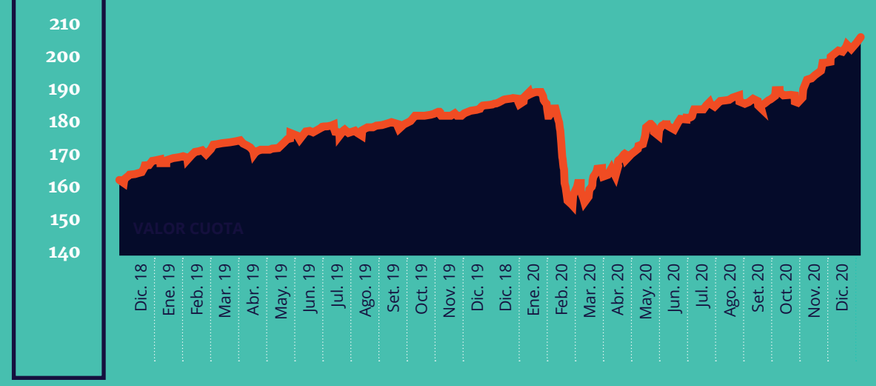
BOX 5

Impacto de la pandemia del covid-19 en los fondos privados de pensiones

Durante el primer trimestre del 2020, la pandemia del covid-19 ocasionó estragos en los mercados financieros internacionales, lo que provocó una caída masiva en los indicadores, situación que afectó a los fondos privados de pensiones peruanos gestionados por las administradoras privadas de fondos de pensiones (AFP). Al cierre del periodo enero-marzo, el fondo tipo 1 reportaba un rendimiento negativo de 5,85%, el tipo 2 de 8,22% y el tipo 3 de 11,46%. Solo el fondo tipo 0, dirigido a los afiliados del sistema privado de pensiones (SPP) próximos a jubilarse, mostraba una ganancia de 0,94%.

Sin embargo, a partir de abril, se observó una progresiva y consistente recuperación en la economía mundial, producto de la reactivación de algunas actividades económicas y el control de la primera ola de la pandemia en algunos países (principalmente, Europa), situación que provocó, a su vez, que los fondos de pensiones no solo empezaran a revertir los resultados negativos reportados en los primeros meses del año, sino también superar los valores máximos previos a la pandemia del covid-19. El siguiente gráfico muestra la evolución del valor cuota promedio del SPP durante los años 2019 y 2020, en el cual se puede observar la caída abrupta en el primer trimestre de 2020 y su posterior recuperación.

SPP: evolución del valor cuota promedio 2019-2020

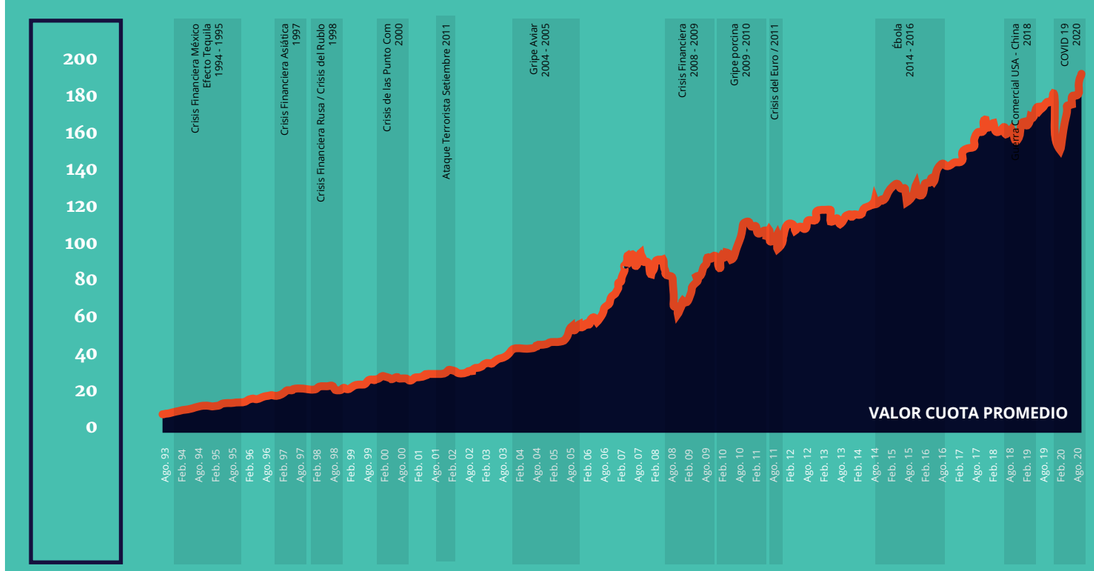


Impacto de la pandemia del Covid-19 en los fondos privados de pensiones

Este comportamiento permitió que, al cierre de 2020, todos los fondos obtuvieran rendimientos anuales positivos: el fondo tipo 0 ganó 3,02%; el tipo 1, 9,32%; el tipo 2, 10,52%; y el tipo 3, 6,33%.

Si se analiza el SPP desde su creación, los fondos de pensiones han sufrido el impacto de diversas crisis y pandemias que golpearon los mercados financieros internacionales. Sin embargo, en todos los casos, se han recuperado y revertido los rendimientos negativos.

SPP: Evolución del valor cuota promedio 1993-2020



Al cierre de 2020, todos los fondos obtuvieran rendimientos anuales positivos:

fondo tipo 0 + 3.02%
fondo tipo 1 + 9.32%
fondo tipo 2 + 10.52%
fondo tipo 3 + 6.33%

En ese sentido, es importante reiterar que los fondos de pensiones, por su naturaleza, tienen como objetivo maximizar la rentabilidad con una visión de largo plazo. Por ejemplo, el fondo tipo 2, durante el 90% del periodo de su existencia (casi 27 años), ha presentado rentabilidades nominales anuales positivas, lo cual demuestra que la sostenida obtención de ganancias en el corto plazo ha permitido que los afiliados se beneficien de rentabilidades nominales positivas en el largo plazo. Por lo tanto, si bien actualmente vivimos una coyuntura de crisis generada por la pandemia del covid-19, la evidencia muestra que los fondos de pensiones han pasado por circunstancias similares en múltiples ocasiones y, de todos ellos, han podido recuperarse satisfactoriamente y superar largamente los niveles previos a las crisis.

Por otro lado, con el fin de mitigar el impacto de las medidas de aislamiento social y restricción de la actividad económica, el Gobierno y el Congreso de la República autorizaron a los afiliados del SPP a realizar, de manera voluntaria, retiros extraordinarios de sus cuentas individuales de capitalización (CIC), para lo cual se emitieron los decretos de urgencia (D. U.) 034-2020 y 038-2020 y las leyes 31017 y 31068. Como consecuencia de los D. U., las AFP desembolsaron S/ 5053,3 millones; por la Ley 31017, S/ 19 292,2 millones; y por la Ley 31068, S/ 2839,3 millones.

Estas normas generaron la necesidad de una mayor liquidez, por parte de los fondos de pensiones, con la finalidad de contar con el efectivo suficiente para atender las solicitudes de retiro de los afiliados. En ese sentido, para evitar ventas masivas de los instrumentos de inversión que pudieran afectar el valor de los fondos de pensiones, las AFP ejecutaron operaciones de financiamiento de corto plazo, a nombre de los fondos de pensiones, a través de las operaciones de reporte.

Las operaciones de reporte se definen como un préstamo con garantía o colateral, que funciona de la siguiente manera: el fondo de pensiones (que actúa como reportado) entrega una determinada cantidad de instrumentos como garantía al Banco Central de Reserva del Perú (que actúa como reportante); y este le entrega, en contraprestación, un monto de dinero con el compromiso de que el reportado recompre los instrumentos entregados en una fecha futura y a un precio ya establecido. Gracias a las operaciones de reporte, los fondos de pensiones obtuvieron una inyección de liquidez de S/ 6431 millones.

> Se aprobaron disposiciones para mejorar el proceso de cobranza de los aportes obligatorios de los afiliados y fortalecer la capacidad de la AFP para recuperar los aportes adeudados y, en consecuencia, reducir los niveles de morosidad en el SPP.

En lo correspondiente a la etapa de desacumulación, se llevaron a cabo 12 procesos de supervisión a las AFP y compañías de seguros que participan en el mercado previsional, los cuales permitieron, de un lado, identificar los riesgos inherentes a los que está expuesta la gestión que realizan dichas entidades en esta etapa y, de otro, promover su fortalecimiento con la implementación de controles y mejoras dirigidas para mitigar tales riesgos.

Respecto del sistema evaluador de invalidez (SEI), entre los procesos supervisados estuvieron aquellos relacionados con la gestión del comité médico de las AFP (Comafp), para modificar y/o adaptarse a un procedimiento remoto que garantice la continuidad del acceso al servicio. La supervisión, concurrente y posterior de los procesos, permitió identificar y alertar, de manera oportuna, los riesgos que podrían afectar su continuidad, así como detallar las acciones para mitigar estos riesgos, que debía implementar dicho comité, a fin de fortalecer su operación y garantizar un adecuado acceso al beneficio por parte del afiliado o el beneficiario.

Adicionalmente, a efectos de optimizar la metodología de suma de menoscabos de invalidez, la cual permite determinar si un caso de invalidez es parcial o total, se puso a disposición de los médicos encargados un software para la determinación del menoscabo de invalidez. Asimismo, con fines de reforzar el sustento de una calificación de invalidez, se establecieron precisiones referidas a la valorización de diagnósticos de "comorbilidad" y asignación de "factores complementarios" por invalidez.

Se automatizaron los procesos de anulación de solicitudes de cotización de pensiones definitivas y de remisión de solicitudes de bono de reconocimiento para su evaluación en la Oficina de Normalización Previsional (ONP), en los cuales participa la SBS, entre otros. Esta iniciativa permitió ganar una mayor eficiencia en la gestión y agilizar los procesos en beneficio de los afiliados.

En relación con la labor que cumple la SBS, como parte del equipo técnico de la delegación peruana de seguridad social para la negociación y suscripción de convenios de seguridad social y transferencia de fondos previsionales, se participó en la reunión virtual del Comité Técnico del Convenio Iberoamericano de Seguridad Social, presidido por el Perú. En esta reunión, se expuso sobre la importancia de estos convenios para los países participantes, más aún en el contexto de la pandemia del covid-19; el aumento del número de personas que han accedido a sus beneficios; y los avances en el proceso de mejora del intercambio de los formularios de manera electrónica. Con ese fin, se plantea una agenda de trabajo para actualizar las plataformas, dinámicas y estrategias de los convenios.

Para mejorar los procesos asociados a los regímenes de reprogramación de la deuda previsional, actualmente vigentes —el régimen de reprogramación de pago de aportes previsionales al fondo de pensiones (Repro-AFP) (Decreto Legislativo 1275) y el régimen de reprogramación de pago de aportes previsionales a los fondos de pensiones (Repro-AFP II) (D.U. 030-2019)—, la SBS emitió disposiciones relacionadas con el recupero y la debida acreditación de los aportes impagos para el Repro-AFP (resoluciones SBS 133-2020 y 2894-2020), así como las normas complementarias y procedimientos operativos en el caso del Repro-AFP II (Resolución SBS 1227-2020). Entre las principales modificaciones aprobadas, destacan el establecimiento de un plazo de 12 meses para que las AFP interpongan la demanda judicial, de modo tal que los gobiernos regionales y locales que se encuentren sujetos a presupuestos anuales puedan cumplir sus obligaciones de pago; la implementación de una mejor asignación en la acreditación de aportes recuperados, para favorecer a los afiliados próximos a jubilarse; y la implementación de la modalidad de pago adelantado con descuento de intereses.

Adicionalmente, mediante la Resolución SBS 2751-2020, se aprobaron disposiciones para mejorar el proceso de cobranza de los aportes obligatorios de los afiliados y fortalecer la capacidad de la AFP para recuperar los aportes adeudados y, en consecuencia, reducir los niveles de morosidad en el SPP. Así, se estableció un sistema de gestión de cobranza de la deuda previsional con requerimientos mínimos, a cargo de las AFP, que se basará en una evaluación del perfil de pago del empleador; y un único plazo para que las AFP interpongan una demanda judicial de cobranza de aportes impagos, lo que permitirá que los expedientes judiciales se manejen en función de un mayor volumen de deuda previsional y no de manera atomizada. De esta manera, se logrará una mayor eficiencia en la gestión de cobranza y se reducirán los niveles de deuda por aportes impagos por parte de los empleadores; lo que, a su vez, redundará en el incremento de la densidad de cotización de los afiliados al fondo de pensiones y, con ello, en mayores pensiones de jubilación, invalidez y sobrevivencia.

En lo referido al proceso de prestaciones, mediante Resolución SBS 677-2020, se simplificó el proceso de otorgamiento de una pensión preliminar con cobertura del seguro previsional y posterior pensión definitiva de invalidez o sobrevivencia, con la finalidad de no afectar a aquellos beneficiarios en proceso de acreditación. Se amplió el plazo de pago de una pensión preliminar hasta 72 meses, de ser el caso, a fin de que los beneficiarios no se vean perjudicados con una eventual suspensión. De igual modo, mediante Resolución SBS 1755-2020 y Circular AFP-174-2020, se aprobaron modificaciones y se hicieron precisiones a la

metodología que se aplica en los procesos de evaluación y calificación de invalidez en el SPP para incorporar nuevas casuísticas.

Se emitió la Resolución SBS 2803-2020 con la finalidad de mejorar la información y asesoría que el afiliado recibe sobre el acceso al seguro previsional, en el caso de que exista un proceso de regularización de aportes obligatorios realizados por el empleador o, en su defecto, por un tercero legitimado, mediante la figura de subrogación contemplada en el Código Civil.

A los riesgos de inversión tradicionales, se sumaron otros factores de riesgo como el impacto de la pandemia del covid-19, la volatilidad de los mercados financieros local e internacional, y los retiros extraordinarios del fondo de pensiones. Frente a este escenario, la SBS emitió diversas disposiciones con los siguientes fines: i) preservar la estabilidad del SPP, limitando, en una acción conjunta con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y BCRP, el efecto del riesgo de liquidez de los fondos de pensiones; ii) mantener la continuidad del proceso de inversiones de las AFP durante la cuarentena, decretada por el Gobierno, requiriendo que la totalidad de la documentación necesaria para la supervisión sea remitida de forma digital, a través del portal del supervisado; iii) mantener los procesos de supervisión, fiscalización y regulatorios asociados al proceso de inversiones; y iv) proponer una modificación normativa dirigida a continuar ampliando las alternativas de inversión (instrumentos y operaciones) con una robusta gestión de riesgos de los fondos de pensiones.
Adicionalmente, continuando con los esfuerzos de maximizar la rentabilidad de los fondos de pensiones en beneficio de los afiliados al SPP, la SBS dispuso la publicación de un proyecto de norma que incorpora mejoras al régimen de inversiones de los fondos de pensiones. Este proyecto propone lo siguiente:

a Ampliar las alternativas de inversión para una mayor diversificación, en un contexto de alta volatilidad y bajas rentabilidades, mediante la incorporación de las estrategias de *private debt* y coinversiones dentro de la oferta de instrumentos de inversión.

b Mejorar la liquidez del portafolio de inversión de los fondos de pensiones y del mercado de capitales local, así como fortalecer el Mercado Integrado Latinoamericano (MILA). Para ello, se permitirá a las AFP que determinen los requisitos mínimos de elegibilidad para los títulos accionarios que se negocian en el MILA y las inversiones que se realicen bajo esquemas de formadores de mercado.

c Integrar los factores medioambientales, sociales y de gobierno corporativo en la gestión de las inversiones y riesgos. Así, se requerirá a las AFP que definan en la política de inversiones y de gestión de riesgos de cada tipo de fondo, políticas sobre factores medio ambientales, sociales y de gobierno corporativo.

d Actualizar los requerimientos de elegibilidad de los instrumentos alternativos locales y del exterior para adecuarlos a las mejores prácticas internacionales.

e Mejorar el gobierno corporativo del proceso de inversiones, estableciendo para ello las responsabilidades y requerimientos del directorio, comité de inversiones y la unidad de Inversiones en materia de gestión de los portafolios de inversión.

f Establecer responsabilidades y requerimientos mínimos para la resolución de conflictos de interés que pueden surgir en el proceso de inversión de los fondos de pensiones.

g Mejorar los lineamientos para la negociación de instrumentos u operaciones de inversión.

El proyecto de norma estuvo disponible en el portal de la SBS para consultas, comentarios y sugerencias, desde el 16 de octubre hasta el 16 de noviembre de 2020.

Finalmente, en diciembre, se llevaron a cabo los procesos de licitación del seguro previsional y del servicio de administración de las CIC de los afiliados al SPP. Considerando el estado de emergencia nacional y con la finalidad de promover una mayor eficiencia y simplicidad a los procesos, mediante resoluciones SBS 2716-2020 y 2803-2020, se modificó la regulación aplicable a la licitación del seguro colectivo de invalidez y sobrevivencia (Sisco).

Se estableció que las diversas etapas del proceso de licitación del Sisco V se puedan realizar de manera virtual y se flexibilizaron las condiciones, con miras a promover la adjudicación del 100% de las fracciones del seguro. Igualmente, se fortalecieron las garantías estipuladas en las normas, a fin de alinear los intereses de las empresas adjudicatarias (las compañías de seguros) con todos los involucrados en el proceso de licitación. Con respecto a la evaluación de la cobertura del seguro previsional, por concepto de regularización de los aportes con posterioridad a la fecha de ocurrencia de un siniestro, se aprobaron medidas para evitar eventuales situaciones de aprovechamiento indebido del seguro previsional. De esta manera, se promovía una acción responsable por parte los afiliados al SPP respecto de los beneficios que otorga un seguro colectivo de invalidez y sobrevivencia.

En la quinta licitación para la administración colectiva del Sisco V, cuya vigencia será para el periodo 2021-2022, las compañías de seguros adjudicatarias fueron Pacífico Vida, Rímac Seguros, Ohio National y La Positiva Vida. A partir del 1 de enero de 2021, la prima de seguros que se cobrará a los afiliados al SPP será de 1,74%.

Por otro lado, mediante Circular AFP-175-2020, se establecieron las bases de la quinta licitación de afiliados del SPP (Ley 29903), que se realizó el 18 de diciembre, en la que resultó ganadora AFP Integra.

BOX 6

Licitación de afiliados al SPP

En cumplimiento de la Ley de Reforma del Sistema Privado de Pensiones (Ley 29903) y como parte de un acto público, la SBS realizó, el 18 de diciembre, la quinta licitación de los nuevos afiliados del sistema privado de pensiones (SPP). Resultó ganadora la AFP Integra. El acto público contó con la participación de dos de las cuatro administradoras privadas de fondos de pensiones (AFP) que operan en el mercado. Las ofertas presentadas fueron las siguientes:

Resultados de la quinta licitación de nuevos afiliados al SPP

Entidad	Componente de comisión sobre el flujo (en porcentaje)	Componente de comisión sobre el saldo (en porcentaje)	Valor de la comisión final
	A	B	C
AFP Hábitat			No se presentó
AFP Integra	0,00	0,79	0,2449
AFP Prima	0,00	0,81	Excede la comisión máxima
AFP Profuturo			No se presentó
Menor comisión Final del proceso de licitación:			0,2449
Número de empresas que ofrecen la menor comisión final:			1
Empresa adjudicataria:			AFP Integra

La AFP ganadora propuso una comisión mensual de 0,00% sobre el componente por flujo (remuneración) y una comisión anual de 0,79% sobre el componente de saldo, y se encargará de afiliar a los trabajadores que, por primera vez, se incorporen al SPP a partir del 1 de junio de 2021 por un plazo de dos años.

Cabe señalar que, desde junio de 2019, producto de la cuarta licitación, AFP Integra no cobra la comisión sobre el componente de remuneración, situación que se mantiene para este nuevo periodo de licitación. Con el resultado de la quinta licitación, se mantiene la eliminación de la comisión por flujo, así como una reducción en la comisión anual sobre el saldo.

Comisiones ganadoras por cada licitación

	Licitación				
	Primera	Segunda	Tercera	Cuarta	Quinta
Flujo	0,47	0,38	0,18	0,00	0,00
Saldo	1,25	1,25	1,25	0,82	0,79
Entidad ganadora	AFP Hábitat	AFP Hábitat	AFP Prima	AFP Integra	AFP Integra

76%
del total de afiliados al SPP paga una comisión mixta por la administración de su fondo.

Estos resultados demuestran que la incorporación de este mecanismo, que promueve una mayor competencia en el SPP, ha beneficiado considerablemente a los afiliados con una reducción de las comisiones sostenida en los últimos años. Debe destacarse que la menor comisión se puede extender a aquellos afiliados de otras AFP que pagan una comisión mixta y se traspasen a la AFP ganadora de la licitación.

Resulta importante mencionar que, desde que entró en vigor la Ley 29903, que modificó el esquema de comisiones, los afiliados han dejado de pagar, hasta octubre de 2020, cerca de S/ 2 807 millones. El 76% del total de afiliados al SPP paga una comisión mixta por la administración de su fondo.

Asimismo, la Ley 29903 estableció un cronograma para la reducción del componente sobre el flujo (remuneración) de la comisión mixta, el cual se inició en febrero de 2013 y finalizará en enero de 2023, para pasar únicamente a una comisión sobre el saldo. Sin embargo, debido a la competencia que han promovido las licitaciones, esta reducción ha sido más rápida. Desde junio de 2019, la comisión mixta se aplica únicamente al componente saldo.

Por otro lado, de acuerdo con el marco legal, los trabajadores que se afilien por primera vez al SPP, permanecerán en la AFP ganadora de la licitación por un periodo de dos años. Vencido este plazo, tendrán total libertad para solicitar el traspaso a la AFP de su preferencia. No obstante, si dentro de dicho periodo de permanencia, la rentabilidad neta de comisiones en la AFP ganadora es menor al comparativo del mercado, el afiliado podrá solicitar su traspaso a partir de los 180 días calendario de permanencia. De esta manera, se protegen los intereses del afiliado, cautelando que, al pagar la comisión más baja del mercado, no se esté afectando la rentabilidad de su fondo de pensiones.

4

SISTEMA COOPERATIVO

Durante el 2020 se continuó desarrollando con éxito los programas de educación financiera, adaptándose a la nueva normalidad.
La SBS, como institución, se adaptó a la nueva normalidad y mantuvo sus servicios operativos, a través de los canales no presenciales, y el personal desempeñó sus funciones en un 100% de manera remota.

4

SISTEMA COOPERATIVO

EL AÑO 2020 SE INICIÓ CON 434 COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO NO AUTORIZADAS A CAPTAR RECURSOS DE TERCEROS (COOPAC) inscritas en el Registro Nacional de Coopac. De este total, 31 Coopac se habían constituido en el 2019. Al 31 de diciembre ese año, 43 Coopac, aproximadamente, se encontraban en proceso de registro; es decir, habían solicitado la evaluación de la legalidad de sus proyectos de estatutos a la SBS. Sin esta aprobación, no procede una inscripción.

Sin embargo, debido al estado de emergencia nacional declarada por la pandemia del covid-19, el número de Coopac registradas se redujo de manera significativa en el 2020: solo se inscribieron cuatro y una central. De otro lado, dos Coopac fueron excluidas del Registro Nacional, debido a que fueron declaradas en disolución por causal de inactividad. De esta manera, al cierre del año, 437 Coopac estaban inscritas en el Registro Nacional: 267 de nivel 1; 146 nivel de 2A, 13 nivel de 2B y 11 de nivel 3.

Debido a las inconsistencias entre la información obtenida en los procesos de supervisión de las Coopac y la información presentada con fines de inscripción en el Registro Nacional (las declaraciones juradas de los representantes de las Coopac), se modificó el proceso de inscripción en el Registro Nacional, con la finalidad de que estas entidades, al momento de inscribirse, acrediten debidamente que tienen la capacidad y cuenten con la infraestructura mínima que asegure su debido funcionamiento y su viabilidad.

Desde que entró en vigor la Ley 30822 (Ley Coopac), la supervisión realizada por la SBS ha permitido identificar una serie de problemas estructurales que enfrenta el sistema cooperativo, los cuales han venido siendo evaluados pese a las limitaciones que impuso el estado de emergencia nacional:

- **Sistema sin licenciamiento:** no se cuenta con un procedimiento de licenciamiento, a través del cual la SBS evalúe, previamente, la factibilidad del modelo de desarrollo cooperativo a implementar, la idoneidad técnica y/o moral de los socios, directivos, gerentes y principales funcionarios (según corresponda) ni la infraestructura y los recursos necesarios para iniciar operaciones.

- **Crecimiento inorgánico de activos:** las Coopac, constituidas en su mayoría antes de la entrada en vigor de la Ley Coopac, presentan un fuerte crecimiento de los depósitos debido a las altas tasas de interés ofrecidas, lo que generó la necesidad de realizar inversiones y préstamos a sectores no tradicionales con alto perfil de riesgo. Sin embargo, este crecimiento no estuvo acompañado de uno similar en cuanto a la calidad de recursos humanos, procesos y procedimientos operativos y de gestión de riesgos, control interno y sistematización operativa y contable. En cuanto al modelo de desarrollo, primó la expansión física y el crecimiento desordenado de las carteras de crédito frente a la toma y gestión prudente de riesgos, la modernización tecnológica y la eficiencia operativa.

> Las Coopac, constituidas en su mayoría antes de la entrada en vigor de la Ley Coopac, presentan un fuerte crecimiento de los depósitos debido a las altas tasas de interés ofrecidas, lo que generó la necesidad de realizar inversiones y préstamos a sectores no tradicionales con alto perfil de riesgo.

- **Un gran número de entidades distribuidas a lo largo del país:** al 31 de diciembre del 2020, se reportaban 437 Coopac inscritas en el Registro Nacional. Un número importante cuenta con redes de agencias a nivel nacional, a pesar de no contar con sistemas de registro y control de operaciones interconectados.

- **Sistemas limitados o dependientes de proveedores frágiles:** un número material de Coopac no cuenta con sistemas de información básicos para el registro de sus operaciones y el manejo de su contabilidad; o descansan en el servicio de terceros para tal efecto. Asimismo, se ha identificado que en aquellas que sí cuentan con sistemas básicos, estos son altamente vulnerables y susceptibles a una fácil manipulación.

- **Reiterados incumplimientos de envío de información y/o información deficiente** a pesar de los amplios plazos y prórrogas para la remisión de la información financiera, muchas Coopac no cumplen con remitirla —situación que se observa básicamente en las Coopac nivel 1 y nivel 2—. Adicionalmente, en el caso de aquellas entidades que sí cumplen con el envío de la información, las evaluaciones realizadas dan cuenta de errores y deficiencias en cuanto a su calidad e integridad.

Estos problemas estructurales revelan que el sistema cooperativo, más allá de los aspectos de cumplimiento regulatorio e implementación gradual de una gestión integral de riesgos, se encuentra en un proceso de sinceramiento

que podría durar varios años. Este proceso tiene como objetivo que las Coopac implementen estándares mínimos de buenas prácticas de gestión financiera y gobierno corporativo, y fortalezcan su patrimonio como requisito indispensable para salvaguardar los ahorros de los socios.

Con la finalidad de fortalecer el rol supervisor y la solvencia del sistema, la SBS emitió un marco regulatorio teniendo como base los siguientes criterios en su elaboración:

1.

Respeto de los principios que rigen el sistema cooperativo y la naturaleza de las entidades que lo forman.

2.

Aplicación de reglas de proporcionalidad, bajo la premisa de que el sistema está formado por entidades de distinto tamaño y nivel de riesgo.

3.

Diseño de un esquema de gradualidad en todo aspecto en que ello sea posible, que permita a las Coopac ir adecuándose al nuevo marco normativo.

A partir de marzo, a dichos criterios se sumó la gestión del impacto del estado de emergencia nacional. Frente a esta situación, la emisión de las normas estuvo dirigida, principalmente, a regular aspectos claves y urgentes —la falta de regulación necesaria podría tener un impacto negativo en las Coopac y en el sistema en su conjunto—. Se flexibilizó, también, la carga operativa y regulatoria, de modo que estas puedan enfrentar en la mejor posición posible no solo el año 2020, sino el 2021.

Antes de la declaración del estado de emergencia nacional, mediante Resolución SBS 0158-2020 del 14 de enero, se aprobó el estatuto del Fondo de Seguro de Depósitos Cooperativo (FSDC); y, mediante Resolución SBS 494-2020 del 31 de enero, se estableció el procedimiento operativo para el cálculo y pago de primas correspondientes. Por otro lado, mediante Resolución SBS 493-2020 del 30 de enero, se modificó el Reglamento General de las Cooperativas de Ahorro y Crédito no Autorizadas a Captar Recursos del Público u Operar con Terceros (Reglamento Coopac), con la finalidad de adecuarlo a las modificaciones del Reglamento para la Evaluación y Clasificación del Deudor y la Exigencia de Provisiones (Resolución SBS 11356-2008) con relación a la clasificación del deudor.

Luego de la declaración del estado de emergencia nacional, se implementaron las siguientes medidas:

- Se dispuso la suspensión del envío de información financiera (estados financieros, anexos y reportes), a excepción del reporte de tesorería y posición de liquidez, los que fueron requeridos solo a las Coopac de niveles 2 y 3, a efectos de realizar un control diario de la situación de liquidez individual y sistémica dada la coyuntura (oficios múltiples 11143-2020, dirigido a las Coopac nivel 1; 11149-2020, dirigido a las Coopac nivel 2; y 11145 -2020, dirigido a las Coopac nivel 3).

- Se otorgaron facilidades para la reprogramación de créditos, bajo ciertas condiciones, sin afectar la clasificación de los deudores (oficios múltiples 11143-2020, dirigido a las Coopac nivel 1; 11149, dirigido a las Coopac nivel 2; 11145-2020-SBS, dirigido a las Coopac nivel 3 —estos tres primeros con fecha 16 de marzo—; y 13824-2020).

- Se modificó el Reglamento Coopac para efectuar precisiones al proceso de aprobación y modificación de los estatutos de estas entidades, la comunicación de la elección y vacancias de gerentes y principales funcionarios, así como establecer nuevos lineamientos para los aportes de capital (Resolución SBS 1285-2020 del 16 de abril).

- Se prorrogó el periodo para la celebración de las asambleas generales ordinarias de las Coopac (oficios múltiples 11124-2020 del 16 de marzo, 12158-2020 del 28 de abril y 13491-2020 del 25 de mayo). Posteriormente, el 14 de junio, se publicó la Ley 31029, que facultó a la asamblea general, consejos y comités de las organizaciones cooperativas a realizar sesiones no presenciales, con el objetivo de garantizar su dirección, administración y control. Se dispuso que los acuerdos a adoptarse, en estas sesiones, tengan plena validez, eficacia y los mismos efectos que los acuerdos adoptados en sesiones de carácter presencial.

- Se autorizó al FSDC a iniciar la recaudación de primas en abril de 2021, a fin de aliviar el costo que pudiesen enfrentar las Coopac (Resolución SBS 1439-2020 del 28 de mayo).

- Se redujo en dos oportunidades la contribución de supervisión (resoluciones SBS 1393-2020 del 20 de mayo y 1996-2020 del 20 de agosto).

- Se aplazó, en dos oportunidades, el cronograma de adecuación gradual de los requerimientos regulatorios prudenciales que aplican a las Coopac, entre otros, referidos a la reserva cooperativa, patrimonio básico y requerimientos de provisiones, a fin de aliviar la carga regulatoria (resoluciones SBS 1561-2020 del 12 de junio y 2980-2020 del 27 de noviembre).

- Se modificaron los manuales de contabilidad y se establecieron precisiones sobre aspectos de carácter prudencial y contable que deben ser consideradas por las Coopac nivel 2 y 3 que participen en los programas FAE-MYPE, FAE-Turismo y FAE-Agro (resoluciones SBS 1765-2020 del 6 de julio de 2020 y 2364-2020 del 29 de setiembre).

- Se modificó el Reglamento del Registro Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito no Autorizadas a Captar Recursos del Público u Operar con Terceros y sus centrales, en lo que se refiere al procedimiento de inscripción, con la finalidad de que, al momento de otorgárseles el registro correspondiente, las Coopac o centrales se encuentren en la capacidad de cumplir con las exigencias mínimas de supervisión y los directivos tengan conocimiento de sus responsabilidades como gestores de la entidad, en aras de fortalecer y consolidar el sistema cooperativo (Resolución SBS 2157-2020 del 8 de setiembre de 2020).

4 SISTEMA COOPERATIVO

Como se ha mencionado, el sistema cooperativo se encuentra en proceso de estabilización. En los primeros meses del estado de emergencia nacional, tras la aplicación de las medidas de aislamiento social y restricción de la actividad productiva, para frenar los contagios del covid-19, la SBS adoptó una política de seguimiento diario, tanto individualizado como sistémico, de la liquidez, capacidad operativa y calidad de la cartera de créditos de las Coopac. Esta política tuvo como objetivo diagnosticar las necesidades del sector, a efectos de calibrar la normativa, así como identificar, tempranamente, las alertas que permitan direccionar los esfuerzos del supervisor, para que las Coopac tomaran las medidas necesarias para mitigar el impacto de la coyuntura sobre su liquidez y solvencia, con el fin último de proteger los depósitos de sus socios.

En cuanto a la liquidez del sistema cooperativo, se mantuvo un registro diario de la evolución de los fondos disponibles de las Coopac nivel 3, nivel 2B y nivel 2A, con activos mayores a S/ 100 millones. Cabe precisar que los fondos disponibles permiten a estas entidades atender las solicitudes de retiro de depósitos y financiamiento de sus socios.

A nivel sistémico, no obstante, después de un periodo de volatilidad observado durante la segunda quincena de marzo, se fue registrando un incremento lento pero progresivo de los fondos disponibles debido a la confluencia de tres factores: (i) un incremento de los depósitos de los socios cooperativos, a pesar de que un número importante de Coopac realizó cambios en sus tarifarios como medida para paliar los efectos de la crisis en sus márgenes financieros; (ii) el acceso a fuentes alternativas de financiamiento, a través de adeudados institucionales o programas públicos; y (iii) la ralentización de los desembolsos de créditos, por temas operativos y estratégicos.

En cuanto a su operatividad, las Coopac, en su punto más bajo, operaron al 85% de su capacidad. Al igual que las entidades del sistema financiero, las Coopac también optaron por una reducción de los horarios en sus agencias y oficinas, así como por el uso de medios alternativos para contactar y atender a sus socios. En casos contados, se vieron obligadas a cerrar algunas agencias por unos días, debido a que su personal fue afectado por el covid-19. Al cierre del año, las 34 Coopac más grandes —que concentran el 85% de los depósitos del sistema— operaban al 97% de capacidad, con 392 puntos activos de red de agencias.

Dado el estrés operativo natural, que ocasionó el estado de emergencia nacional, se optó por priorizar que las Coopac remitan información económico-financiera crítica, y se puso en marcha una modalidad reforzada de supervisión extra situ, prácticamente a diario, por medio de llamadas telefónicas y una serie de reuniones virtuales con fines complementarios (reuniones de carácter informativo semanal, reuniones de carácter técnico para tratar temas específicos y reuniones periódicas de alto nivel para tratar aspectos estratégicos).

Otro aspecto importante para destacar es que, durante el 2020, se observó un comportamiento mixto en aquellas Coopac que venían arrastrando deficiencias estructurales antes de la declaración del estado de emergencia nacional.

En un extremo, se tenía Coopac que aprovecharon la coyuntura para replantear sus modelos de desarrollo, cerrar oficinas no viables, ralentizar su crecimiento para procurar que este se cimente en una base sólida de solvencia, reforzar su solvencia a través de la capitalización de remanentes más allá de los mínimos exigibles por ley, replantear su política de precios para garantizar su viabilidad e identificar eficiencias en torno a los aspectos operativos onerosos. En otro extremo, se tenía Coopac cuyo principal objetivo era sobrellevar la coyuntura, sin mayor capacidad o voluntad de sus órganos de gobierno para implementar aquellos cambios que garanticen su viabilidad de largo plazo.

El sistema cooperativo reprogramó créditos por S/ 5190 millones, lo que representó el 60% del portafolio total de créditos, correspondiente a 233 205 operaciones.

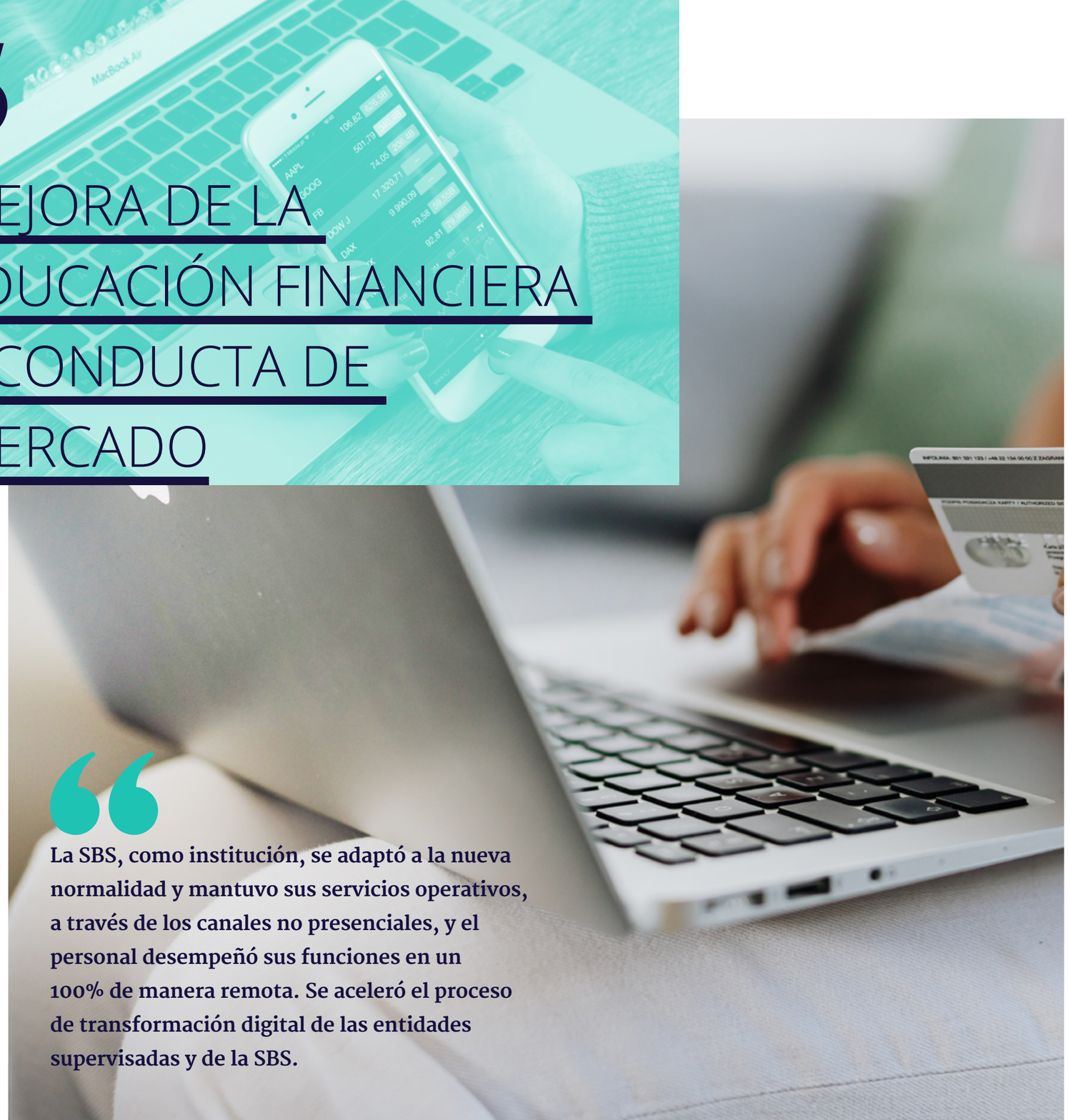
Finalmente, con respecto al inicio de la cobertura del FSDC, el éxito de este mecanismo dependerá de la existencia de Coopac saludables, porque serán los aportes de estas entidades los que permitirán acumular los recursos suficientes para asistir a cualquier entidad del sistema; especialmente, las Coopac nivel 2 —con activos mayores a los S/ 100 millones— y nivel 3. Por ello, con la finalidad de aligerar los costos regulatorios, en un escenario tan desafiante como fue el estado de emergencia nacional por la pandemia del covid-19, se autorizó al FSDC iniciar la recaudación de las primas, que deben pagar las Coopac miembros, en abril 2021.

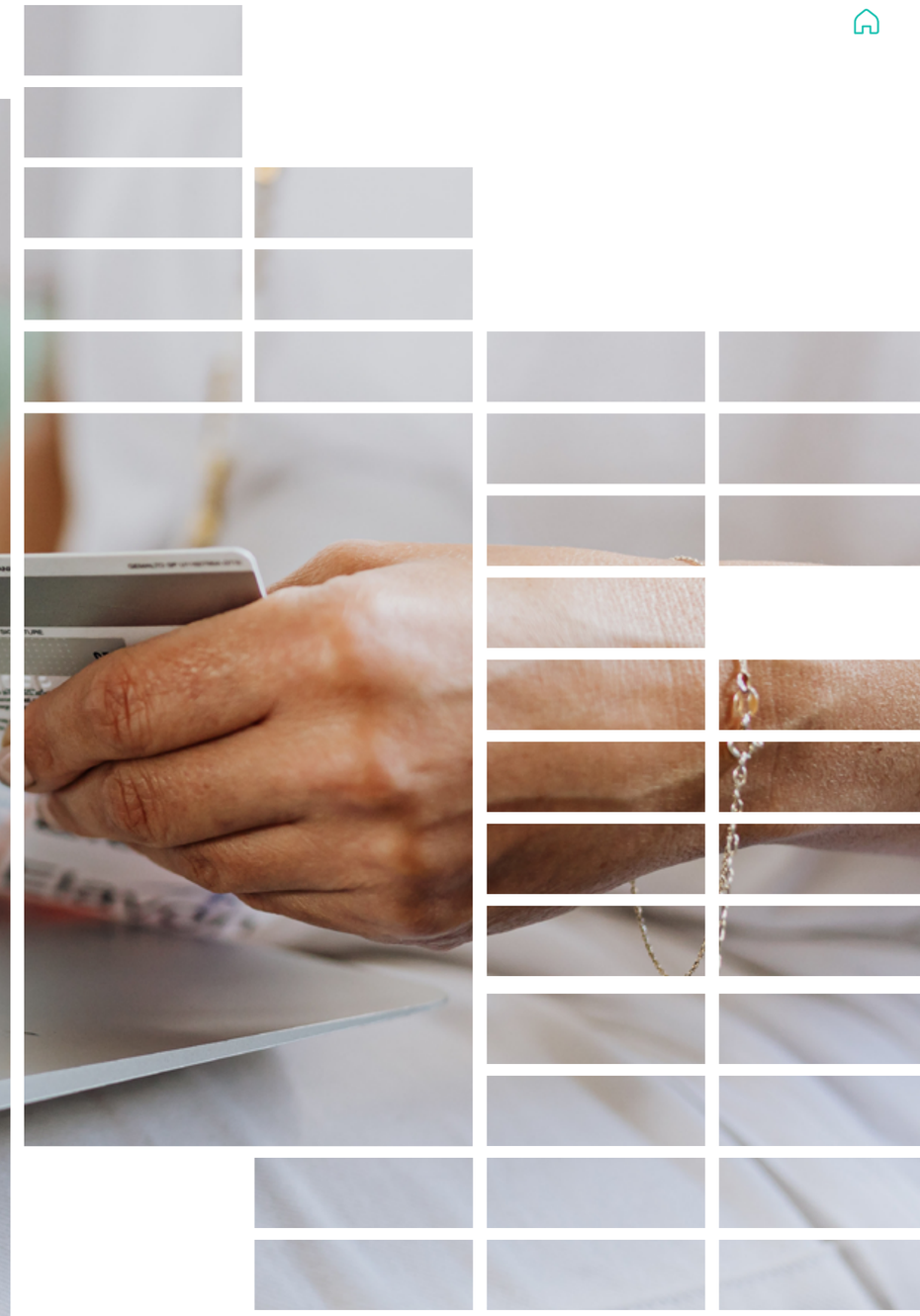
Este retraso en el inicio de la cobertura del FSDC supone, por un lado, apoyar a las Coopac que han cerrado el año con resultados poco favorables; y, por otro lado, minimizar el riesgo sistémico, ya que la labor que realice la SBS en el periodo que queda, hasta que el FSDC empiece a cubrir a los depositantes, resulta crucial y determinante. Por eso, antes de que se inicie la cobertura efectiva del FSDC, resulta clave que las Coopac formulen planes concretos de mejora, los cuales debidamente implementados y supervisados, conforme a las estrategias y objetivos antes descritos, fortalezcan su solvencia, en aras de la estabilidad del sistema y la viabilidad del mecanismo de protección de los depósitos de los socios.

AL CIERRE DEL AÑO, LAS **34** **COOPAC MÁS GRANDES -QUE CONCENTRAN EL** **85%** **DE LOS DEPÓSITOS DEL SISTEMA- OPERABAN AL** **97%** **DE CAPACIDAD, CON** **392** **PUNTOS ACTIVOS DE RED DE AGENCIAS.**

5

MEJORA DE LA EDUCACIÓN FINANCIERA Y CONDUCTA DE MERCADO





La SBS, como institución, se adaptó a la nueva normalidad y mantuvo sus servicios operativos, a través de los canales no presenciales, y el personal desempeñó sus funciones en un 100% de manera remota. Se aceleró el proceso de transformación digital de las entidades supervisadas y de la SBS.

5

MEJORA DE LA EDUCACIÓN FINANCIERA Y CONDUCTA DE MERCADO

> A través de las labores de supervisión que realiza la SBS, es posible determinar si el comportamiento de estas entidades con sus clientes se encuentra alineado a los principios establecidos en la regulación, así como requerir la adopción de medidas preventivas y/o correctivas en caso ameriten; velando por un trato adecuado que promueva la confianza del usuario en los sistemas supervisados y contribuya, finalmente, con el sano desarrollo del mercado y la estabilidad e integridad financiera de dichos sistemas.

a

Conducta de mercado

La adecuada conducta de mercado de las entidades de los sistemas financiero, de seguros y privado de pensiones, en relación con sus usuarios, se manifiesta en sus prácticas de negocio respecto de la oferta de productos y servicios, la transparencia de su información y la gestión de sus reclamos. Mediante las labores de supervisión que realiza la SBS, es posible determinar si el comportamiento de estas entidades con sus clientes se encuentra alineado a los principios establecidos en la regulación; asimismo, requerir la adopción de medidas preventivas o correctivas en caso ameriten, velando por un trato adecuado que promueva la confianza del usuario en los sistemas supervisados y contribuya, finalmente, con el sano desarrollo del mercado y la estabilidad e integridad financiera de dichos sistemas. Cabe señalar que, en el contexto del estado de emergencia nacional, todo esto toma especial relevancia.

En el año 2020, con el objetivo de continuar fortaleciendo el marco regulatorio vigente en materia de gestión de conducta de mercado, mediante Resolución SBS 1870-2020, se modificó el Reglamento de Gestión de Conducta de Mercado del Sistema Financiero, con la finalidad de incorporar reglas mínimas para el adecuado tratamiento de clientes con dificultades temporales para el pago de créditos. Además, se estableció la obligación de las entidades emisoras de tarjetas de crédito de ofrecer, por lo menos, una tarjeta que no cobre la comisión de membresía anual; ello, con el objetivo de brindar mayores alternativas a los usuarios que contraten una tarjeta de crédito y que estos puedan elegir según sus propias necesidades. Adicionalmente, se desarrollaron precisiones en la definición de prácticas abusivas, en cuanto a la provisión de productos y servicios financieros, así como ejemplos de este tipo de prácticas, las cuales se encuentran prohibidas.

Asimismo, se aprobó el Reglamento del Régimen Especial para la Gestión de Conducta de Mercado del Sistema Financiero (Resolución SBS 2304-2020), aplicable a las empresas especializadas, de servicios complementarios y conexos —entre ellas, las empresas emisoras de dinero electrónico (EEDE)—; y a las empresas de operaciones múltiples, cuya solicitud haya sido previamente autorizada por la SBS. En esta norma, se establecen requerimientos

SE REALIZARON

600 VISITAS DE CLIENTE INCÓGNITO A AGENCIAS DE **42** ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO Y ASEGURADOR EN **17** REGIONES ; Y, 215 EVALUACIONES A LA ATENCIÓN EN EL CANAL TELEFÓNICO DE DICHAS EMPRESAS.

para la gestión de conducta de mercado que son proporcionales a la naturaleza, tamaño, complejidad o volumen de operaciones de estas entidades, así como a los productos o servicios financieros ofertados y su público objetivo, siempre con la finalidad de que estas adopten las mejores prácticas en la relación con los usuarios. Asimismo, se consolidan las disposiciones en materia de conducta de mercado de las EEDE.

Adicionalmente, se prorrogó la entrada en vigor de las nuevas disposiciones del Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito (Resolución SBS 5570-2019) hasta el 1 de enero de 2021. Estas disposiciones fortalecen los mecanismos de protección al usuario en las etapas de contratación, uso y cancelación de las tarjetas, incluyendo las medidas de seguridad de las operaciones y productos financieros vinculados a ellas. También se mejora el tratamiento de los financiamientos adicionales a la línea de la tarjeta de crédito (conocidos como líneas paralelas); se empodera al usuario sobre el uso de los servicios adicionales asociados a sus tarjetas; y se asegura que no existan limitaciones para cancelar la tarjeta, en caso esta sea la decisión del usuario. Además, con miras a fortalecer la seguridad de los canales digitales (incluyendo pagos y transferencias, contratación de productos y servicios, modificación de límites y condiciones, entre otros), se publicó un proyecto de Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad, que será aprobado en el 2021.

Considerando los importantes cambios en los patrones de consumo de los usuarios y en la oferta de productos y servicios de las entidades financieras, ocasionados por el estado de emergencia nacional, la SBS reformuló sus actividades y prioridades de supervisión, y las centró en las reprogramaciones de créditos a clientes con dificultades para el pago de sus obligaciones, en la interacción entre las empresas y sus clientes, y en el pago de los fondos liberados por el Gobierno; esto sin perjuicio de la supervisión de la gestión integral de conducta de mercado. Esta reformulación implicó reorganizar la asignación de recursos para la supervisión, potenciar las actividades de inspección —mediante medios alternativos y de manera remota— y emplear nuevas herramientas y fuentes de información alternativas (por ejemplo, redes sociales).

Por otro lado, con la entrada en vigor del Reglamento de Gestión de Conducta de Mercado del Sistema de Seguros, la supervisión de las compañías de seguros y sus comercializadores ha experimentado una evolución similar a la ocurrida en años previos con el sistema financiero. Así, a través de la supervisión a estas entidades, se verifica si la gestión de conducta de mercado implementada es preventiva, liderada por los órganos de gobierno (directorio y gerencia) y se sustenta en el compromiso de toda la organización, con políticas y procedimientos que garanticen el cumplimento de los principios de conducta de mercado y las reglas mínimas establecidos en el reglamento.

En ese contexto, se llevaron a cabo inspecciones bajo la modalidad remota a entidades de los sistemas financiero (21), de seguros (9) y privado de pensiones (3), las cuales fueron seleccionadas considerando su nivel de riesgo. Asimismo, se realizaron 600 visitas de cliente incógnito a agencias de 42 entidades del sistema financiero y asegurador en 17 regiones; y 215 evaluaciones a la atención en el canal telefónico de dichas empresas. Como resultado de las actividades de supervisión, se formularon observaciones y recomendaciones cuya implementación fue monitoreada por la SBS, se hicieron ajustes regulatorios y se aplicaron sanciones ante patrones de conducta inadecuada, las cuales se publicaron en el portal institucional.

Con relación a la mejora continua del proceso y modelo de supervisión, se continuó con el proyecto iniciado en el 2018, que busca dotarlo de mayor eficacia y eficiencia. Al respecto, en el 2020, se implementó un aplicativo que permite la recolección estandarizada y homogénea de los resultados de la gestión de conducta de mercado de las entidades financieras. Asimismo, se culminó con el desarrollo de un módulo de atención de consultas normativas de las entidades supervisadas y gubernamentales, que incorpora esquemas de autogestión y consultas a una base de conocimiento. Asimismo, se puso en marcha la primera versión de una herramienta que permite monitorear medios de prensa y redes sociales, a fin de identificar indicios de inadecuadas prácticas en el sistema financiero, lo cual se convirtió en un insumo adicional para las labores de supervisión.

Para el año 2021, se ha planificado replicar algunos de estos desarrollos en el proceso de supervisión del sistema de seguros, considerando la entrada en vigor del nuevo marco normativo de conducta de mercado para dicho sistema; y proseguir la implementación de mejoras en los procesos y herramientas de supervisión del sistema financiero.

> con miras a fortalecer la seguridad de los canales digitales (incluyendo pagos y transferencias, contratación de productos y servicios, modificación de límites y condiciones, entre otros), se publicó un proyecto de Reglamento para la gestión de la seguridad de la información y la ciberseguridad que será aprobado en el 2021.

BOX 7

Modificación del Reglamento de Gestión de Conducta de Mercado del Sistema Financiero: tratamiento de clientes con dificultades temporales para el pago de créditos durante el estado de emergencia nacional

Ante el impacto económico generado por el estado de emergencia nacional y previendo la dificultad de los clientes para cumplir con el pago de sus obligaciones crediticias, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP facultó a las entidades del sistema financiero a modificar las condiciones contractuales de su cartera de créditos, vía reprogramaciones, a fin de brindar un alivio temporal a los deudores afectados por la coyuntura, sin afectar su clasificación crediticia y evitando que se generen mayores intereses moratorios o penalidades. Sin embargo, la implementación de distintas estrategias de reprogramación, en un periodo tan corto de tiempo, implicó un gran reto para estas entidades. Además, la gran variedad de enfoques aplicados limitó su adecuado entendimiento y evaluación por parte de los usuarios, hecho que generó quejas a través de las redes sociales, reclamos ante dichas entidades y denuncias recibidas por la SBS y el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

Como respuesta a esta situación, y con el objetivo de cautelar que las entidades financieras apliquen un tratamiento homogéneo y transparente a los clientes con dificultades temporales de pago de créditos, se emitió la Resolución SBS 1870-2020, que modificó el Reglamento de Gestión de Conducta de Mercado del Sistema Financiero e incorporó reglas mínimas basadas en los resultados de supervisión y las buenas prácticas internacionales. Estas reglas contemplan la obligatoriedad, por parte de las entidades financieras, de contar con políticas internas aplicables a la atención de reprogramaciones, incluyendo (i) la debida comunicación y transparencia con los clientes; (ii) el establecimiento de canales de fácil acceso para recibir y atender las solicitudes; (iii) la obligación de informar y orientar a los clientes sobre cada alternativa ofrecida y obtener su consentimiento previo antes de aplicar cualquiera de ellas; y (iv) el debido seguimiento y monitoreo periódico de estos clientes en caso presenten nuevas dificultades.

Aspectos mínimos para el tratamiento de clientes con problemas temporales para el pago de créditos en el contexto del estado de emergencia nacional

Comunicación a clientes

- Establecer estrategias de comunicación, según modificación contractual.
- Informar procedimientos y plazos, así como condiciones y consecuencias de incumplimiento.
- Por medios directos pactados y usando lenguaje claro y sencillo.

Solicitud y evaluación del cliente

- Canales de fácil acceso para recepción de solicitud.
- Evaluación de capacidad de pago según perfil.
- Sin intereses moratorios o cargos extra mientras dure evaluación de solicitud.
- Plazo máximo de 7 días para atender la solicitud.

Análisis de alternativas y selección

- Otorgar alternativas según perfil y políticas.
- Información sobre caract., beneficios y riesgos.
- Plazo mínimo para respuesta del cliente: 7 (Hipoteca) y 5 (otros)
- Canales de fácil acceso.
- Comunicación de nuevas condiciones en 15 días.

Seguimiento y monitoreo permanente

- Verificar adecuada aplicación de políticas y procedimientos.
- La empresa puede iniciar nuevo tratamiento en caso de dificultades de pago.

- **Definir e implementar políticas y procedimientos aprobados por el Directorio.**
- **Designar áreas responsables de su implementación y asegurar recursos. OCM verifica cumplimiento.**
- **Si el cliente no cumple sus pagos o no responde a comunicaciones, no hay obligación de continuar tratamiento.**
- **Los plazos establecidos para el tratamiento pueden modificarse por norma de carácter general.**

Sobre el particular, en cumplimiento de esta normativa y de las recomendaciones formuladas por la SBS, las entidades financieras han incorporado mejoras en sus políticas y procedimientos internos, para atender, oportunamente, las solicitudes de reprogramación; difundir información sobre el proceso asociado (por ejemplo, en sus portales web); brindar información mínima asociada a las alternativas de reprogramación ofrecidas; y asegurar el adecuado cálculo de intereses posteriores a la reprogramación, entre otros. Considerando que el impacto del estado de emergencia nacional continúa afectando la economía de los deudores y que, por ende, las entidades financieras siguen aplicando este tratamiento, la SBS se mantendrá vigilante, a fin de asegurar el adecuado cumplimiento del marco normativo y exigir la toma de medidas inmediatas, en caso de detectar situaciones que pudieran generar un perjuicio a los clientes.

b

Servicios al ciudadano

En el escenario del estado de emergencia nacional, que obligó a la SBS y a las empresas bajo su supervisión a modificar su forma de trabajo, se reafirmó el compromiso de la institución con los ciudadanos, asegurando la continuidad de los servicios de orientación y atención al público de manera ininterrumpida —desde el primer día de la declaración de las medidas de aislamiento social— y afrontando satisfactoriamente los niveles de demanda de servicios más elevados de los últimos años[31].

En efecto, las interacciones con los ciudadanos se incrementaron debido a la incertidumbre propia de la coyuntura y la promulgación de medidas económicas dispuestas por el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República, tales como la reprogramación de créditos y el congelamiento de deudas, la caída de la rentabilidad de los fondos del SPP, la suspensión del aporte al SPP correspondiente a abril, el retiro extraordinario de fondos de la compensación por tiempo de servicio (CTS) y el retiro extraordinario de fondos del SPP (D. U. 034-2020, D. U. 038-2020, Ley 31017 y Ley 31068).

En el 2020, la SBS registró 318 460 atenciones a nivel nacional, superior en 16% en relación con el 2019. El 90% de las atenciones correspondieron a orientaciones; el 7% a solicitudes de emisión de constancias, certificado o reportes, y el 3% a denuncias y reclamos.

A partir del 17 de marzo, el servicio de orientación al ciudadano suspendió la atención presencial en todo el territorio nacional (en las oficinas y los módulos regionales); consecuentemente se registró un desplazamiento de la demanda de servicios de orientación del canal presencial hacia los canales no presenciales. El 91% del total de las orientaciones se brindó a través de estos últimos (telefónico y virtual: chat, correo y mensajes vía Facebook). Entre estos, el que registró un mayor incremento (unas siete veces más), en comparación al año previo, fue el servicio de mensajería de Facebook, a través del cual se brindaron 24 172 orientaciones. Adicionalmente, es importante mencionar que, a partir de octubre, se amplió el horario de atención en los canales telefónico y chat de 8:30 a. m. a 6:00 p. m.

Respecto del servicio de Reporte de Deudas SBS, en su versión web y móvil (App SBS), se registraron 2 604 397 consultas. Desde su implementación, en octubre de 2015, se han reportado 9 217 895 accesos, de todas las regiones del país y más de 100 países.

En lo que se refiere a las denuncias presentadas contra las entidades supervisadas, se recibió un total de 8548, 92% más que el 2019. Entre las denuncias archivadas (6686), solo en el 8% de los casos se detectaron posibles indicios de vulneración del marco normativo que rige las actividades reguladas y supervisadas por la SBS; de estos, los principales motivos fueron demora o falta de atención de los reclamos presentados dentro del plazo establecido normativamente; reportes errados ante la Central de Riesgos de la SBS; modificaciones unilaterales en las tarifas sin comunicación previa; aplicación incorrecta de pagos anticipados y adelantos de cuotas; demora en el traslado de CTS, y cobros indebidos de intereses, comisiones y gastos, entre otros.

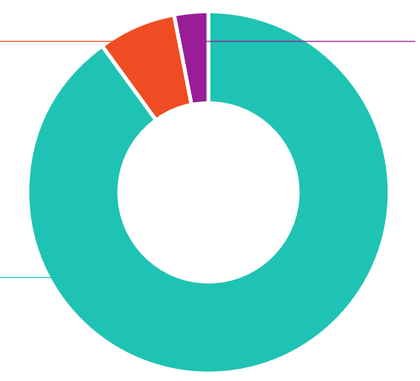
Los reclamos contra las AFP se incrementaron en 175%. De los 1337 reclamos recibidos, el 45% estuvo referido al retiro extraordinario de los fondos de pensiones.

Dado el incremento sustancial de la demanda de los servicios que ofrece la SBS, se buscó impulsar una mayor eficiencia a los procedimientos, para lo cual se implementaron mejoras, tales como la simplificación de procesos, uso de recursos digitales, reorganización de la asignación de carga de trabajo y reducción del tiempo de atención. Por ejemplo, en el caso de las consultas por el canal virtual —correo electrónico—, se logró una reducción del plazo de atención de seis a dos días hábiles. Asimismo, se consolidaron iniciativas de transformación digital, con relación a los servicios puestos a disposición de los ciudadanos. Destacan las siguientes:

- La digitalización del procedimiento de emisión de la constancia de depósito, lo que permitió que los ciudadanos pudieran acceder al servicio desde el Portal de Orientación y Servicios al Ciudadano, mediante un trámite virtual.
- La habilitación de una mesa de partes virtual, mediante el correo mesadepartesvirtual@sbs.gob.pe, a fin de establecer un medio digital para recibir documentos y/o comunicaciones dirigidas a la SBS.
- La incorporación de la notificación electrónica para los servicios al ciudadano.
- La puesta en producción del servicio de notificación electrónica (Sisne) para los documentos internos y externos emitidos por la SBS, con lo cual se simplificó el proceso de generación y notificación de documentos oficiales.

Adicionalmente, la SBS continuó trabajando en la implementación del chatbot Sebas, canal de atención que permitirá brindar orientación 24/7 a los ciudadanos, desde las plataformas digitales.

EN EL 2020, LA SBS REGISTRÓ 318 460 ATENCIONES A NIVEL NACIONAL, SUPERIOR EN 16% EN RELACIÓN CON EL 2019



31 En el 2020, se registró un incremento del 80% con respecto al promedio de atenciones a nivel nacional registradas en los últimos ocho años (2012-2019).

C

Educación financiera

La SBS ha trabajado diversas iniciativas y programas de educación financiera, con el objetivo de desarrollar competencias y capacidades en los ciudadanos, de tal manera que les permita administrar adecuadamente sus finanzas personales; usar responsablemente los servicios financieros; reconocer sus deberes y derechos como consumidores financieros; y generar una mayor confianza en los sistemas supervisados.

Durante el 2020, el estado de emergencia nacional puso de manifiesto la importancia de la educación financiera como herramienta fundamental para mejorar la resiliencia y bienestar financiero de los ciudadanos. En este sentido, los programas de educación financiera de la SBS tomaron un rol protagónico al desarrollar en la población capacidades vinculadas al manejo responsable de sus finanzas personales y, al mismo tiempo, al ayudarla a mejorar su capacidad de resistencia en momentos de crisis, con cursos, recursos educativos y herramientas financieras puestas a disposición, con miras a contribuir en su recuperación frente a las dificultades ocasionadas por la coyuntura.

En este orden de ideas, los programas de educación financiera de la SBS, Finanzas en el Cole y Finanzas para Ti, adoptaron una metodología de enseñanza remota, con el consecuente diseño de nuevos recursos educativos vinculados al manejo de las finanzas personales durante el estado de emergencia nacional, así como los nuevos retos vinculados a la creciente digitalización de los canales y servicios financieros. Para ello, la SBS se adecuó a la nueva normalidad, diseñando estrategias enfocadas a mejorar los entornos virtuales que ofrece la institución, con el objetivo de llegar de manera eficiente a diferentes segmentos de la población. Estas estrategias se centraron en el diseño de recursos digitales: mensajes en canales digitales, podcasts y cartillas informativas sobre el impacto del covid-19 en las finanzas personales. Asimismo, debido a que la coyuntura obligó a todos los ciudadanos a evitar el contacto físico y las aglomeraciones, se dieron importantes cambios en el modo de acceder y usar los servicios financieros; entre ellos, un mayor uso de los canales digitales frente a los presenciales para realizar las transacciones financieras. En marzo, la SBS, priorizando el bienestar de los ciudadanos, enfrentó nuevos retos e incluyó, en sus programas de educación financiera, temas de actualidad como la ciberseguridad y el uso de canales digitales, los que fueron bien recibidos por los beneficiarios de estos programas.

Programa Finanzas en el Cole.
Se trata de un programa de formación docente que tiene como objetivo que los docentes de instituciones educativas públicas desarrollen competencias financieras; se les brinda recursos educativos que les permitan desarrollar en sus estudiantes competencias, capacidades y actitudes para gestionar adecuadamente sus recursos, de modo que, en el futuro, puedan ser capaces de tomar decisiones financieras responsables. Desde el 2007 a la fecha, este programa ha capacitado a 19 000 docentes en todas las regiones del país. En el 2020, se llevaron a cabo 16 de estos programas, de los cuales 15 correspondieron a la modalidad de enseñanza remota y uno de manera presencial (región Amazonas, sede Chachapoyas), con un total de 1721 docentes de primaria y secundaria capacitados en todo el territorio nacional.

La SBS coordinó con el Ministerio de Educación (Minedu) la difusión de diversos materiales y recursos de educación financiera desarrollados para docentes y estudiantes de primaria y secundaria, los cuales fueron incorporados en la estrategia de educación a distancia Aprendo en Casa, que propone experiencias de aprendizaje alineadas al currículo nacional para que los niños puedan seguir aprendiendo desde sus hogares, usando diversos canales de comunicación. Este hecho constituye un logro muy importante para la SBS porque, a través de esta estrategia de enseñanza, la educación financiera llegó a cerca de seis millones de estudiantes en todo el Perú. El aporte de la SBS en Aprendo en Casa ha contribuido al logro de los objetivos del Minedu durante el estado de emergencia nacional.

Por otro lado, en el 2019, la SBS, en alianza con la Fundación Sparkassen y la Unidad de Gestión Local de Ventanilla, ejecutó el Programa Piloto de Finanzas en el Cole con docentes de educación primaria y realizó una evaluación de su impacto en los estudiantes de tercero y cuarto grado de primaria. La evaluación, realizada en el 2020, evidenció que los estudiantes, particularmente los de cuarto grado de primaria, mejoraron sus capacidades en el entendimiento del rol que cumplen los agentes económicos y en sus prácticas de ahorro y deuda. El programa piloto Finanzas en el Cole, con docentes de educación primaria, demostró su efectividad en la implementación de la educación financiera con los estudiantes.

Programa Finanzas para Ti.
Este programa tiene como objetivo mejorar los conocimientos financieros de los ciudadanos en todo el país, apoyados en un proceso de desarrollo de capacidades, habilidades y actitudes dirigido a utilizar, de manera responsable, los servicios financieros brindados por las entidades de los sistemas financiero, de seguros y de pensiones. Del 2012 a la fecha, se ha capacitado a más de 140 000 personas en el ámbito nacional. En el año 2020, recibieron la capacitación 40 000 personas, comprendidas en los grupos de jóvenes, adultos y microempresarios.

Es importante destacar la alianza estratégica de la SBS con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) y la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide), mediante la cual se capacita a microempresarios en temas financieros. En el caso de Cofide, estas capacitaciones se dan como parte del programa Miércoles Financiero, que se viene desarrollando durante más de cuatro años consecutivos. Asimismo, es importante resaltar el trabajo realizado en alianza estratégica con la Municipalidad Metropolitana de Lima, por el cual se brinda herramientas financieras a jóvenes y adultos con diversas conferencias de cultura financiera y cursos especializados. Finalmente, a través de diversas municipalidades como la de San Miguel, se vienen organizando talleres dirigidos al público en general sobre diversos temas relacionados a las finanzas personales y fraudes financieros.

Recursos de educación financiera en entornos digitales.
Debido al estado de emergencia nacional, la SBS viene desarrollando plataformas digitales para llegar a todos los segmentos de la población. Asimismo, se desarrollaron estrategias para la difusión de materiales de educación financiera, se trabajaron mensajes y podcasts sobre temas financieros y, además, cartillas sobre el impacto del covid-19 en las finanzas personales. Estas acciones se desarrollan de manera transversal y están alineadas con la Política Nacional de Inclusión Financiera (PNIF).

Resultados de la prueba PISA 2018.
En el 2018, el Perú volvió a participar en la evaluación PISA, en el módulo de educación financiera, para lo cual se evaluó a 4981 estudiantes de 342 instituciones educativas de todas las regiones del país. Estos resultados fueron difundidos públicamente el 7 de mayo de 2020. En el módulo de educación financiera de la prueba PISA participaron 20 países: 13 países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y siete países fuera de dicho organismo. De acuerdo con los resultados, el Perú está en el puesto 18 de 20 países y ha subido siete puntos con respecto a la evaluación en el 2015 (de 403 a 411 puntos).

Si bien los resultados muestran aún brechas importantes en materia de educación financiera en los estudiantes, es importante destacar que los estudiantes peruanos se ubican en el segundo lugar en la premisa de “Disfruto hablar sobre temas de dinero”; es decir, las actitudes de los estudiantes para aprender estos temas es una característica favorable (existe predisposición para aprender). Asimismo, el Perú se ubica en el segundo puesto, entre los países participantes, en el porcentaje de estudiantes que obtienen esta información gracias a sus profesores (73,8%), lo que reafirma la notable labor que vienen realizando los docentes para transmitir contenidos de educación financiera y la importancia de focalizar acciones para su permanente capacitación.

BOX 8

Programas de educación financiera en el contexto del estado de emergencia nacional

Debido al estado de emergencia nacional, declarado por la pandemia del covid-19, los programas de educación financiera tuvieron que readecuarse a una metodología de enseñanza remota, específicamente los programas Finanzas en el Cole y Finanzas para Ti.

Ante la nueva normalidad, se diseñaron nuevos recursos educativos vinculados al manejo de las finanzas personales durante la pandemia y temas emergentes como digitalización de los servicios financieros. En este sentido, pese a esta difícil coyuntura nacional y mundial, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP logró capacitar de manera virtual a más de 1700 docentes a través del programa Finanzas en el Cole y a más de 40 mil personas a través del programa Finanzas para Ti, en temas de cultura financiera, ciberseguridad y uso de canales digitales.

Se debe destacar el logro transcendental de la SBS con el apoyo al Ministerio de Educación en la incorporación de temas de educación financiera en la estrategia educativa Aprendo en Casa, lo cual benefició a unos seis millones de estudiantes de todo el país.

la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP logró capacitar de manera virtual a más de

1700

docentes a través del programa Finanzas en el Cole y a más de

40 mil

personas a través del programa Finanzas para Ti, en temas de cultura financiera, ciberseguridad y uso de canales digitales.

d

Inclusión financiera

La presencia del sistema financiero se ha extendido a lo largo del territorio peruano durante los últimos años. En efecto, el número de puntos de atención disponibles en el ámbito nacional se incrementó en 123 000 entre junio de 2015 y junio de 2020, principalmente, debido al aumento del número de cajeros corresponsales, lo que permitió una mayor penetración de los servicios financieros. Así, el 86% del total de distritos contaba con puntos de atención del sistema financiero a junio de 2020, cifra que alcanzó al 98% de la población.

Adicionalmente, a propósito del estado de emergencia nacional, los usuarios del sistema financiero modificaron sus preferencias con respecto al uso de los canales financieros: pasaron de realizar transacciones por canales físicos (cajeros automáticos y POS) a efectuar operaciones por medio de canales digitales. De esta manera, las transacciones mensuales del sistema financiero por banca móvil, banca por internet y e-commerce aumentaron entre febrero y noviembre en 132%, 55% y 42%, respectivamente. Asimismo, la afiliación y el uso del dinero electrónico y las billeteras electrónicas presentaron un crecimiento importante. Por ejemplo, a diciembre, BIM y YAPE alcanzaron más de 904 000 y cinco millones de usuarios, respectivamente. En tal sentido, el incremento del uso de productos y servicios financieros digitales ha permitido impulsar el proceso de inclusión financiera y ha generado una oportunidad para que la SBS desarrolle un marco normativo, acorde con el ecosistema financiero digital peruano, continuando con el impulso al proceso de inclusión financiera responsable.

La SBS ha desarrollado un marco regulatorio y de supervisión que permite garantizar la estabilidad, integridad, protección e inclusión financiera en el actual estado de emergencia nacional. En esa línea, se emitieron diferentes disposiciones para facilitar el uso de determinados productos y servicios financieros. Se incrementó el límite en las transacciones con cuentas básicas (Resolución SBS 1286-2020 del 14 de abril); se amplió el límite de operaciones con dinero electrónico (Resolución SBS 1262-2020 del 20 de marzo); y se modificó el marco normativo aplicable al dinero electrónico (Resolución SBS 1354-2020 del 9 de mayo), con la finalidad de establecer medidas que impulsen el uso de cuentas de dinero electrónico, como instrumento de inclusión financiera para facilitar el pago de los fondos otorgados o liberados por leyes y otras normas.

Se adoptaron, además, políticas prudenciales, con el objetivo de preservar la estabilidad del sistema financiero, asegurar la continuidad de negocio de las entidades financieras y asegurar el funcionamiento del mercado. En este sentido, se facultó a las entidades del sistema financiero y a las Coopac a adoptar medidas de excepción con el propósito de que los deudores puedan cumplir el pago de sus créditos, como la modificación de las condiciones contractuales de las diversas modalidades de créditos, sin que ello constituya una refinanciación (oficios múltiples 11150-2020 y 11162-2020, del 16 de marzo).

Finalmente, la SBS y el Ministerio de Economía y Finanzas, en su calidad de secretario técnico y presidente de la Comisión Multisectorial de Inclusión Financiera (CMIF), respectivamente, vienen liderando la elaboración del plan estratégico multisectorial (PEM) de la PNIF[32], que incluirá medidas de política que permitirán el logro de los objetivos prioritarios. Cabe destacar que la SBS liderará medidas de políticas vinculadas con la educación financiera para la población adulta y las familias, la generación de un sistema de información para la inclusión financiera, la creación de una plataforma integrada de reclamos o denuncias contra empresas del sistema financiero, y la creación de un comité especializado de conducta de mercado.

32 Decreto Supremo N° 255-2019-EF del 5 de agosto de 2019.

BOX 9

Microscopio Global 2020

El Perú alcanzó, junto a Colombia, el primer lugar en el ranking del entorno propicio para la inclusión financiera del Microscopio Global 2020. De esta manera, nuestro país volvió a liderar el ranking internacional, formado por 55 países, luego de ubicarse en el segundo lugar por dos años consecutivos. Se obtuvo un puntaje global de inclusión financiera de 82 sobre un total de 100 puntos, ubicándose 23 puntos por encima del promedio de la región de Latinoamérica y el Caribe, y mejorando un punto con respecto al 2019.

El Microscopio Global destacó las mejoras efectuadas en el marco regulatorio de las *fintech*. En efecto, el Decreto de Urgencia 013-2020 del 22 de enero, que promueve el financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas, emprendimientos y *startups*, estableció las normas que regulan y supervisan la actividad de financiamiento participativo. Asimismo, se reconoció que se haya priorizado la regulación de la industria *fintech* en el Plan Nacional de Competitividad y Productividad[33], el cual establece la implementación de una plataforma regulatoria *fintech* como hito del año 2025. Adicionalmente, nuestro país obtuvo los máximos puntajes en las subcategorías de requisitos de entrada al mercado y requisitos de operación y diligencia debida; y, además, fue reconocido como uno de los 12 países que cuenta con expertos técnicos exclusivos y especializados para supervisar instituciones financieras no bancarias.

Sin embargo, aún hay una serie de temas pendientes en los que se debe continuar trabajando, los cuales están siendo considerados en la elaboración del Plan Estratégico Multisectorial (PEM) de la Política Nacional de Inclusión Financiera. Al respecto, el Microscopio Global identificó como oportunidades de mejora aspectos como el incremento del porcentaje de hogares con acceso a internet (36% al 2020), el aumento del número de POS por cada 100 mil personas (883 al 2020) y el incremento de la puntuación del Global Security Index, indicador que mide el compromiso del Gobierno con la seguridad cibernética (40 puntos al 2020[34]), entre otros. También, se recomienda fortalecer la protección legal contra el crimen cibernético, ya que el Perú se ubica en el puesto 30 de 55 países en el ranking que mide el marco legal para investigar y procesar el delito cibernético, alejado de sus pares de la región como Brasil (12), Colombia (20) y Chile (21).

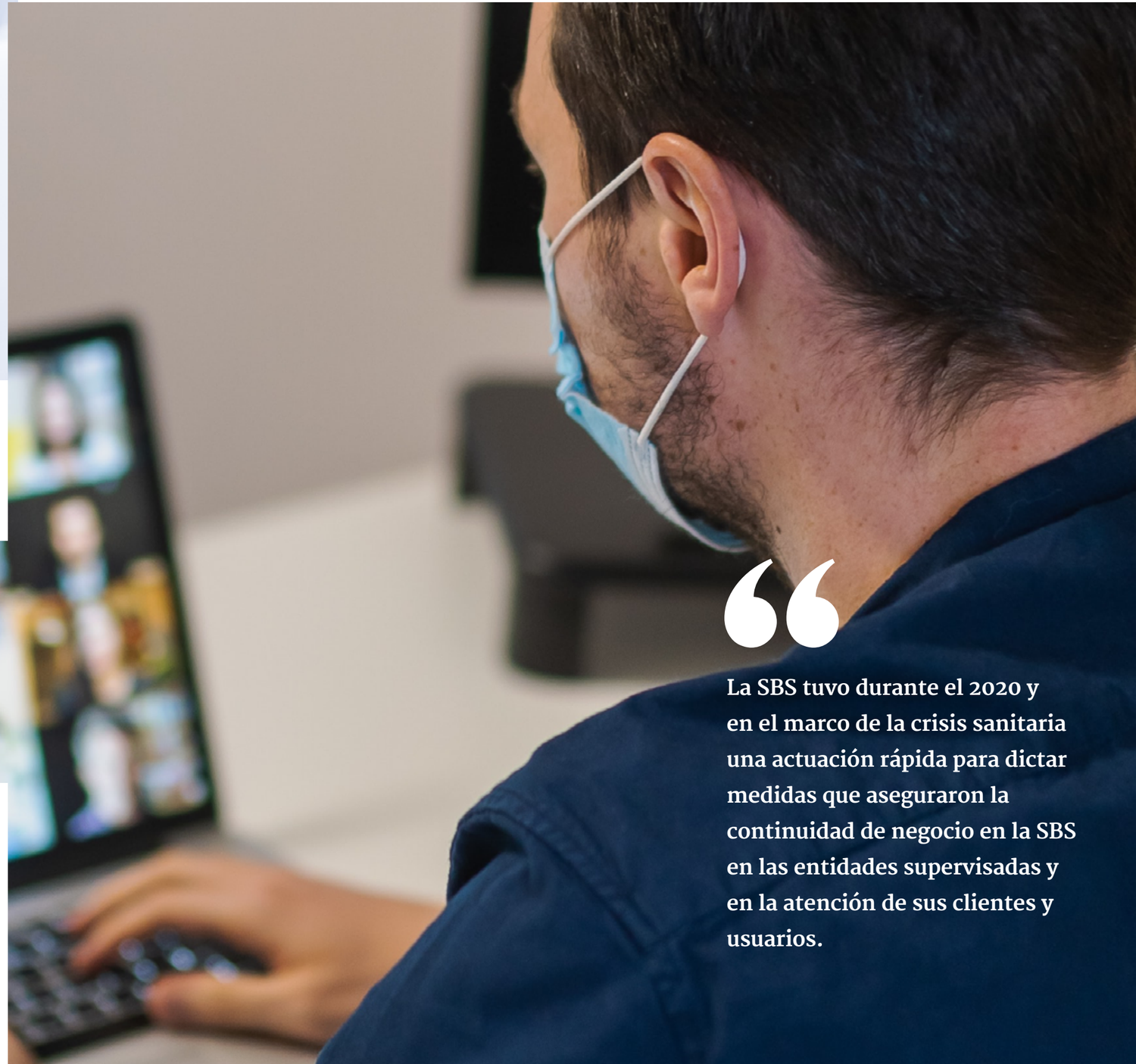
Finalmente, el Microscopio Global 2020 resaltó las acciones adoptadas por la SBS durante el estado de emergencia nacional, tales como las facultades otorgadas a las entidades financieras, y cooperativas de ahorro y crédito no autorizadas a captar recursos del público (Coopac) para que adopten medidas de excepción con la finalidad de que los deudores puedan cumplir el pago de sus créditos; la ampliación de los límites aplicables a las operaciones con cuentas básicas; y la modificación del marco normativo aplicable al dinero electrónico. Todas estas medidas favorecieron la estabilidad financiera e impulsaron los servicios financieros digitales en el Perú.

> Nuestro país obtuvo los máximos puntajes en las subcategorías de requisitos de entrada al mercado y requisitos de operación y diligencia debida; y, además, fue reconocido como uno de los 12 países que cuenta con expertos técnicos exclusivos y especializados para supervisar instituciones financieras no bancarias.

33 Decreto Supremo N° 237-2019-EF del 28 de julio de 2018.
34 De un total de 100 puntos.

6

PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO



> La SBS tuvo durante el 2020 y en el marco de la crisis sanitaria una actuación rápida para dictar medidas que aseguraron la continuidad de negocio en la SBS en las entidades supervisadas y en la atención de sus clientes y usuarios.

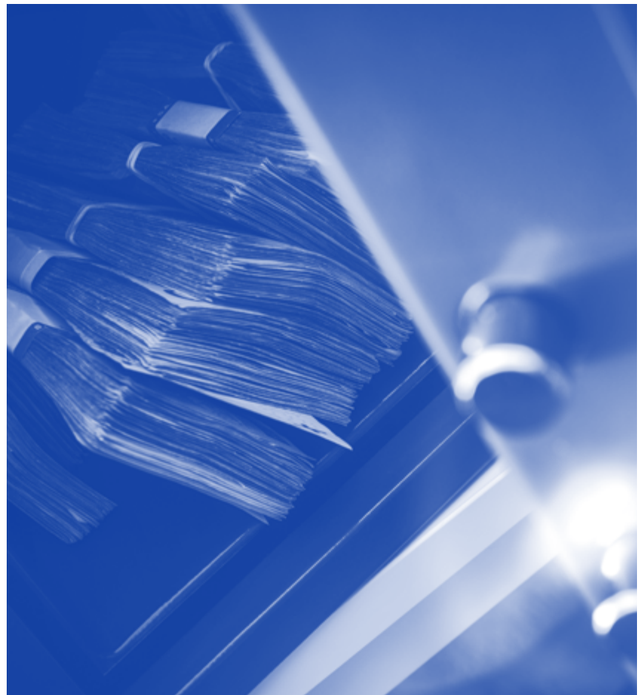
6

PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Durante el 2020, el Departamento de Supervisión de la Superintendencia Adjunta de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) realizó 252 actividades de supervisión a sujetos obligados, con el objetivo de continuar verificando el cumplimiento de la normativa de prevención y detección del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT). De estas actividades, 48 correspondieron a visitas de supervisión, 41 a supervisiones sin desplazamiento para verificar la implementación del sistema de prevención de LA/FT, 13 a visitas preventivas y 150 a actividades de supervisión *extra situ.*

Asimismo, a efectos de brindar orientación y asistencia a los sujetos obligados en la implementación de sus sistemas de prevención de LA/FT, la UIF habilitó nuevos canales de atención de consultas (vía telefónica y un correo electrónico especialmente creado para ese fin). Respecto de las brechas identificadas en los sistemas de prevención, durante el proceso de supervisión, se realizaron 50 actividades de retroalimentación, mediante reuniones virtuales, brindando orientación y asistencia.

Además, se utilizaron diversos medios para difundir información sobre el sistema de prevención de LA/FT y los nuevos riesgos generados por la coyuntura. Se elaboraron 12 boletines informativos, enviados a los correos electrónicos de los oficiales de cumplimiento y sujetos obligados; se publicó información de interés en las redes sociales (Facebook, Twitter y LinkedIn); y se elaboró una guía sobre la implementación de procedimientos de debida diligencia en el conocimiento al cliente, con un enfoque basado en riesgos, para el sector de compraventa de vehículos nuevos.



> A efectos de brindar orientación y asistencia a los sujetos obligados en la implementación de sus sistemas de prevención de LA/FT, la UIF habilitó nuevos canales de atención de consultas (vía telefónica y un correo electrónico especialmente creado para ese fin).

Por otro lado, para incentivar el cumplimiento de las normas del sistema de prevención de LA/FT, se iniciaron 1463 procedimientos administrativos sancionadores (PAS), de los cuales se resolvieron 1408. El monto total de las multas impuestas por sanciones consentidas ascendió a 2561,37 UIT (S/ 10 millones, aproximadamente). Asimismo, se impusieron 79 amonestaciones y 25 medidas correctivas.

PARA INCENTIVAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN DE LA/FT, SE INICIARON **1 463**

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES (PAS), DE LOS CUALES SE RESOLVIERON **1 608**

EL MONTO TOTAL DE LAS MULTAS IMPUESTAS POR SANCIONES CONSENTIDAS ASCENDIÓ A 2 561.37 UIT (S/ 10 MILLONES, APROXIMADAMENTE). ASIMISMO, SE IMPUSIERON 79 AMONESTACIONES Y 25 MEDIDAS CORRECTIVAS.

BOX 10

Planeamiento de la supervisión basada en riesgos

Durante el periodo comprendido de enero al 12 de marzo de 2020, el proceso de planeamiento de la supervisión de los sistemas de prevención de lavado de activo y financiamiento del terrorismo (LA/FT) se realizó con un enfoque basado en riesgos (EBR), utilizando matrices para seleccionar a los sujetos obligados a supervisar. Este planeamiento se vio afectado por la declaración del estado de emergencia nacional debido a la pandemia del covid-19. Las medidas de aislamiento social y las restricciones aplicadas a la actividad económica interrumpieron las operaciones de los sujetos obligados, lo que limitó la posibilidad de realizar supervisiones in situ por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

La SBS puso en práctica un plan de contingencia del trabajo remoto, para lo cual dotó a todos los supervisores de la infraestructura tecnológica necesaria para trabajar bajo dicha modalidad.

De esta manera, se reestructuró el proceso de supervisión reemplazando la modalidad *in situ* por una modalidad sin desplazamiento, manteniendo los mismos objetivos, pero ejecutada en un 100% de manera remota y apoyada en el uso de herramientas tecnológicas, como i) un software de videoconferencia para reuniones durante la diligencia; ii) un buzón electrónico para notificaciones y comunicaciones oficiales, así como para el envío y recepción de información; iii) el uso de la firma digital para la formalización de documentos; iv) una aplicación que permite contar con un anexo telefónico virtual que recibe y realiza llamadas a otros anexos, dentro de la plataforma de telefonía de la SBS, y a números externos desde el celular o computadora personal del supervisor; y v) los accesos remotos a los sistemas de la UIF-SBS, entre otros.

se reestructuró el proceso de supervisión reemplazando la modalidad in situ por una modalidad sin desplazamiento, manteniendo los mismos objetivos, pero ejecutada en un 100% de manera remota y apoyada en el uso de herramientas tecnológicas.

La finalidad de las labores de supervisión fue orientar a los sujetos obligados. Así, se identificaron brechas en la implementación de los sistemas de prevención de LA/FT, se hicieron retroalimentaciones y se plantearon recomendaciones que deben ejecutarse en los plazos establecidos en los planes de adecuación, de lo contrario podrían ser sujetos a sanción.

En el contexto del estado de emergencia nacional, se publicó la Resolución SBS 2317-2020, que estableció un régimen temporal de sanciones no pecuniarias para los procesos administrativos sancionadores (PAS), a iniciarse o en trámite hasta el 15 de marzo. Conforme a esta norma, corresponde imponer sanción de amonestación y disponer, en caso corresponda, la implementación de medidas correctivas.

La UIF continuó el proceso de elaboración de una nueva evaluación nacional de riesgos de LA/FT (ENR), que se inició formalmente en sesión de la Comisión Ejecutiva Multisectorial contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Contralaft), realizada en junio de 2019, con la finalidad de implementar las recomendaciones relacionadas a la identificación, evaluación y comprensión de los riesgos en materia de LA/FT, incluidas en el último Informe de Evaluación Mutua del Perú, aprobado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). Así, se continuó con el envío de 63 tipos de cuestionarios, a través de canales digitales, a un total de 7635 personas, todas ellas representantes de las diferentes entidades del sector público y privado que participan en la Comisión. Asimismo, con la asistencia técnica de la Cooperación Alemana, implementada a través de GIZ, se continuó desarrollando el estudio denominado Identificación de Riesgos de LA/FT en Personas y Estructuras Jurídicas.

Como parte del proceso de análisis estratégico, para identificar posibles riesgos, tendencias y patrones en materia de LA/FT, se desarrolló un informe estratégico con el fin de establecer el nivel de riesgos LA/FT a los que se encuentran expuestas las empresas de arrendamiento financiero, creadas mediante el D. U. 013-2020. Asimismo, se desarrollaron informes sobre la minería ilegal como delito precedente del lavado de activos, los movimientos de tarjetas de crédito emitidas en el extranjero con consumo en el Perú y el movimiento transfronterizo de dinero en efectivo y/o instrumentos negociables por montos superiores a US$ 10 000 o su equivalente.

Con relación a las actividades de retroalimentación a los sujetos obligados, se realizaron un total de 1154 actividades. De este total, el 85% correspondió a talleres virtuales, en los que se abordaron temas como la remisión del registro de operaciones, aspectos normativos del registro de operaciones, reversión del registro de operaciones, calidad de los reportes de operaciones sospechosas (ROS) e información estadística.

En el ejercicio 2020, la UIF recibió 10 908 ROS, número 25% inferior respecto del año previo, debido a las medidas de aislamiento social y restricción de las actividades económicas. En cuanto al tipo de sujeto obligado remitente de los ROS, la mayor participación continuó correspondiendo a los bancos con un 36%, seguido de los notarios públicos con un 26%.

Asimismo, la UIF emitió 1001 comunicaciones de inteligencia dirigidas a las autoridades competentes, de las cuales 753 correspondieron a comunicaciones de inteligencia nacional, 220 a comunicaciones de inteligencia internacional y 28 a comunicaciones que pueden ser utilizadas con valor probatorio. Respecto de los informes de inteligencia financiera (IIF), en el periodo 2011-2020, el monto total involucrado ascendió a US$ 15 590 millones. Este monto, por tipo de delito precedente, se distribuyó entre la minería ilegal (53%), el tráfico ilícito de drogas (16%), la defraudación tributaria (10%) y los delitos contra la administración pública (9%). Solo en el año 2020 se emitieron IIF por un monto total involucrado de US$ 1437 millones, de los cuales el 93% correspondió a la minería ilegal como delito precedente.

En cumplimiento de lo establecido en la sexta disposición complementaria, transitoria y final de la Ley 28306, que señala la obligación de declarar movimientos transfronterizos de instrumentos financieros negociables emitidos al portador o dinero en efectivo por montos superiores a US$ 10 000 o su equivalente, y la prohibición de efectuar movimientos similares de montos superiores a US$ 30 000 o su equivalente, las autoridades aduaneras realizaron diez intervenciones. El monto total transportado por las personas intervenidas ascendió a US$ 297 328. Con respecto a los reportes de acreditación, solo se recibió sustento de la licitud del dinero de tres intervenciones, de las cuales solo en un caso se acreditó razonablemente la licitud del dinero.

BOX 11

Rol del análisis operativo durante el estado de emergencia nacional

Se realizaron **276** actividades de retroalimentación a los sujetos obligados, en los que se abordaron temas relacionados, principalmente, a la emisión de los reportes de operaciones sospechosas (ROS) y a la guía para el llenado de los campos descriptivos del formato ROS, a fin de mejorar la calidad de dichos reportes.

Durante los primeros meses del estado de emergencia nacional, y en tanto la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP definía las políticas de acceso a información confidencial de manera remota, gran parte del esfuerzo del análisis operativo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) estuvo orientado a las siguientes actividades:

- **Normalización de procedimientos.** Se actualizaron todos los documentos normativos internos con la finalidad de perfeccionar los manuales, procedimientos y formatos, a fin de optimizar los tiempos que los equipos de análisis operativo destinan a atender las diferentes actividades propias del departamento.

- **Retroalimentación a los sujetos obligados.** Se realizaron 276 actividades de retroalimentación a los sujetos obligados, en los que se abordaron temas relacionados, principalmente, a la emisión de los reportes de operaciones sospechosas (ROS) y a la guía para el llenado de los campos descriptivos del formato ROS, a fin de mejorar la calidad de dichos reportes.

- **Desarrollo de tipologías.** Como producto de la experiencia en el análisis y elaboración de documentos de inteligencia financiera, se identificó y elaboró una recopilación de las tipologías relacionadas al delito de lavado de activos, sus delitos precedentes y al financiamiento del terrorismo más utilizadas en nuestro país. Estas tipologías se vienen difundiendo en las entidades involucradas en la lucha contra el LA/FT con la finalidad de apoyar sus sistemas de prevención y detección.

Para los casos urgentes, se habilitó el acceso remoto y presencial a información confidencial desde que se inició el estado de emergencia nacional. A partir del segundo semestre, tras la incorporación de elementos adicionales de seguridad de la información, el equipo de análisis operativo inició un proceso progresivo de acceso a la información confidencial, permitiendo realizar lo siguiente:

- **Trabajos conjuntos con las fiscalías especializadas en corrupción de funcionarios.** Se desarrollaron trabajos conjuntos de cooperación interinstitucional con diversas fiscalías especializadas en corrupción de funcionarios del Ministerio Público, en los que se compartió información de inteligencia y de trabajo de campo, lo que permitió identificar los vínculos existentes entre los funcionarios de una entidad del Estado y los proveedores ganadores de procesos de contratación en dicha entidad. Todos estos procesos de contratación estuvieron relacionados a compras durante el estado de emergencia nacional.

- **Congelamiento administrativo de fondos.** En cumplimiento de sus funciones, la UIF ejecutó ocho medidas de congelamiento administrativo de fondos, convalidadas judicialmente, en relación con presuntos fondos ilícitos del delito de lavado de activos. Estas medidas fueron realizadas en coordinación con el Ministerio Público, específicamente con las fiscalías especializadas en delitos en lavado de activos y las fiscalías especializadas contra la criminalidad organizada. Como resultado de estas, se congeló cerca de un millón de dólares. Cabe precisar que este tipo de medidas permiten evitar el retiro o transferencia de fondos ilícitos, neutralizando financieramente a las organizaciones criminales.

- **Herramientas informáticas desarrolladas.** Se implementó en la intranet institucional el módulo de búsquedas de información (BINI) para facilitar el trabajo remoto y mejorar la operatividad en el proceso de búsqueda de la información. Asimismo, como parte del trabajo de cooperación interinstitucional con el Ministerio Público, se implementó el servicio de solicitudes de información electrónica de uso exclusivo de las fiscalías de extinción de dominio. Esto permitió la reducción del tiempo de atención y estar alineados a la política institucional de eliminación del uso de papel.

El sistema de designación en línea del oficial de cumplimiento (Sisdel), disponible desde marzo del 2017 en el portal institucional de la SBS, es el principal canal para la designación de oficiales de cumplimiento a nivel nacional de manera virtual. En el 2020, se implementaron nuevas funcionalidades a dicho sistema, a través de las cuales los sujetos obligados pueden realizar lo siguiente: (i) comunicar la remoción del oficial de cumplimiento; (ii) solicitar la activación del oficial de cumplimiento alterno; y (iii) solicitar la autorización para designar un oficial de cumplimiento corporativo para el caso de aquellos sujetos obligados que formen parte de un grupo económico.

Al 31 de diciembre de 2020, se encontraban registrados 8681 sujetos obligados que cuentan con un oficial de cumplimiento vigente, cifra similar a la del año 2019 (8707). Considerando el impacto del estado de emergencia nacional en la economía, se dio de baja a 518 sujetos obligados, de los cuales 345 contaban con un oficial de cumplimiento aprobado. De otro lado, de los 8681 sujetos obligados con oficial de cumplimiento vigente, 2197 correspondían a personas naturales y 6484 a personas jurídicas. Del total de sujetos obligados personas jurídicas, 688 pertenecían a 162 grupos económicos inscritos y vigentes, los que tenían debidamente acreditados a sus respectivos oficiales de cumplimiento corporativos.

Del total de las 2344 solicitudes recibidas, el 77% (1802 solicitudes) correspondió a la designación de oficiales de cumplimiento (entre nuevos y cambios) y el 23% restante a solicitudes de baja de sujeto obligado y de oficiales de cumplimiento, activación de códigos del oficial de cumplimiento alterno, solicitud de nuevos códigos por extravío y consultas diversas. Del total de las solicitudes de designación de oficiales de cumplimiento, el 97% correspondió a la categoría de oficial de cumplimiento y el 3% a la de oficial de cumplimiento alterno.

La UIF administra también el registro de oficiales de enlace designados por los organismos supervisores y entidades colaboradoras del sistema de prevención LA/FT. Al 31 de diciembre de 2020, se registraron 45 instituciones entre organismos supervisores (6) y entidades colaboradoras (39), de las cuales 43 cuentan con, al menos, un oficial de enlace aprobado y vigente. Durante el 2020, se aprobaron 15 solicitudes de oficiales de enlace y oficiales de enlace alternos designados, correspondiente a nueve instituciones entre organismos supervisores y entidades colaboradoras.

> A lo largo del año, las unidades orgánicas de la SBS continuaron brindando soporte sobre la integridad de accionistas, directores y/o principales funcionarios de las empresas bajo su supervisión, así como del personal y proveedores potenciales y activos.

Finalmente, a partir de julio, con la finalidad de mantener la continuidad de labores, se empleó la notificación electrónica como respuesta a las solicitudes recibidas. En el periodo junio-diciembre, se notificaron, vía correo electrónico, un total 1547 documentos correspondientes a 1134 expedientes relacionados a la designación del oficial ¬de cumplimiento (nuevos y cambios), activación de códigos del oficial de cumplimiento alterno, nuevos códigos del oficial de cumplimiento por extravío, bajas de sujetos obligados, remociones de oficiales de cumplimiento, solicitudes de autorización para contar con un oficial de cumplimiento corporativo y oficial de cumplimiento a dedicación no exclusiva, designación de oficiales de enlace y respuesta a consultas, entre otras.

A lo largo del año, las unidades orgánicas de la SBS continuaron brindando soporte sobre la integridad de accionistas, directores y/o principales funcionarios de las empresas bajo su supervisión, así como del personal y proveedores potenciales y activos. En ese sentido, se atendieron 104 solicitudes internas de información, lo que representó el 94% del total recibido. Las solicitudes atendidas involucraron a 294 personas naturales y 69 personas jurídicas. Como resultado se emitieron 63 informes, que fueron enviados a las unidades orgánicas de la SBS solicitantes.

BOX 12

Capacitación de los funcionarios de la UIF y de las entidades que colaboran en la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo

El año 2020 representó un desafío para la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en lo que respecta a la capacitación de sus profesionales y al fortalecimiento de los conocimientos en materia de la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) de los oficiales de cumplimiento de los sujetos obligados —bajo el ámbito de su supervisión—, los funcionarios públicos de las entidades colaboradoras del sistema nacional contra el LA/FT (Ministerio Público, Policía Nacional del Perú, Poder Judicial, entre otras) y la sociedad civil. El estado de emergencia nacional ocasionó cambios sustanciales en la modalidad, dinámica, contenidos y oportunidad de las capacitaciones brindadas a los involucrados en dicho sistema.

En el 2020, se realizaron tres eventos de capacitación, que involucraron una participación de 6376 personas, 42,8% más respecto al año 2019. El contenido de los eventos se enfocó, fundamentalmente, en los nuevos riesgos de LA/FT relacionados con el estado de emergencia nacional (delitos cibernéticos, nuevos perfiles de la corrupción, entre otros). Además, se contó con la colaboración de organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA), GIZ de Alemania, Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) y RUSI.

Conscientes de que la coyuntura impulsó el aprendizaje remoto, la coordinación general de la UIF asumió el encargo de desarrollar una capacitación virtual permanente, en materia de la prevención de LA/FT, dirigida a oficiales de cumplimiento, funcionarios públicos y ciudadanía. En este marco, se iniciaron los proyectos de digitalización de cursos sobre el sistema nacional de LA/FT, los cuales estarán a disposición en la plataforma e-learning de la SBS en el primer semestre del 2021.

Adicionalmente, la UIF apostó por reforzar el entrenamiento de sus profesionales. Con esa finalidad, se puso a su disposición, semanalmente, una importante oferta de seminarios web gratuitos, dirigidos a actualizar y fortalecer sus competencias. También se recurrió a la colaboración de Egmont Centre of Financial Intelligence Units Excellence and Leadership (Ecofel), encargada de proporcionar asistencia y apoyo en el aprendizaje entre las UIF que pertenecen al grupo Egmont. Así, se logró habilitar cuentas en la plataforma *e-learning* de Ecofel para todos los profesionales de la UIF, permitiéndoles acceder a una amplia gama de cursos virtuales de formación especializada y a una biblioteca de materiales de referencia. Además, se accedió a un entrenamiento auspiciado por la OEA, Interpol y Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), lo que permitió realizar 20 cursos de capacitación.

El 29 de octubre representó un hito en las acciones de capacitación. Ese día se organizaron seis eventos de capacitación virtual, dirigidos a oficiales de cumplimiento, funcionarios públicos y sociedad civil con ocasión del Día Mundial de la Prevención del LA/FT. Un total de 3850 personas participaron en estos eventos.

El trabajo de capacitación, realizado a lo largo del año, ha permitido contar con oficiales de cumplimiento con mayores conocimientos para implementar eficientemente el sistema de prevención de LA/FT; con profesionales de la UIF que han fortalecido sus competencias para un mejor desempeño de sus funciones; funcionarios públicos de las entidades que forman el sistema nacional contra el LA/FT con mejores aptitudes para la comprensión del sistema de prevención; y ciudadanos más sensibilizados sobre la importancia de prevenir el LA/FT en nuestro país.

Finalmente, la UIF ha ejecutado y viene ejecutando distintos proyectos con el financiamiento de agencias de cooperación, destacando la Cooperación Alemana —a través de GIZ—, el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la OEA, la Embajada de los Estados Unidos, la Embajada Británica y RUSI.

Con respecto a la prevención de LA/FT, el Informe de Evaluación Mutua del Perú, aprobado por el Gafilat en el marco de la IV Ronda de Evaluaciones Mutuas (2018), otorgó al país una calificación de cumplida o mayoritariamente cumplida en 34 de las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y en las seis restantes la calificación de parcialmente cumplida (ámbito normativo). Asimismo, una calificación óptima en términos de efectividad (11 resultados inmediatos).

Como resultado de esta evaluación, el Perú ingresó al procedimiento de seguimiento intensificado ante el Gafilat, encontrándose obligado a informar periódicamente sus avances. En diciembre de 2019, el Perú solicitó al Gafilat la recalificación de la nota de parcialmente cumplida en la recomendación 24 (transparencia y beneficiario final de las personas jurídicas). Esta calificación fue elevada a mayoritariamente cumplida, luego que en nuestro país se aprobó la regulación sobre el beneficiario final. En noviembre, el Pleno del Gafilat, en el marco de su XLII Reunión, aprobó el Informe de Avance de Perú con su nueva calificación, bajo el procedimiento de seguimiento intensificado.

En materia regulatoria, en el marco del estado de emergencia nacional, mediante Resolución SBS 1259-2020, se suspendieron, entre el 16 de marzo al 30 de junio, los plazos para el cumplimiento de ciertas obligaciones en materia de prevención LA/FT, por parte los sujetos obligados, y las visitas de supervisión LA/FT.

Mediante Resolución SBS 1656-2020, se reanudó el cómputo de plazos desde el 18 de julio de 2020 para los sujetos obligados que no interrumpieron actividades y a los que las vayan reanudando. Asimismo, mediante esta resolución, que comprende los procedimientos en trámite o por iniciarse, como resultado de las acciones de supervisión a los sujetos obligados hasta el 15 de marzo, se estableció la aplicación de sanciones no pecuniarias; y, cuando corresponda, medidas correctivas a infracciones en materia de LA/FT.

Durante el 2020, la SBS, a través de la UIF, tuvo a su cargo la vicepresidencia y secretaría técnica de la Contralaft. Esta comisión sesionó de manera virtual en dos ocasiones, adoptando 12 acuerdos, entre los que destacaron: i) la creación del equipo de trabajo 6 sobre extinción de dominio; ii) la aprobación de propuestas de formatos para solicitar información tributaria y bursátil por parte del Ministerio Público y el Poder Judicial; iii) iniciar el proceso de actualización de la política nacional contra el LA/FT; y iv) poner en funcionamiento la página web de la Contralaft. Además, desde la secretaría técnica, se viene monitoreando el cumplimiento del Plan Nacional contra LA/FT 2018-2021, el cual contiene 58 acciones con sus respectivos indicadores, responsables y plazos.

La UIF, como coordinadora nacional del Perú en materia de la prevención del LA/FT, ha continuado representando al país ante el Gafilat. En tal sentido, ha participado en la XLI Reunión Plenaria —realizada el 17 de agosto— y en la XLII Reunión del Pleno de Representantes y las reuniones de sus Grupos de Trabajo, que se llevaron a cabo del 26 de noviembre al 3 de diciembre.

De otro lado, un representante de la UIF viene participando como evaluador en el proceso de evaluación mutua de Chile-IV Ronda, cuyo informe final se espera sea aprobado en el 2021. Asimismo, otro representante de la UIF viene participando como revisor en la evaluación mutua de Paraguay-IV Ronda, la cual se inició en noviembre de 2019.
En el ámbito del GAFI, la UIF participa en sus plenos y en las reuniones de sus grupos de trabajo, en las que se adoptan e interpretan sus 40 recomendaciones. Así, del 21 al 23 de octubre, se participó en la reunión plenaria y en los grupos de trabajo de manera virtual.

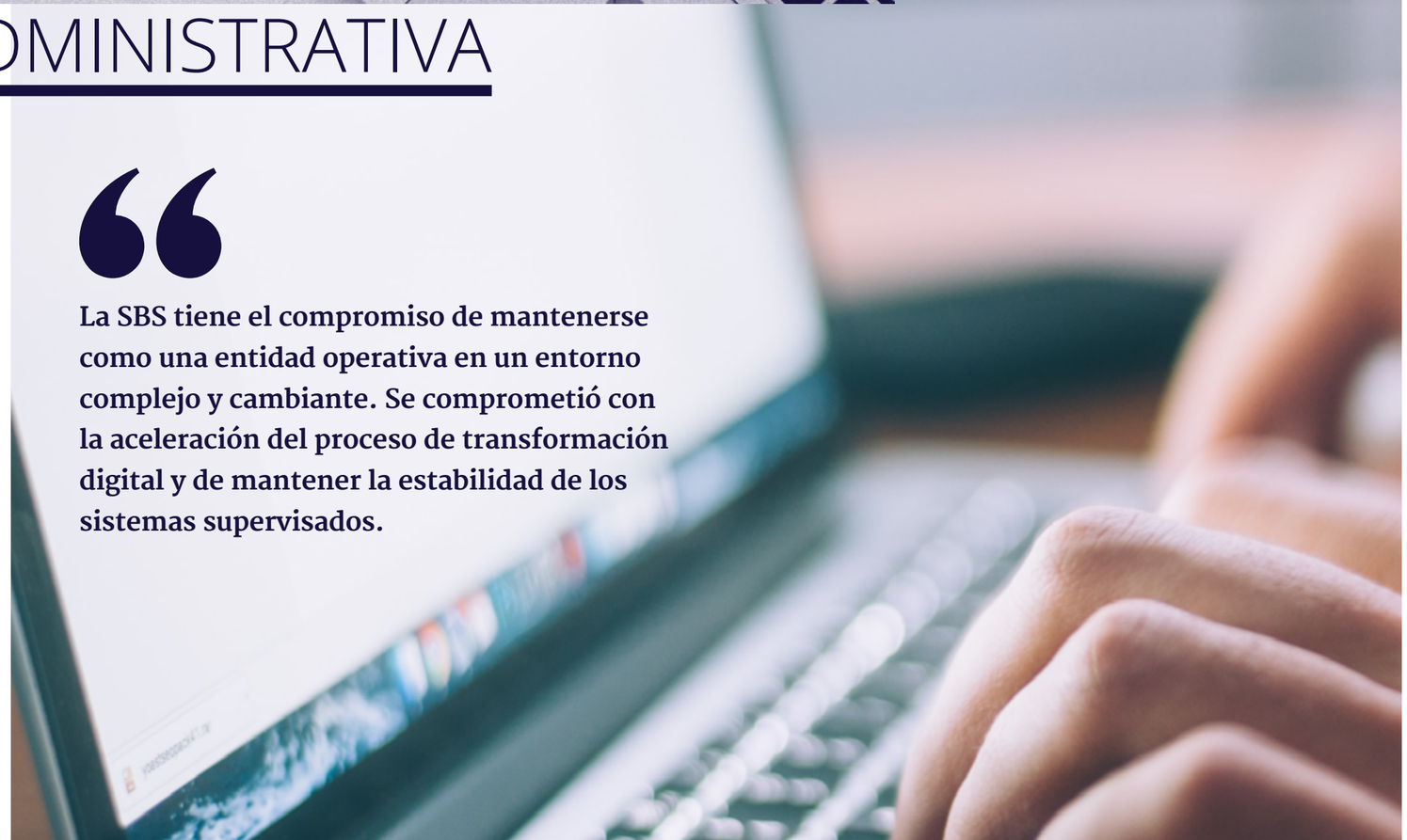
En cuanto al grupo Egmont, del 27 al 30 de enero, la UIF participó en las reuniones de sus grupos de trabajo, que se llevaron a cabo en Islas Mauricio, a fin de compartir experiencias y buenas prácticas. Los días 3 y 4 de marzo, Lima fue sede de la Reunión Regional de las Américas del Grupo Egmont. En esta reunión, participaron 30 representantes de las UIF de las Américas y observadores y diversos representantes nacionales e internacionales.

El pleno del Grupo Egmont, que estaba programado a realizarse del 6 al 9 de julio en la ciudad de Oaxaca, México, fue cancelado y, en su lugar, se realizaron reuniones virtuales de los grupos de trabajo en las que participaron funcionarios de la UIF. El 17 de diciembre se llevó a cabo la última reunión virtual del comité de Egmont en la que participó el jefe de la UIF, en su condición de representante regional.

Finalmente, la UIF ha ejecutado y viene ejecutando distintos proyectos con el financiamiento de agencias de cooperación, destacando la Cooperación Alemana —a través de GIZ—, el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la OEA, la Embajada de los Estados Unidos, la Embajada Británica y RUSI.

7

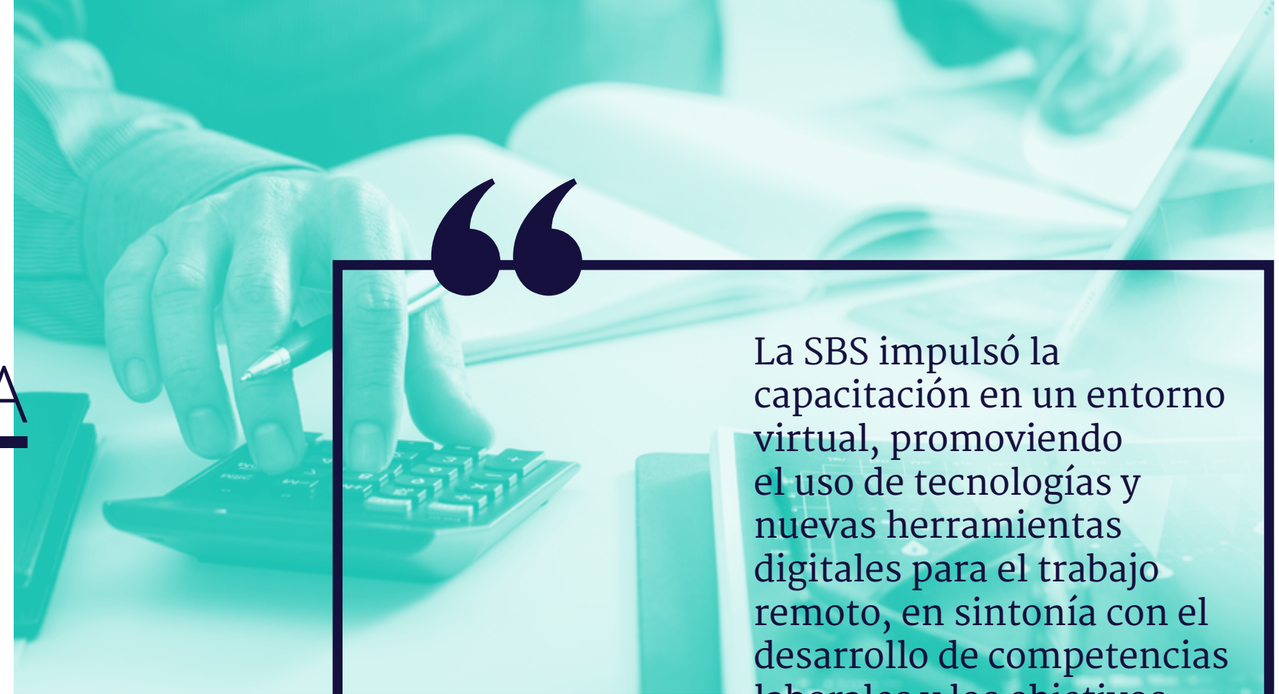
GESTIÓN ADMINISTRATIVA



La SBS tiene el compromiso de mantenerse como una entidad operativa en un entorno complejo y cambiante. Se comprometió con la aceleración del proceso de transformación digital y de mantener la estabilidad de los sistemas supervisados.

7

GESTIÓN ADMINISTRATIVA



> La SBS impulsó la capacitación en un entorno virtual, promoviendo el uso de tecnologías y nuevas herramientas digitales para el trabajo remoto, en sintonía con el desarrollo de competencias laborales y los objetivos estratégicos.

a

Gestión de recursos humanos

La Gerencia de Gestión Humana de la SBS tiene a cargo la gestión de los procesos de planificación, administración, desarrollo del personal, relaciones laborales, salud y bienestar de los recursos humanos, a través de los departamentos de Administración de Personal, Desarrollo Organizacional y Capacitación.

82% **DE LOS COLABORADORES FUE CAPACITADO, REGISTRÁNDOSE**

44 **HORAS PER CÁPITA DE CAPACITACIÓN.**

En marzo, cuando el Gobierno declaró el estado de emergencia nacional debido a la pandemia del covid-19, la Gerencia afrontó el reto de brindar soporte a la institución con medidas que aseguren la salud y bienestar de todos los colaboradores, y generó mecanismos para la continuidad de las operaciones, a través del trabajo remoto; y la implementación de protocolos de seguridad y salud para las pruebas covid-19, acompañando a los colaboradores y sus familiares afectados por el virus y otras emergencias médicas.

En el ámbito de la gestión de compensaciones, la SBS impulsó la actualización de su política salarial con la finalidad de contar con elementos que aseguren su correcta y transparente administración y la competitividad de la oferta salarial de la institución en el mercado laboral, a fin de atraer y retener a los profesionales idóneos.

Asimismo, la Gerencia inició el diseño y elaboración de las mallas curriculares de las áreas de la SBS, con el objetivo de que los trabajadores crezcan profesionalmente y vayan asumiendo mayores responsabilidades dentro de la institución. Este fue un trabajo conjunto que realizó la Gerencia con especialistas de la Superintendencia Adjunta de Banca y Microfinanzas, Superintendencia Adjunta de Seguros y la Superintendencia Adjunta de las Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, que llegaron a culminar la primera versión de sus mallas curriculares.

En el ámbito del aprendizaje, la SBS impulsó la capacitación en un entorno virtual, promoviendo el uso de tecnologías y nuevas herramientas digitales para el trabajo remoto, en sintonía con el desarrollo de competencias laborales y los objetivos estratégicos. El 82% de los colaboradores fueron capacitados, con 44 horas per cápita de capacitación.

El Programa de Extensión SBS celebró sus 22 años. La vigésima primera edición se realizó del 3 de enero al 3 de abril y contó con la participación de 32 alumnos que fueron seleccionados luego de un riguroso proceso de admisión a nivel nacional. Del total de participantes admitidos, 26 provenían de universidades de Lima y seis de provincias, todos ellos pertenecientes al tercio superior de su especialidad. A este grupo se sumó un profesional de la SBS y un funcionario representante del organismo de supervisión y regulación de Paraguay. Este último se integró como participante en la etapa internacional del programa. Debido a la pandemia del covid-19, a partir del 16 de marzo, las sesiones se desarrollaron en un entorno virtual, hasta la graduación el 3 de abril.

El Programa de Extensión SBS, por la formación especializada que ofrece, única en América Latina, es la principal fuente de reclutamiento para cubrir el primer nivel profesional de la institución. Sus egresados desempeñan las labores de supervisión y regulación de los sistemas financieros, cooperativo, de seguros y de pensiones.

Por esta razón, este programa se viene fortaleciendo con visión al 2023, adaptándose al nuevo entorno. Con esa finalidad, se están implementando estrategias de comunicación digital, un nuevo enfoque en el proceso de selección virtual —con énfasis en el manejo de habilidades, integridad y valores—, un rediseño de la malla curricular y la virtualización de los contenidos para seleccionar y formar a los profesionales que reúnan las condiciones de un futuro supervisor.

b

Gestión administrativa

La gestión administrativa de la SBS ha continuado con la optimización de los procesos a fin de mejorar la eficiencia y eficacia de los servicios prestados como área de apoyo. Asimismo, luego de la declaración del estado de emergencia nacional y debido a que las funciones de la SBS fueron consideradas como actividades esenciales, la gestión administrativa tuvo que adecuarse inmediatamente a la nueva normalidad para continuar brindando el apoyo a las otras dependencias.

Se continuó con la ejecución del proyecto de construcción de la nueva sede institucional, de acuerdo con las actividades programadas en el expediente técnico. Sin embargo, a partir de la segunda quincena de marzo, luego de la declaración del estado de emergencia nacional, la obra tuvo que ser paralizada. Posteriormente, con la aprobación de la primera fase de reanudación de las actividades económicas, por parte del Poder Ejecutivo, se reanudaron los trabajos a partir de la segunda quincena de julio, cumpliendo con la implementación de las medidas y protocolos necesarios para la prevención y control del covid-19, de acuerdo con lo establecido en las normas aprobadas con ese fin. Esta paralización tendrá un impacto en el presupuesto de la obra y en el plazo de su culminación.

Se continuó con la ejecución del proyecto de construcción de la nueva sede institucional, de acuerdo con las actividades programadas en el expediente técnico. Sin embargo, a partir de la segunda quincena de marzo, luego de la declaración del estado de emergencia nacional, la obra tuvo que ser paralizada. Posteriormente, con la aprobación de la primera fase de reanudación de las actividades económicas, por parte del Poder Ejecutivo, se reanudaron los trabajos a partir de la segunda quincena de julio, cumpliendo con la implementación de las medidas y protocolos necesarios para la prevención y control del covid-19.

c

Gestión financiera

La SBS continuó realizando una eficiente gestión financiera, dentro del marco de una política conservadora de uso de sus recursos, teniendo en cuenta además el estado de emergencia nacional y su correspondiente impacto en la economía. Paralelamente, se aplicó un eficiente control del gasto, reforzado con la aprobación de medidas de austeridad en el marco de su autonomía constitucional.

d

Gestión Logística

Debido a que las funciones que desempeña la SBS fueron consideradas actividades esenciales y debían continuar durante el periodo de aislamiento social y restricción de las actividades económicas, la gestión logística tuvo que adecuarse, inmediatamente, a las nuevas condiciones para continuar brindando el apoyo a las otras dependencias. Así, atendió oportunamente las contrataciones de bienes y servicios indispensables para la prevención y control del covid-19; implementó el trabajo remoto, de acuerdo con las disposiciones vigentes; restableció los servicios que brinda la SBS; mantuvo la cadena de pagos; y ejecutó los trabajos de mantenimiento de las instalaciones; paulatinamente, asumió la continuación de todas las actividades necesarias para el funcionamiento y operatividad de la institución en la nueva normalidad.

ESTADOS FINANCIEROS

terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019

DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
ESTADOS DE GESTIÓN
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

Deloitte.

Velásquez, Mazuelos y Asociados S. Civil de R.L.
RUC 20106910791
Las Begonias 441, Piso 6
San Isidro, Lima 27
Perú

Tel: +51 (1) 211 8585
Fax: +51 (1) 211 8586
www.deloitte.com/pe

DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A la Superintendente de

Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones

1. Hemos auditado los estados financieros adjuntos de la **Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones** (en adelante "la Superintendencia"), los cuales comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2020 y 2019, y los estados de gestión, de cambios en el patrimonio neto y de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, así como el resumen de políticas contables significativas y otras notas explicativas.

Responsabilidad de la Superintendencia Adjunta de Administración General sobre los estados financieros

2. La Superintendencia Adjunta de Administración General es responsable de la preparación y presentación razonable de dichos estados financieros de conformidad con principios y prácticas de contabilidad generalmente aceptados en Perú descritos en la Nota 3(a) , y respecto a aquel control interno que la Superintendencia Adjunta de Administración General determine que es necesario para permitir la preparación de estados financieros que no contengan errores materiales, ya sea debido a fraude o error.

Responsabilidad del auditor

3. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre dichos estados financieros basada en nuestras auditorías. Nuestras auditorías fueron realizadas de conformidad con el Manual de Auditoría Financiera Gubernamental vigente. Dicho manual requiere que cumplamos con requerimientos éticos, que planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener una seguridad razonable de que los estados financieros no contienen errores materiales.

4. Una auditoría comprende la ejecución de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los saldos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación del riesgo de que los estados financieros contengan errores materiales, ya sea debido a fraude o error. Al efectuar esta evaluación de riesgo, el auditor toma en consideración el control interno pertinente de la Superintendencia para la preparación y presentación razonable de los estados financieros, a fin de diseñar aquellos procedimientos de auditoría que sean apropiados de acuerdo con las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la Superintendencia. Una auditoría también comprende la evaluación de la aplicabilidad de las políticas contables utilizadas, y la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la Superintendencia Adjunta de Administración General, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros.

5. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría.

Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada de responsabilidad limitada en el Reino Unido, a su red de firmas miembro y sus entidades relacionadas, cada una de ellas como una entidad legal única e independiente. Consulte www.deloitte.com para obtener más información sobre nuestra red global de firmas miembro.

Opinión

6. En nuestra opinión, los estados financieros antes indicados, presentan razonablemente, en todos sus aspectos materiales, la situación financiera de la **Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones** al 31 de diciembre de 2020 y 2019, su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de conformidad con principios y prácticas de contabilidad generalmente aceptados en Perú descritos en la Nota 3(a).

Velásquez, Mazuelos y Asociados S. Civil de R.L.

Refrendado por:

(Socia)
Jessica Leon Vásquez
CPC Matrícula No. 38675

19 de abril de 2021

Consolidando sistemas supervisados sólidos, íntegros e inclusivos.

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
Expresados en soles (S/)

	Notas	2020	2019
		S/	S/
ACTIVOS			
Activos Corrientes			
Efectivo y equivalentes al efectivo	5	478,768,683	328,849,892
Cuentas por cobrar, neto	6	148,132	149,671
Otras cuentas por cobrar, neto	7	21,803,317	6,972,317
Inventarios		550,077	491,450
Servicios y otros pagados por anticipado	8	4,615,127	2,919,240
Total activos corrientes		505,885,336	339,382,570
Activos No Corrientes			
Efectivo y equivalentes al efectivo	5	-	128,932,572
Otras cuentas por cobrar, neto	7	-	2,701,438
Servicios y otros pagados por anticipado	8	26,182,467	14,939,269
Propiedades, mobiliario y equipo, neto	9	93,389,706	76,367,495
Activos intangibles, neto	10	3,814,810	4,857,988
Otras cuentas del activo	11	1,127,202	1,118,390
Total activos no corrientes		124,514,185	228,917,152
Total		630,399,521	568,299,722
Cuentas de orden	28	1,063,631,469	1,114,464,981

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros.

	Notas	2020	2019
		S/	S/
PASIVOS Y PATRIMONIO			
Pasivos Corrientes			
Cuentas por pagar a proveedores	12	4,077,745	9,244,197
Impuestos, contribuciones y otros	13	13,257,222	5,388,153
Remuneraciones y beneficios sociales	14	31,815,293	20,458,681
Obligaciones previsionales	15	1,065,192	1,131,349
Otras cuentas del pasivo	16	4,232,521	1,870,965
Total pasivos corrientes		54,447,973	38,093,345
Pasivos No Corrientes			
Obligaciones previsionales	15	6,095,982	6,764,050
Provisiones	29	27,075	39,187
Total pasivos no corrientes		6,123,057	6,803,237
Total pasivos		60,571,030	44,896,582
Patrimonio	17		
Hacienda nacional		512,858,606	483,690,009
Resultados no realizados		10,544,534	10,544,534
Resultados acumulados		46,425,351	29,168,597
Total patrimonio		569,828,491	523,403,140
Total		630,399,521	568,299,722
Cuentas de orden	28	1,063,631,469	1,114,464,981

ESTADOS DE GESTIÓN

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019. Expresados en soles (S/)

	Notas	2020	2019
		S/	S/
Ingresos			
Ingresos tributarios netos	18	340,356,100	332,885,471
Ingresos no tributarios		1,469,256	1,523,568
Ingresos financieros, neto	19	23,334,433	18,086,846
Otros ingresos	20	2,933,649	4,699,729
Total activos corrientes		368,093,438	357,195,614
Gastos			
Gastos en bienes y servicios	22	(44,761,663)	(58,438,546)
Gastos de personal	23	(221,070,808)	(214,279,162)
Gastos por pensiones, prestaciones y asistencia social	24	(15,245,252)	(14,598,498)
Transferencias, subsidios y subvenciones sociales otorgadas	25	(30,722,933)	(28,334,440)
Estimaciones y provisiones del ejercicio	26	(8,659,289)	(11,365,793)
Otros gastos	27	(1,208,142)	(1,010,578)
Total gastos		(321,668,087)	(328,027,017)
Superávit del ejercicio		46,425,351	29,168,597

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros.

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019. Expresados en soles (S/)

	Hacienda nacional	Resultados no realizados	Resultados acumulados	Total patrimonio
	S/	S/	S/	S/
	Nota 17	Nota 17	Nota 17	
Saldos al 1 de enero de 2019	468,332,194	468,332,194	15,357,815	494,234,543
Traslado entre cuentas patrimoniales	15,357,815	-	(15,357,815)	-
Superávit del ejercicio	-	-	29,168,597	29,168,597
Saldos al 31 de diciembre de 2019	483,690,009	10,544,534	29,168,597	523,403,140
Traslado entre cuentas patrimoniales	29,168,597	-	(29,168,597)	-
Superávit del ejercicio	-	-	46,425,351	46,425,351
Saldos al 31 de diciembre de 2020	512,858,606	10,544,534	46,425,351	569,828,491

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros.

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019. Expresados en soles (S/)

	2020	2019
	S/	S/
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Cobranza correspondiente a:		
Impuestos, contribuciones y derechos administrativos	340,341,759	332,854,824
Otros	16,401,999	15,153,147
Pago correspondiente a:		
Proveedores de bienes y servicios	(63,320,604)	(77,242,222)
Remuneraciones y obligaciones sociales	(217,185,991)	(217,387,964)
Otras retribuciones y complementarias	(13,165,723)	(21,763,681)
Pensiones y otros beneficios	(4,484,970)	(4,203,045)
Prestaciones y asistencia social	(11,710,834)	(11,390,914)
Donaciones y transferencias corrientes otorgadas	(4,857,454)	(2,468,960)
Otros	(3,214,845)	(1,951,074)
Efectivo y equivalentes al efectivo provisto por actividades de operación	38,803,337	11,600,111
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Cobro correspondiente a:		
Recupero de depósitos a plazo mayor a 90 días	(129,234,846)	37,648,703
Intereses por depósitos a plazo	8,262,113	19,202,480
Pago correspondiente a:		
Compra de propiedades, mobiliario y equipo	(21,348,905)	(12,442,903)
Compra de activos intangibles	(2,420,571)	(751,164)
Otros	(8,811)	(23,818)
Efectivo y equivalentes al efectivo (usado en) provisto por actividades de inversión	(144,751,020)	43,633,298
(Disminución) Aumento neto de efectivo y equivalentes al efectivo	(105,947,683)	55,233,409
Efectivo al inicio del ejercicio	139,583,904	84,350,495
Efectivo al final del ejercicio	33,636,221	139,583,904

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros.

Consolidando sistemas supervisados sólidos, íntegros e inclusivos.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019.
(Cifras expresadas en soles (S/), excepto se indique de otra forma)

1

Constitución, actividad económica y aprobación de los estados financieros

a. Constitución y actividad económica

La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (en adelante "la Superintendencia") es una institución constitucionalmente autónoma y con personería de derecho público, cuyo objetivo es la regulación y supervisión de los intereses del público en el ámbito de los sistemas financiero y de seguros; y a partir del 25 de julio de 2000 del sistema privado de pensiones (SPP), de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 27328.

Mediante Decreto Ley N° 7159 de fecha 23 de mayo de 1931 se crea la Superintendencia bajo la razón social de Superintendencia de Bancos y, posteriormente, mediante Ley N° 28484, Ley de Reforma de la Constitución Política del Perú de fecha 5 de abril de 2005, se modificó su denominación a Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.

De acuerdo a sus atribuciones, el control y la supervisión de las empresas conformantes del sistema financiero, sistema de seguros y administradoras privadas de fondos de pensiones, así como de las demás personas naturales y jurídicas incorporadas en la Ley N° 26702 "Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros" (en adelante la "Ley General"), de fecha 6 de diciembre de 1996 y sus modificatorias, la Superintendencia establece el marco de regulación y supervisión al que son sometidas las empresas que realizan dichas actividades vinculadas o complementarias a su objeto social, de acuerdo a lo establecido en la Ley General, con la finalidad de impulsar el funcionamiento de un sistema financiero, de seguros y SPP; competitivos, sólidos y confiables, que contribuyan al desarrollo nacional.

El domicilio fiscal se encuentra en Avenida Guillermo Prescott N°185, San Isidro y el número de personal, al 31 de diciembre de 2020 y 2019 fue de 1,169 y 1,115, respectivamente.

b. Panorama covid-19

La crisis sanitaria causada por el brote y avance del covid-19 a principios de 2020, ha afectado la actividad comercial y económica a nivel mundial, con efectos importantes en Perú; por ello, la Superintendencia se encuentra constantemente evaluando los potenciales impactos e implicancias en el corto y largo plazo del covid-19 en los estados financieros, con el objetivo de brindar información transparente, basado en la aplicación prácticas de Buen Gobierno Corporativo, su mejora continua y la creación de valor sostenible a largo plazo.

Ante esta situación (crisis sanitaria causada por el brote y avance del covid-19), el Gobierno ha impulsado una serie de programas fiscales, financieros y sociales con el objetivo de afrontar y reducir el impacto que se está generando en algunos sectores a consecuencia de la pandemia. La Superintendencia no ha accedido a ningún programa brindado por el gobierno, debido a que su principal fuente de ingresos corresponden a aquellos provenientes de las entidades del sistema financiero y seguros, industria que no han tenido ni se espera que tenga un impacto significativo como resultado de la emergencia sanitaria.

c. Aprobación de los estados financieros

Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2020, preparados de conformidad con principios y prácticas de contabilidad generalmente aceptados en el Perú (PCGA en Perú) descritos en la Nota 3(a), han sido autorizados para su emisión por la Superintendencia Adjunta de Administración General el 22 de marzo de 2021. Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2019, preparados de acuerdo con PCGA en Perú descritos en la Nota 3(a), fueron autorizados para su emisión por la Superintendencia Adjunta de Administración General el 13 de marzo de 2020.

2

Fondo de asistencia al trabajador – Pacto colectivo

El Fondo de Asistencia al Trabajador (en adelante "FAT") fue creado según acta de Pacto Colectivo, suscrito el 13 de diciembre de 1982, aprobado mediante Resolución Sub-Directoral N° 026-82-911000 del Ministerio de Trabajo y Promoción Social de fecha 10 de enero de 1983 y reconocido a partir del 1 de enero de 1983, mediante Resolución SBS N° 272-83-EFC/97-10 de fecha 7 de junio de 1983, señalándose que su administración, funcionamiento y alcances serán establecidos en el Reglamento del Fondo de Asistencia al Trabajador (en adelante "Reglamento").

El FAT tiene como finalidad constituir, mediante aportes recibidos, un fondo intangible individualizado para asistir a los trabajadores de la Superintendencia con contrato a plazo indeterminado, quienes tienen la calidad de miembros, hasta cuando termine su vínculo laboral con la Superintendencia.

La Superintendencia, para llevar una mejor administración de los recursos del FAT, consideró abrir cuentas bancarias en entidades del sistema financiero distintas a las de la Superintendencia, las cuales son administradas por los representantes de la Superintendencia y los representantes de los trabajadores, quienes, en forma mancomunada, son los únicos autorizados a dar instrucciones sobre la disposición de dichos fondos, de acuerdo a lo dispuesto en su Reglamento. Asimismo, cuentan con una contabilidad independiente de los aportes e inversiones que realizan con los recursos del FAT.

El aporte al FAT está constituido mediante los aportes mensuales de la Superintendencia que equivale a un 14% de las remuneraciones brutas mensuales que realiza la Superintendencia con cargo a su presupuesto anual, y los aportes de los trabajadores que equivale al 2% del total de sus remuneraciones brutas mensuales, siendo el aporte total el 16%. La parte proporcional que le corresponde a la Superintendencia es registrada en el rubro "Transferencias, subsidios y subvenciones sociales otorgadas" del estado de gestión (Nota 25).

Durante el año 2019 no hubo retiros o adendas a dicho Convenio.

El 8 de octubre de 2020, la Junta Administradora del FAT aprobó el retiro voluntario del 30% del fondo de cada trabajador al 31 de diciembre de 2020, con un tope de US$19,750 para los fondos en moneda extranjera y de S/70,000 para los fondos en moneda nacional.

3

Principios y prácticas contables significativas

Los principales principios y prácticas contables significativas utilizadas por la Superintendencia para la preparación de sus estados financieros se resumen a continuación:

a. Declaración de cumplimiento y bases de preparación y presentación

Los estados financieros se preparan y presentan de acuerdo con prácticas y PCGA en Perú, que comprende las normas emitidas por la Dirección General de Contabilidad Pública, órgano rector del Sistema Nacional de Contabilidad y las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICs-SP), en lo que sea aplicable. Las NICs-SP comprenden: las Normas e Interpretaciones emitidas o adoptadas por el IASB, oficializadas por el Consejo Normativo de Contabilidad (CNC) para su aplicación en Perú.

Las siguientes Directivas y modificaciones a las normas existentes fueron publicadas y emitidas por la Dirección General de Contabilidad Pública con aplicación obligatoria para el ejercicio contable que empieza el 1 de enero de 2020 o ejercicios subsecuentes, pero no fueron relevantes para las operaciones de la Superintendencia:

Resoluciones Directorales	Aplicación obligatoria para:
Resolución Directoral N° 008-2020-EF-51.01 "Aprobación de la prórroga de plazos para la presentación de la información financiera y presupuestaria de períodos intermedios y la conciliación del marco legal del presupuesto del primer semestre 2020.". "Aprobación de las incorporaciones y modificaciones efectuadas en los formatos de la Directiva N° 002-2019-EF/51.01 y la Directiva N° 003-2019-EF/51.01". "Firmas digitales requeridas en los formatos de información financiera y presupuestaria de la Directiva N° 002-2019-EF/51.01 y la Directiva N° 003-2019-EF/51.01."	Períodos anuales que inicien en o después del 1 de enero de 2020.
Resolución Directoral N° 017-2020-EF-51.01 "Modalidad que simplifica la presentación de los formatos de información financiera y presupuestaria, trimestral y semestral de 2020." "Modificación de plazos de presentación de las rendiciones de cuenta, establecida en el artículo 2 de la Resolución Directoral Nº 016-2020-eF/51.01."	Períodos mensuales y trimestrales que comiencen el 1 de junio de 2020 o en fechas posteriores.
Resolución Directoral N° 022-2020-EF-51.01 Aprobar la Directiva N° 003-2020-EF/51.01 "Normas para la Preparación y Presentación de la Información Financiera y Presupuestaria de las Entidades del Sector Público y Otras Formas Organizativas No Financieras que Administren Recursos Públicos para el Cierre del Ejercicio Fiscal 2020". "Cronogramas de presentación de información financiera y presupuestaria y de la Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto Modificación del Plan Contable Gubernamental"	Períodos anuales que comiencen el 1 de enero de 2020 o en fechas posteriores.

A la fecha, el Ministerio de Economía y Finanzas no ha emitido normas o lineamientos para las presentaciones de los estados financieros por el periodo 2021.

Registro de las transacciones y preparación de los estados financieros

A partir del 2018, la contabilización de las transacciones que realiza la Superintendencia se efectúa en observancia de las disposiciones de la versión modificada del Plan Contable Gubernamental 2018, aprobado por Resolución Directoral N° 001-2018-EF/51.01 de la Dirección General de Contabilidad Pública de fecha 23 de enero de 2018 y su modificatoria con la Resolución Directoral N° 003-2019-EF/51.01 de fecha 4 de enero de 2019.

La formulación de los estados financieros se efectúa teniendo en cuenta la aplicación de la Resolución Directoral N° 16-2015-EF/51.01 de fecha 24 de diciembre de 2015 que aprueba la Directiva N° 004-2015-EF/51.01, "Presentación de la información financiera presupuestaria y complementaria del cierre contable por las entidades gubernamentales para la elaboración de la Cuenta General de la República", modificada mediante Resolución Directoral N° 014-2017-EF/51.01, de fecha 3 de noviembre 2017, emitida para el cierre contable del período 2017.

El 29 de diciembre de 2018, se publicó la Resolución Directoral N° 009-2018-EF/51.01, mediante la cual se aprobó la Directiva N° 003-2018-EF/51.01 "Lineamientos para la elaboración y presentación de la información contable para el cierre del ejercicio fiscal de las empresas públicas y otras formas organizativas que administren recursos públicos" aplicable para el cierre contable del periodo 2018, quedando derogada la Directiva N° 004-2015-EF/51.01.

Para la formulación de los estados financieros del año 2019 se aplica lo establecido en la Resolución Directoral N° 017-2019-EF/51.01 de fecha 27 de diciembre de 2019 que aprueba la Directiva N° 004-2019-EF/51.01 "Lineamientos para la Preparación y Presentación de la Información Financiera y Presupuestaria, para el Cierre del Ejercicio Fiscal de las Entidades del Sector Público y Otras Formas Organizativas No Financieras que Administren Recursos Públicos", quedando derogada la Directiva N° 003-2018-EF/51.01.

Para la formulación de los estados financieros del año 2020 se aplica lo establecido en la Resolución Directoral N° 022-2020-EF/51.01 de fecha 22 de diciembre de 2020 que aprueba la Directiva N° 003-2020-EF/51.01 "Normas para la Preparación y Presentación de la Información Financiera y Presupuestaria de las Entidades del Sector Público y Otras Formas Organizativas No Financieras que Administren Recursos Públicos para el Cierre del Ejercicio Fiscal 2020", quedando derogada la Directiva N° 004-2019-EF/51.01.

b. Moneda funcional y de presentación

La Superintendencia prepara y presenta sus estados financieros en Soles (S/), que es su moneda funcional. La moneda funcional es la moneda del entorno económico principal en el que opera una entidad, aquella que influye en sus actividades actuales y en los servicios que presta, entre otros factores.

c. Instrumentos financieros

Los instrumentos financieros se definen como cualquier contrato que origina simultáneamente, un activo financiero en una empresa y un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio en otra empresa. Los activos y pasivos financieros son reconocidos cuando la Superintendencia se transforma en una parte de los acuerdos contractuales del instrumento correspondiente.

Los activos y pasivos financieros son reconocidos inicialmente a su valor razonable más los costos de transacción directamente atribuibles a la compra o emisión de los mismos, excepto para aquellos clasificados a su valor razonable con cambios en resultados, los cuales son inicialmente reconocidos a su valor razonable y cuyos costos de transacción directamente atribuibles a su adquisición o emisión, son reconocidos inmediatamente en la ganancia o pérdida del período.

Activos financieros

Las compras o ventas de activos financieros son reconocidas y dadas de baja en cuentas utilizando el método de contabilidad de la fecha de la contratación, en la cual se reconocen a la mencionada fecha: (a) el activo a recibir y el pasivo a pagar, y (b) la baja en cuentas del activo que se vende, el reconocimiento del eventual resultado en la venta o disposición por otra vía, y el reconocimiento de una partida a cobrar procedente del comprador.

Los activos financieros mantenidos por la Superintendencia se clasifican como préstamos y partidas a cobrar (incluyendo efectivo y equivalentes al efectivo) y comprenden: efectivo y equivalentes al efectivo, cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar. Estos activos son registrados al costo amortizado utilizando el método del tipo de interés efectivo menos cualquier pérdida acumulada por deterioro de valor reconocida. Las cuentas por cobrar y las otras

cuentas por cobrar no derivadas con pagos fijos o determinables, que no se negocian en un mercado activo, son clasificadas como préstamos y partidas a cobrar. Los ingresos por intereses son reconocidos utilizando la tasa de interés efectiva, excepto para aquellas cuentas por cobrar a corto plazo en las que su reconocimiento se considera no significativo.

Clasificación de los activos financieros

Los instrumentos de deuda que cumplen con las siguientes condiciones, se miden posteriormente al costo amortizado:

- El activo financiero se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener activos financieros para cobrar flujos de efectivo contractuales; y
- Los términos contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas especificadas, a flujos de efectivo que son únicamente pagos de capital e intereses sobre el monto del capital pendiente.

La Superintendencia no mantiene activos financieros que requieran una clasificación en las categorías de: Activos financieros al valor razonable con cambios en resultados; Inversiones mantenidas hasta el vencimiento; o Activos financieros disponibles para la venta, ni ha celebrado operaciones durante el período que hayan requerido de tales clasificaciones.

Costo amortizado y método de interés efectivo

El método de interés efectivo es una manera para calcular el costo amortizado de un instrumento de deuda y para asignar los ingresos por intereses durante el período relevante.

Para los instrumentos financieros que no sean activos financieros con deterioro de crédito comprados u originados, la tasa de interés efectiva es la tasa que descuenta exactamente los recibos de efectivo futuros estimados (incluidas todas las comisiones y los puntos pagados o recibidos que forman parte de la tasa de interés efectiva, costos de transacción y otras primas o descuentos).

El costo amortizado de un activo financiero es el monto en el cual el activo financiero se mide en el reconocimiento inicial menos los reembolsos del principal, más la amortización acumulada utilizando el método de interés efectivo de cualquier diferencia entre ese monto inicial y el monto de vencimiento, ajustado por cualquier pérdida tolerable. Por otro lado, el valor bruto en libros de un activo financiero es el costo amortizado de un activo financiero antes de ajustar cualquier provisión para pérdidas.

Los ingresos por intereses se reconocen utilizando el método de interés efectivo para instrumentos de deuda medidos posteriormente al costo amortizado. Para los instrumentos financieros distintos de los activos financieros con deterioro crediticio adquiridos u originados, los ingresos por intereses se calculan aplicando la tasa de interés efectiva al valor en libros bruto de un activo financiero, excepto para los activos financieros que posteriormente han sufrido algún deterioro crediticio.

Para los activos financieros que posteriormente se han deteriorado, los ingresos por intereses se reconocen aplicando la tasa de interés efectiva al costo amortizado del activo financiero. Si, en periodos de reporte posteriores, el riesgo crediticio en el instrumento financiero con deterioro crediticio mejora de modo que el activo financiero ya no tiene deterioro crediticio, los ingresos por intereses se reconocen aplicando la tasa de interés efectiva al valor en libros bruto del activo financiero.

Para los activos financieros adquiridos u originados con deterioro crediticio, la Superintendencia reconoce los ingresos por intereses aplicando la tasa de interés efectiva ajustada por crédito al costo amortizado del activo financiero a partir del reconocimiento inicial. El cálculo no vuelve a la base bruta, incluso si el riesgo crediticio del activo financiero mejora posteriormente, de modo que el activo financiero ya no tiene deterioro crediticio. Los ingresos por intereses se reconocen en el estado de gestión.

Deterioro de activos financieros

La Superintendencia reconoce una provisión por pérdidas crediticias de cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar. El monto de las pérdidas crediticias se actualiza en cada fecha de reporte para reflejar los cambios en el riesgo crediticio (a partir del plazo de vencimiento de cada cuenta por cobrar) desde el reconocimiento inicial del instrumento financiero respectivo.

Las pérdidas crediticias en estos activos financieros se estiman utilizando una matriz de provisión basada en la experiencia histórica de pérdidas crediticias de la Superintendencia (Nota 3(d)).

Pasivos financieros

Los pasivos financieros y los instrumentos de patrimonio se clasifican conforme al contenido de los acuerdos contractuales pactados y teniendo en cuenta la sustancia económica del contrato. Un instrumento de patrimonio es un contrato que representa una participación residual en el patrimonio de la Superintendencia una vez deducidos todos sus pasivos.

Los pasivos financieros mantenidos por la Superintendencia se clasifican como otros pasivos financieros e incluye los siguientes rubros: cuentas por pagar a proveedores y otras cuentas del pasivo.

Pasivos financieros medidos posteriormente al costo amortizado

Los otros pasivos financieros son registrados con posterioridad a su reconocimiento inicial al costo amortizado, utilizando el método del tipo de interés efectivo, reconociéndose el gasto de interés a lo largo del periodo correspondiente.

El método de interés efectivo es un método de cálculo del costo amortizado de un pasivo financiero y de imputación del gasto financiero a lo largo del periodo relevante. La tasa de interés efectiva es la tasa de descuento que iguala exactamente los flujos de efectivo por cobrar o por pagar (incluyendo todos los honorarios y puntos pagados o recibidos que forman parte de la tasa de interés efectiva, los costos de transacción y otras primas o descuentos) estimados a lo largo de la vida esperada del pasivo financiero (o, cuando sea adecuado), un período más corto, al costo amortizado de un pasivo financiero.

Pasivo financiero dado de baja

La Superintendencia da de baja los pasivos financieros si, y solo si, las obligaciones de la Superintendencia se cumplen, cancelan o han expirado. La diferencia entre el importe en libros del pasivo financiero dado de baja y la contraprestación pagada y pagadera se reconoce en resultados.

d. Cuentas por cobrar y provisión de las cuentas de cobranza dudosa

Las cuentas por cobrar comprenden principalmente contribuciones que se reconocen a su valor razonable y se presentan netas de la provisión de cobranza dudosa. La provisión de cobranza dudosa y la determinación del castigo de incobrables es efectuada sobre la base de aquellas contribuciones impagas a partir del día siguiente de la fecha de vencimiento y de acuerdo a la metodología establecida por la Superintendencia en la Directiva N° SBS-DIR-ADM-318-03 "Normas para la gestión de la cartera de cobranzas y la provisión y castigo de deudas incobrables" de fecha 7 de octubre de 2014.

La Superintendencia revisa periódicamente los saldos de las cuentas por cobrar por contribuciones realizando los ajustes por deterioro que considere necesarios. Esta revisión y análisis ha considerado la emisión de una política de determinación de cobranza dudosa de conformidad con el Instructivo N° 3 "Provisión y Castigo de las Cuentas Incobrables" y modificatoria, aprobado por la Dirección General de Contaduría Pública de la Nación, a través de la Resolución N° 067-97-EF/93.01 y modificatorias.

e. Inventarios

Los inventarios se registran al costo. La valuación de los inventarios se realiza a través del método promedio ponderado, e incluyen los suministros de funcionamiento, como materiales de acondicionamiento, electricidad, repuestos y accesorios.

f. Propiedades, mobiliario y equipo

El rubro de propiedades, mobiliario y equipo está conformado por los edificios, equipos y mobiliario de oficina, vehículos y equipos periféricos y terrenos, los cuales se presentan al costo, menos depreciación, y cualquier pérdida por deterioro de valor reconocida. Los desembolsos iniciales, así como aquellos incurridos posteriormente, relacionados con bienes cuyo costo puede ser valorado confiablemente, y es probable que se obtengan de ellos beneficios económicos futuros, se reconocen como activos fijos. Los desembolsos para mantenimiento y reparaciones se reconocen como gasto del período en que se incurren. Las ganancias o pérdidas resultantes de la venta o retiro de una partida de propiedades, mobiliario y equipo se determinan como la diferencia entre el producto de la venta y el valor en libros del activo, las cuales son reconocidas en la ganancia o pérdida del ejercicio en el momento en que la venta se considera realizada.

Ciertos edificios y terrenos se registran a su costo revaluado de acuerdo con lo requerido por la Dirección General de Contabilidad Pública, determinado sobre la base de valorizaciones realizadas por peritos valuadores indepen-

dientes. El mayor valor en libros que surge de la revaluación de los edificios y terrenos, se acredita en el rubro de "Resultados no realizados" del patrimonio de acuerdo con la última Resolución Directoral N° 006-2014-EF/51.01 de fecha 19 de mayo de 2014 mediante la cual se aprobó la Directiva N° 002- 2014-EF/51.01 "Metodología para la modificación de la vida útil de edificios, revaluación de edificios y terrenos, identificación e incorporación de edificios y terrenos en administración funcional y reclasificación de propiedades de inversión en las entidades gubernamentales" (Nota 17 (b)). La frecuencia de las revaluaciones de los edificios y terrenos será establecida por la Dirección General de Contabilidad Pública.

La depreciación se calcula con base en el método de línea recta en aplicación de los criterios establecidos en el Anexo I "Definiciones Complementarias" de la Directiva N° 005-2016-EF/51.01 "Metodología para el reconocimiento, medición, registro y presentación de los elementos de propiedades, planta y equipo de las entidades gubernamentales", aprobada por la Resolución Directoral N° 012-2016-EF/51.01, según lo siguiente, entendiéndose que los terrenos sobre los que se asientan los edificios administrativos tienen una vida útil indefinida y que, por tanto, no son objeto de depreciación:

	Años
Edificios	80
Equipos de oficina	10
Mobiliario de oficina	10
Vehículos	4
Equipos computacionales y periféricos	4

En la Directiva se estableció que la Dirección General de Contabilidad Pública dispondrá la oportunidad en que las entidades públicas deberán revisar la vida útil de los elementos de sus activos fijos, sin perjuicio de la revisión voluntaria que consideren conveniente realizar. Los efectos de tal modificación serán tratados como un cambio en la estimación contable, registrando las variaciones de manera prospectiva.

g. Activos intangibles

Los activos intangibles con vidas útiles finitas adquiridos en forma separada son reportados al costo menos su amortización acumulada y cualquier pérdida acumulada por deterioro de valor reconocida. La amortización se calcula con base en el método de línea recta sobre la vida útil estimada por la Superintendencia.

h. Otros activos

Los otros activos – bienes culturales – comprenden principalmente obras de arte (cerámicas, pinturas, óleos, entre otros), muebles y enseres antiguos estilo colonial y monedas de colección, los cuales son registrados a su costo de adquisición. Estos activos por su naturaleza se considera que tienen una vida útil ilimitada, por lo que no se deprecian. Algunos de estos bienes han sido registrados a valor de tasación por no contar con la documentación de sustento de la compra.

i. Pérdida por deterioro de activos financieros

Según disponga la Dirección General de Contabilidad Pública, la Superintendencia revisa los importes en libros de sus activos tangibles, intangibles y otros activos – bienes culturales – para determinar si existen indicios de que dichos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor, según lo establecido en el numeral 9.2 de la Directiva N° 005-2016-EF/51.01. Si existe cualquier indicio, el importe recuperable del activo se calcula con el objeto de determinar el alcance de la pérdida por deterioro de valor (si la hubiera).

Los otros activos – bienes culturales – con vida útil indefinida y aquellos todavía no disponibles para su uso son revisados bajo la aplicación de la Directiva N° 005-2016-EF/51.01 para estos propósitos, así como cuando existe algún indicio de que el activo correspondiente podría haber sufrido alguna pérdida de valor.

El valor recuperable es el mayor valor entre el valor razonable menos el costo de venderlo y el valor de uso. El valor de uso se determina con base en los futuros flujos de efectivo estimados descontados a su valor actual, utilizando una tasa de descuento antes de impuestos, que refleja las valoraciones actuales del mercado con respecto al valor del dinero en el tiempo y los riesgos específicos del activo.

Una pérdida por deterioro de valor se puede revertir posteriormente y registrarse como ingresos en la ganancia del ejercicio, hasta el monto en que el valor en libros incrementado no supere el valor en libros que habría sido determinado de no haberse reconocido ninguna pérdida por deterioro de valor para el activo.

j. Arrendamientos

Los arrendamientos son clasificados como arrendamientos financieros cuando los términos del contrato transfieren sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo arrendado. Todos los demás arrendamientos son clasificados como arrendamientos operativos.

Los pagos derivados de contratos de arrendamientos operativos en donde la Superintendencia actúa como arrendatario se reconocen como gasto de forma lineal, durante el transcurso del plazo del arrendamiento, salvo aquellos en los que resulte más representativa otra base sistemática de asignación para reflejar más adecuadamente el patrón de los beneficios del arrendamiento. Los pagos contingentes se cargan como gastos en los periodos en los que se incurren.

k. Provisiones

Las provisiones son reconocidas cuando la Superintendencia tiene una obligación presente (ya sea legal o implícita) como resultado de un suceso pasado, es probable que la Superintendencia tenga que desprenderse de recursos, que incorporen beneficios económicos para cancelar tal obligación, y puede efectuarse una estimación fiable del importe de la obligación.

El importe reconocido como provisión corresponde a la mejor estimación, a la fecha del estado de situación financiera, del desembolso necesario para cancelar la obligación presente, tomando en consideración los riesgos e incertidumbres que rodean a la mayoría de los sucesos y circunstancias concurrentes a la valoración de la misma. Cuando el importe de la provisión sea medido utilizando flujos estimados de efectivo para cancelar la obligación, el valor en libros es el valor presente de los desembolsos correspondientes.

En el caso de que se espere que una parte o la totalidad del desembolso necesario para cancelar la provisión sea rembolsado por un tercero, la porción a cobrar es reconocida como un activo cuando es prácticamente segura su recuperación, y el importe de dicha porción puede ser determinado en forma fiable.

l. Pasivos y activos contingentes

Los pasivos contingentes no se reconocen en los estados financieros, sólo se revelan en nota a los mismos. Cuando la posibilidad de una salida de recursos para cubrir un pasivo contingente sea remota, tal revelación no es requerida.

Los activos contingentes no se reconocen en los estados financieros, sólo se revelan en nota a los estados financieros cuando es probable que se produzca un ingreso de recursos.

Las partidas tratadas previamente como pasivos contingentes, serán reconocidas en los estados financieros del período en el cual ocurra el cambio de probabilidades, esto es, cuando se determine que es probable que se produzca una salida de recursos para cubrir el mencionado pasivo. Las partidas tratadas como activos contingentes, serán reconocidas en los estados financieros del período en que se determine que es virtualmente seguro que se producirá un ingreso de recursos, respectivamente.

m. Remuneraciones y beneficios sociales

Los beneficios de los empleados y pensionistas incluyen, entre otros, beneficios a corto plazo, tales como sueldos y aportaciones a la seguridad social, ausencias remuneradas anuales, ausencias remuneradas por enfermedad e incentivos, si se pagan dentro de los doce meses siguientes al final del período. Estos beneficios se reconocen contra la ganancia o pérdida del período en que el trabajador haya desarrollado los servicios que les otorgan el derecho a recibirlos. Las obligaciones correspondientes a pagar se presentan como parte de las remuneraciones y beneficios por pagar. Asimismo, a través de fondo de reserva de pensiones del personal cesante la Superintendencia ofrece beneficios a largo plazo a sus ex trabajadores pensionistas.

m.1. Provisión para vacaciones

Las vacaciones anuales del personal y otras ausencias remuneradas se reconocen sobre la base del devengado. La provisión por la obligación estimada por vacaciones anuales y otras ausencias remuneradas del personal, resultantes de servicios prestados por los empleados se reconoce a la fecha del estado de situación financiera.

m.2. Compensación por tiempo de servicios
La provisión para compensación por tiempo de servicios (CTS) del personal se constituye por el íntegro de los derechos indemnizatorios de acuerdo con la legislación vigente.

Los pagos efectuados con carácter cancelatorio fueron depositados en las instituciones del sistema financiero elegidas por los trabajadores hasta el mes de octubre de 2004, de conformidad con lo establecido en el D.U. N° 024-2003. A partir del mes de noviembre del mismo año y en cumplimiento de las disposiciones legales, la CTS es depositada semestralmente.

m.3. Fondo de reserva de pensiones
La Superintendencia ha reconocido en el rubro "Obligaciones previsionales" del estado de situación financiera, sobre la base de cálculos actuariales anuales realizados por el Departamento de Recursos Humanos y aprobados por la Oficina de Normalización Previsional (ONP), la alícuota relacionada con los beneficios que otorga a su personal cesante perteneciente al Decreto Ley N° 20530.

El cálculo y registro del fondo de reserva de pensiones del personal cesante de la Superintendencia se efectúa en base a lo establecido en el Decreto Supremo N° 043-2003-EF publicado el 28 de marzo de 2003, que indica que las empresas del Estado se regirán por la Resolución de Contaduría N° 159-2003-EF/93.01, publicada el 12 de marzo de 2003, la cual aprobó el Instructivo N° 20-2003-EF/93.01, que establece el procedimiento contable para el registro y control de las reservas pensionarias, reservas no pensionarias y reservas para contingencias. El valor de las pensiones es determinado de acuerdo al cálculo actuarial que mide al valor presente todos los pagos futuros de pensiones utilizando una tasa de descuento.

En dicho cálculo se considera al periodo medio como el promedio aritmético de años pensionables, hasta la extinción de los beneficios pensionarios, en razón del número de pensionistas para los cuales se efectúa el cálculo de las reservas pensionarias, que en el caso de la Superintendencia ha sido estimado en 12.24 años.

n. Reconocimiento de ingresos
Los ingresos y gastos son registrados en los resultados del ejercicio a medida que se devengan, en función al tiempo de las operaciones que los generan.

n.1. Ingresos tributarios
Los ingresos tributarios por contribuciones de empresas supervisadas por la Superintendencia son reconocidos en el estado de gestión como ingresos a medida que se devengan, en función al tiempo de las operaciones que los generan.

n.2. Ingresos financieros
Los ingresos financieros por intereses son reconocidos cuando es probable que la Superintendencia reciba los beneficios económicos asociados con la transacción y que el importe de los ingresos puede ser medido con fiabilidad. Los mismos que son calculados a tasas nominales sobre los valores nominales y se reconocen en los resultados del periodo en que se devengan, en función al tiempo de vigencia de las operaciones que los generan y las tasas de interés pactadas.

n.3. Donaciones y transferencias recibidas
Los ingresos por donaciones y transferencias se reconocen como recibidos en el periodo en que se perciben.

n.4 Otros ingresos
Los otros ingresos por multas, penalidades a los proveedores por incumplimientos contractuales y otros, son reconocidos en el estado de gestión como ingresos a medida que se devengan.

o. Reconocimientos de gastos
Los gastos se reconocen cuando ha surgido un decremento en los beneficios económicos futuros, relacionado con un decremento en los activos o un incremento en los pasivos, y además pueden medirse con fiabilidad, independientemente del momento en que se paguen.

p. Moneda extranjera
La moneda funcional de la Superintendencia es el Sol (S/). Las operaciones en otras divisas distintas a la moneda funcional se consideran denominadas en "moneda extranjera", y son reconocidas utilizando los tipos de cambio prevalecientes a la fecha de las transacciones. Al final de cada período de reporte, los saldos de partidas monetarias denominadas en moneda extranjera son traducidos utilizando los tipos de cambio prevalecientes a esa fecha. Los saldos de partidas no monetarias contabilizadas a valor razonable que son denominadas en moneda extranjera son traducidos utilizando los tipos de cambio aplicables a la fecha en que el valor razonable fue determinado.

q. Efectivo y equivalentes al efectivo
El efectivo y equivalente al efectivo comprende el efectivo disponible, las cuentas corrientes mantenidas en las instituciones financieras locales, certificados bancarios y los otros depósitos.

Los depósitos a plazo con vencimiento mayor a 90 días no forman parte del flujo de efectivo.

r. Reclasificación
Ciertas cifras de los estados financieros del 2019 han sido reclasificadas para hacerlos comparables con los del ejercicio 2020. Los importes reclasificados y las cuentas afectadas se resumen como sigue:

	31/12/19 (Previamente reportados)	Reclasificación	31/12/2019 (Reclasificado)
	S/	S/	S/
ACTIVOS			
Activos Corrientes			
Efectivo y equivalentes al efectivo	457,782,464	(128,932,572)	328,849,892
Cuentas por cobrar, neto	149,671	-	149,671
Otras cuentas por cobrar, neto	9,673,755	(2,701,438)	6,972,317
Inventarios	491,450	-	491,450
Servicios y otros pagados por anticipado	17,858,509	(14,939,269)	2,919,240
Total activos corrientes	485,955,849	(146,573,279)	339,382,570
Activos No Corrientes			
Efectivo y equivalentes al efectivo	-	128,932,572	128,932,572
Otras cuentas por cobrar, neto	-	2,701,438	2,701,438
Servicios y otros pagados por anticipado	-	14,939,269	14,939,269
Propiedades, mobiliario y equipo, neto	76,367,495	-	76,367,495
Activos intangibles, neto	4,857,988	-	4,857,988
Otras cuentas del activo	1,118,390	-	1,118,390
Total activos no corrientes	82,343,873	146,573,279	228,917,152
Total	568,299,722	-	568,299,722

	31/12/19 (Previamente reportados)	Reclasificación	31/12/2019 (Reclasificado)
	S/	S/	S/
PASIVOS Y PATRIMONIO			
Pasivos y Corrientes			
Cuentas por pagar a proveedores	9,244,197	-	9,244,197
Impuestos, contribuciones y otros	5,388,153	-	5,388,153
Remuneraciones y beneficios sociales	20,458,681	-	20,458,681
Obligaciones previsionales	1,131,349	-	1,131,349
Otras cuentas del pasivo	1,870,965	-	1,870,965
Total pasivos corrientes	38,093,345	-	38,093,345
Pasivos No Corrientes			
Obligaciones previsionales	6,764,050	-	6,764,050
Provisiones	39,187	-	39,187
Total pasivos no corrientes	6,803,237	-	6,803,237
Total pasivos	44,896,582	-	44,896,582
Patrimonio			
Hacienda nacional	483,690,009	-	483,690,009
Resultados no realizados	10,544,534	-	10,544,534
Resultados acumulados	29,168,597	-	29,168,597
Total patrimonio	523,403,140	-	523,403,140
Total	568,299,722	-	568,299,722

4

Responsabilidad de la información, estimaciones significativas, y fuentes claves de incertidumbre

Responsabilidad de la información y estimaciones significativas realizadas

La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad de la Superintendencia Adjunta de Administración General. Para la elaboración de los mismos, se han utilizado ciertas estimaciones realizadas para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellos, con base en la experiencia y otros factores relevantes. Los resultados finales de dichas estimaciones podrían variar.

Estas estimaciones son revisadas sobre una base continua. Las modificaciones a los estimados contables son reconocidas de forma prospectiva, contabilizándose los efectos del cambio en las correspondientes cuentas de ganancia o pérdida del año en que se efectúan las revisiones correspondientes.

Las estimaciones consideradas más importantes para la elaboración de los estados financieros de la Superintendencia se refieren a:

- Provisión de las cuentas de cobranza dudosa (Nota 3(d)).
- Provisión para incobrabilidad de otras cuentas por cobrar (Nota 3(d)).
- Vida útil asignada a propiedades, mobiliario y equipo (Nota 3(f)).
- Vida útil asignada a los activos intangibles (Nota 3(g)).
- Estimación de deterioro de propiedades, planta y equipo (Nota 3(i)).
- Estimación de deterioro por activos intangibles (Nota 3(i)).
- Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes (Nota 3(k) (l)).
- Provisión de fondo de reserva de pensiones (Nota 3(m.3)).
- Reconocimiento de ingresos (Nota 3(n)).

La Superintendencia ha ejercido su juicio crítico al aplicar las políticas contables en la preparación de los estados financieros adjuntos, según se explica en las correspondientes políticas contables.

Fuentes claves de incertidumbre en las estimaciones

A continuación, se discuten las presunciones básicas respecto al futuro y otras fuentes claves de incertidumbre en las estimaciones, al final del periodo sobre el cual se reporta, las cuales pueden implicar un riesgo significativo de ajustes materiales en los importes en libros de los activos y pasivos durante el próximo período financiero.

Arrendamientos

La Superintendencia analiza el tratamiento contable de determinados arrendamientos en los cuales actúa como arrendatario, verificando si corresponde a un arrendamiento operativo o financiero, así como a las obligaciones contractuales a las cuales se encuentra comprometida.

Vida útil de propiedades, mobiliario y equipo

Como se describe en la Nota 3(f) propiedades, mobiliario y equipo, la Dirección General de Contabilidad Pública dispondrá la oportunidad en que las entidades públicas deberán revisar la vida útil de los elementos de sus activos fijos, sin perjuicio de la revisión voluntaria que consideren conveniente realizar. Los efectos de tal modificación serán tratados como un cambio en la estimación contable, registrando las variaciones de manera prospectiva, de acuerdo a lo establecido en la Directiva. Las fuentes claves de incertidumbre consideradas para la estimación de la vida útil son: las comunicaciones realizadas por la Dirección General de Contabilidad Pública, el desgaste físico del activo y la obsolescencia técnica o comercial derivados de los cambios en su utilización o los cambios de la demanda de los activos.

Reconocimiento de ingresos

La Superintendencia reconoce su estimación de ingresos tomando en consideración la información proporcionada por los contribuyentes, tomando en cuenta las tasas de contribución, aprobadas al inicio de cada ejercicio. Las fuentes claves de incertidumbre consideradas para la estimación de los ingresos por contribuciones son: la información reportada de los contribuyentes y varían de acuerdo a sus resultados obtenidos en cada reporte enviado a la Superintendencia, y los cambios en las tasas de contribuciones.

5

Efectivo y equivalentes al efectivo

El efectivo y equivalentes al efectivo se compone de lo siguiente:

	2020	2019
	S/	S/
Fondo fijo	111,650	111,650
Cuentas corrientes y de ahorros (a)	33,524,571	139,472,254
Certificados bancarios (b)	794,879	3,095,823
Depósitos a plazo (c)	444,337,583	315,102,737
	478,768,683	457,782,464
Parte Corriente	478,768,683	328,849,892
Parte No corriente	-	128,932,572
	478,768,683	457,782,464

a. Las cuentas corrientes y de ahorros corresponden a saldos en bancos locales, en soles y dólares estadounidenses y son de libre disponibilidad.

Al 31 de diciembre de 2020, el saldo incluye cuentas corrientes y de ahorro en moneda nacional por S/30,330,490 y en moneda extranjera por US$883,319 (al 31 de diciembre de 2019 en moneda nacional S/84,338,482 y en moneda extranjera por US$16,636,624).

b. Los certificados bancarios corresponden principalmente garantías otorgadas a favor de la Superintendencia por entidades que han solicitado organizarse como empresas del sistema financiero, según lo dispuesto en el artículo 21° de la Ley General. El pasivo correspondiente a estos certificados se registra en el rubro "Cuentas por pagar a proveedores" del estado de situación financiera bajo el concepto de depósitos recibidos en garantía (Nota 12(b)).

c. Al 31 de diciembre de 2020, los depósitos a plazo corresponden a fondos que la Superintendencia mantiene en bancos locales en moneda nacional y extranjera, los cuales devengan en soles y dólares estadounidenses intereses a tasas anuales promedio que fluctúan entre 0.26% y 5.11%. Al 31 de diciembre de 2019, los depósitos a plazo corresponden a fondos que se mantenían en bancos locales en moneda nacional, los cuales devengaron en soles y dólares intereses a tasas anuales promedio que fluctúan entre 2.45% y 5.72%.

En 2020 y 2019, la Superintendencia reconoció ingresos por intereses por depósitos a plazo por S/12,311,219 y S/16,858,464, respectivamente, registrados en el rubro "Ingresos financieros, neto" del estado de gestión (Nota 19).

6

Cuentas por cobrar, neto

Las cuentas por cobrar, neto se componen de lo siguiente:

	2020	2019
	S/	S/
Cuentas por cobrar:		
Intermediarios y auxiliares de seguros	86,052	88,921
Sistema financiero	26,869	42,663
Registro de peritos valuadores (R.E.P.E.V.)	25,396	18,087
Empresas de transferencias de fondos	82	-
Cooperativas	9,733	-
De dudosa recuperación:		
Intermediarios y auxiliares de seguros	545,810	(511,996)
Sistema financiero	136,214	(146,876)
Empresas de transferencia de fondos	1,147	(1,147)
	831,303	809,690
Estimación de cuentas de cobranza dudosa		
Intermediarios y auxiliares de seguros	(545,810)	(511,996)
Sistema financiero	(136,214)	(146,876)
Empresas de transferencia de fondos	(1,147)	(1,147)
	(683,171)	(660,019)
Cuentas por cobrar, neto	148,132	149,671

El movimiento de la estimación de cuentas de cobranza dudosa al 31 de diciembre fue:

	2020	2019
	S/	S/
Saldo inicial	660,019	603,716
Provisiones (Nota 26 (a))	67,784	91,174
Recuperos	(44,632)	(34,871)
Saldo Final	683,171	660,019

La Superintendencia mantiene estimaciones de cobranza dudosa y reclamaciones a un nivel que considera adecuado de acuerdo con el riesgo potencial de cuentas incobrables. La antigüedad de las cuentas por cobrar y la situación de los contribuyentes son constantemente monitoreadas para asegurar lo adecuado del apartado en los estados financieros. En consecuencia, la Superintendencia Adjunta de Administración General considera que no se requieren provisiones en exceso al apartado para cuentas de cobranza dudoso.

7

Otras cuentas por cobrar, neto

Las otras cuentas por cobrar, neto se componen de lo siguiente:

	2020	2019
	S/	S/
Cuentas por cobrar diversas de dudosa recuperación (a)	6,771,777	6,699,452
Intereses por depósitos a plazo (b)	9,597,081	5,547,975
Depósitos entregados en garantía por alquileres (c)	1,172,765	1,210,354
Multas y sanciones	718,177	642,654
Deudas del personal (d)	7,755,258	136,408
Cuentas por cobrar diversas	2,560,036	2,136,364
	28,575,094	16,373,207
Estimación de cuentas de cobranza dudosa (a)	(6,771,777)	(6,699,452)
Cuentas por cobrar diversas, neto	21,803,317	9,673,755
Parte Corriente	21,803,317	6,972,317
Parte No Corriente	-	2,701,438
	21,803,317	9,673,755

a. Las cuentas por cobrar diversas de dudosa recuperación incluyen multas a entidades supervisadas y terceros aplicadas por la Unidad de Inteligencia Financiera y la Superintendencia Adjunta de Seguros, este último relacionado con los seguros AFOCAT (seguros exclusivos de vehículos de transporte público que presten servicios al interior de una región o provincia); las cuales se encuentran íntegramente provisionadas al 31 de diciembre de 2020 y 2019.

El movimiento de estimación de cuentas de cobranza dudosa por el año terminado el 31 de diciembre fue el siguiente:

	2020	2019
	S/	S/
Saldo inicial	6,699,452	6,099,683
Provisiones (Nota 26 (a))	801,063	1,075,068
Castigos	-	(190,124)
Recupero	(728,738)	(285,175)
Saldo Final	6,771,777	6,699,452

b. Los intereses por depósitos a plazo, corresponden a los intereses devengados por los depósitos a plazos vigentes al 31 de diciembre de 2020, mantenidos en moneda nacional y extranjera en instituciones financieras del país.

c. Los depósitos entregados en garantía por alquileres corresponden principalmente a saldos por cobrar a personas naturales por concepto garantía de alquileres de los locales arrendados por un importe ascendente a S/762,418 al 31 de diciembre de 2020 (S/803,589 al 31 de diciembre de 2019).

d. Al 31 de diciembre de 2020, la Superintendencia tenía por pagar a cuenta de sus trabajadores el impuesto a la renta de quinta categoría a la Administración Tributaria, por los retiros del 30% que los trabajadores realizaron de sus fondos en el FAT, el cual fue autorizado por la Junta Administrativa del FAT (Nota 13 (a)); asimismo, este monto se registra como una cuenta por cobrar al FAT pues dicho Fondo asume dicho impuesto a la renta. Este saldo fue cobrado directamente de las cuentas corrientes del FAT en enero 2021.

Al 31 de diciembre de 2019 no se presentó este tipo de operación.

8

Servicios y otros pagados por anticipado

Los servicios y otros pagados por anticipado se componen de lo siguiente:

	2020	2019
	S/	S/
Anticipo a contratistas y proveedores (a)	30,622,639	17,743,056
Entregas a rendir cuenta	172,280	112,628
Seguros pagados por anticipado	2,675	2,825
	30,797,594	17,858,509
Parte Corriente	4,615,127	2,919,240
Parte No corriente	26,182,467	14,939,269
Saldo Final	30,797,594	17,858,509

a. Corresponde a los anticipos otorgados a China Railway International Group Sucursal del Perú y a Cesel S.A. por el trabajo de construcción de la Nueva Sede Institucional, el cual inició en octubre 2019, por US$7,179,141 y US$61,586, respectivamente, al 31 de diciembre 2020 (US$4,413,962 y US$93,964, respectivamente al 31 de diciembre 2019).

9

Propiedades, mobiliario y equipo, neto

Para los años terminados el 31 de diciembre, el movimiento de las propiedades, mobiliario y equipo fue como sigue:

	Edificios administrativos	Terrenos urbanas	Vehículos	Equipos de oficina	Mobiliario de oficina	Equipos computacionales y periféricos	Trabajos en curso	Total
	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/
Costo								
Saldo al 1 de enero de 2019	11,937,973	47,216,703	1,354,634	16,191,506	6,280,254	36,734,238	-	119,715,308
Adiciones (a)	-	952,281	-	85,078	45,092	2,791,006	8,569,446	12,442,903
Retiros	-	-	(196,822)	(16,591)	(77,029)	(23,748)	-	(314,190)
Saldo al 31 de diciembre de 2019	11,937,973	48,168,984	1,157,812	16,259,993	6,248,317	39,501,496	8,569,446	131,844,021
Adiciones (a)	-	-	234,841	331,201	84,846	3,091,244	17,606,773	21,348,905
Retiros	-	-	(196,125)	-	-	-	-	(196,125)
Saldo al 31 de diciembre de 2020	11,937,973	48,168,984	1,196,528	16,591,194	6,333,163	42,592,740	26,176,219	152,996,801
Depreciación acumulada								
Saldo al 1 de enero de 2019	5,775,143	-	1,282,807	8,704,909	3,329,227	30,364,938	-	49,457,024
Adiciones	149,225		24,425	1,334,549	509,042	4,514,203	-	6,531,444
Retiros	(211,843)		(196,819)	(16,450)	(75,450)	(11,380)	-	(511,942)
Saldo al 31 de diciembre de 2019	5,712,525	-	1,110,413	10,023,008	3,762,819	34,867,761	-	55,476,526
Adiciones	106,856	-	29,323	1,336,181	506,488	2,347,845	-	4,326,693
Retiros	-	-	(196,124)	-	-	-	-	(196,124)
Saldo al 31 de diciembre de 2020	5,819,381		943,612	11,359,189	4,269,307	37,215,606	-	59,607,095
Costo neto								
Al 31 de diciembre de 2020	6,118,592	48,168,984	252,916	5,232,005	2,063,856	5,377,134	26,176,219	93,389,706
Al 31 de diciembre de 2019	6,225,448	48,168,984	47,399	6,236,985	2,485,498	4,633,735	8,569,446	76,367,495

a. Las adiciones del año 2020 corresponden principalmente a la construcción de la nueva sede administrativa de la Superintendencia ubicada en Av. Jorge Basadre Grohmann N° 120, San Isidro por S/17,606,773 (S/8,569,446 en el año 2019), y a la adquisición de 250 computadoras portátiles por S/1,306,762 (122 por S/1,073,637 en el año 2019) y 170 computadoras estáticas por S/493,777 (200 por S/835,945 en el año 2019).

b. Tres de los edificios y terrenos ubicados en San Isidro, de propiedad de la Superintendencia, están presentados en sus importes revaluados, de acuerdo con lo descrito en la Nota 3(f).

c. La Superintendencia tiene formalizadas pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a que están sujetos los diversos elementos de sus propiedades, mobiliario y equipo, así como las posibles reclamaciones que se le puedan presentar por el ejercicio de su actividad, entendiendo que dichas pólizas cubren de manera suficiente los riesgos a los que están sometidos.

d. En 2020 y 2019, la depreciación del ejercicio ascendió a S/4,326,693 y S/6,531,444, respectivamente, la cual se encuentra registrada en el rubro de "Estimaciones y provisiones del ejercicio" del estado de gestión (Nota 26).

10

Activos intangibles, neto

	Licencias	Software	Total
	S/	S/	S/
Costos			
Saldo al 1 de enero de 2019	9,530,129	2,749,648	12,279,777
Adiciones	747,744	3,420	751,164
Saldo al 31 de diciembre de 2019	10,277,873	2,753,068	13,030,941
Adiciones	2,420,571	-	2,420,571
Saldo al 31 de diciembre de 2020	12,698,444	2,753,068	15,451,512
Amortización acumulada			
Saldo al 1 de enero de 2019	3,033,672	1,471,174	4,504,846
Adiciones	2,922,466	745,641	3,668,107
Saldo al 31 de diciembre de 2019	5,956,138	2,216,815	8,172,953
Adiciones (a)	3,256,924	206,825	3,463,749
Saldo al 31 de diciembre de 2020	9,213,062	2,423,640	11,636,702
Costo neto			
Al 31 de diciembre de 2020	3,485,382	329,428	3,814,810
Al 31 de diciembre de 2019	4,321,735	536,253	4,857,988

a. En 2020 y 2019, la amortización del ejercicio ascendió a S/3,463,749 y S/3,668,107, respectivamente, la cual se encuentra registrada en el rubro de "Estimaciones y provisiones del ejercicio" del estado de gestión (Nota 26).

11

Otras cuentas del activo

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, corresponden principalmente a bienes culturales, muebles y enseres antiguos estilo colonial, monedas de colección, entre otros bienes históricos; asimismo libros y textos para bibliotecas.

En opinión de la Superintendencia, no es necesario constituir una estimación por desvalorización de estos activos al 31 de diciembre de 2020 y de 2019.

12

Cuentas por pagar a proveedores

Las cuentas por pagar a proveedores se componen de lo siguiente:

	2020	2019
	S/	S/
Bienes y servicios por pagar (a)	3,282,866	6,148,374
Depósitos recibidos en garantía (b)	794,879	3,095,823
Saldo Final	4,077,745	9,244,197

a. Al 31 de diciembre de 2020, este rubro corresponde principalmente a saldos por pagar a proveedores por servicios de supervisión y construcción por S/1,842,237 (S/3,234,994 al 31 de diciembre de 2019), en servicios de seguridad y telefonía por S/756,562 (S/768,290 al 31 de diciembre de 2019).

b. Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, los depósitos en garantía corresponden principalmente al efectivo recibido de parte de las entidades que han solicitado organizarse como empresas en el sistema financiero. De acuerdo al artículo 21° de la Ley General, las entidades solicitantes deberán adjuntar a su solicitud el certificado de depósitos a la orden de la Superintendencia por un valor ascendente al 5% del capital mínimo del solicitante (Nota 5(b)).

13

Impuestos, contribuciones y otros

Los impuestos, contribuciones y otros se componen de lo siguiente:

	2020	2019
	S/	S/
Renta de cuarta y quinta categoría (a)	9,561,209	1,948,095
EsSalud	2,111,229	1,814,448
Fondo de pensiones	1,288,861	1,253,882
Impuesto general a las ventas	74,445	115,483
Renta de contribuyentes no domiciliados	39,786	54,311
Otros	181,692	201,934
	13,257,222	5,388,153

a. (a) Al 31 de diciembre de 2020, este rubro corresponde principalmente a la obligación por el impuesto a la renta de quinta categoría por S/7,446,271 de sus trabajadores, por el retiro del 30% que realizaron los trabajadores de su fondo del FAT, dicho impuesto fue pagado a la Administración Tributaria y posteriormente cobrado al FAT en enero de 2021 (Nota 7(d)).

14

Renumeraciones y beneficios sociales

Las remuneraciones y beneficios sociales se componen de lo siguiente:

	2020	2019
	S/	S/
Vacaciones	17,032,287	13,649,509
Bono de productividad (a)	12,331,500	4,427,106
Compensación por tiempo de servicios	2,451,506	2,382,066
	31,815,293	20,458,681

a. Al 31 de diciembre de 2020 corresponde al bono de productividad de los trabajadores, devengado por el periodo de abril a diciembre de ese año (de octubre a diciembre al 31 de diciembre 2019).

15

Obligaciones previsionales

Las obligaciones previsionales se encuentran relacionadas con los beneficios que la Superintendencia otorga a su personal cesante perteneciente al Decreto Ley N° 20530, sobre la base de cálculos actuariales refrendados por la ONP, entidad encargada de realizar dicho cálculo actuarial de las entidades que tienen a cargo pensionistas y/o trabajadores activos pertenecientes al régimen del Decreto Ley N° 20530, con una periodicidad anual al 31 de diciembre de cada año, de conformidad con lo establecido en los Decretos Supremos N° 026-2003-EF y N° 043-2003-EF. Mediante Oficio N° 002550 – 2020-OPG/ONP-20530 de fecha 21 de enero de 2021, se comunicó a la Superintendencia el informe de cálculo actuarial correspondiente al estudio económico de reservas previsionales al 31 de diciembre de 2020 por un importe de S/7,161,174 (S/7,895,399 al 31 de diciembre de 2019 comunicado mediante Oficio N° 001764 - 2019-OPG/ONP-20530).

El registro contable de dichas obligaciones previsionales se realiza de conformidad con la actualización del Comunicado N° 004-2008-EF/93.01, Comunicado N° 002-2011-EF/51.01, y Comunicado N° 002-2017-EF/51.01, correspondiente al tratamiento contable de las obligaciones previsionales comprendidas en el Instructivo N° 20-2003-EF193.01 “Registro control de las obligaciones previsionales a cargo del Estado”, aprobado mediante Resolución de Contaduría N° 159-2003-EF193.01.

El movimiento de las obligaciones previsionales por el año terminado el 31 de diciembre fue el siguiente:

	2020	2019
	S/	S/
Saldo inicial	7,895,399	8,141,295
Pagos	(950,642)	(995,471)
Ajustes por sobrevivencia	216,417	749,575
Saldo final	7,161,174	7,895,399
Parte corriente	1,065,192	1,131,349
Parte no corriente	6,095,982	6,764,050
Saldo final	7,161,174	7,895,399

Los supuestos considerados para el cálculo de las obligaciones previsionales son:

a. Interés técnico: 4.67% para el período 2020 y 2019.

b. Tablas de mortalidad: SP2005 (Hombres) y SP2005 (Mujeres) para el período 2020 y 2019.

16

Otras cuentas del pasivo

Otras cuentas del pasivo corresponden principalmente a las obligaciones por conceptos de membresías y las multas a favor del Fondo de Seguro de Depósitos (FSD) de S/853,263 al 31 de diciembre de 2020 (S/693,465 al 31 de diciembre de 2019), los cuales inicialmente son cobrados por la Superintendencia y posteriormente transferidos al FSD, y los aportes de la Superintendencia al FAT por S/1,726,148 al 31 de diciembre de 2020 (S/619,846 al 31 de diciembre de 2019).

17

Patrimonio

a. Hacienda nacional

Al 31 de diciembre se compone de lo siguiente:

	2020	2019
	S/	S/
Capitalización de resultados acumulados	490,536,600	461,368,003
Capitalización de hacienda nacional adicional	22,313,438	22,313,438
Capitalización de reservas	8,568	8,568
	512,858,606	483,690,009

Al 31 de diciembre de 2020, la Superintendencia ha realizado la capitalización de los resultados del ejercicio 2019 por S/29,168,597 (S/15,357,815 al 31 de diciembre de 2019) a Hacienda nacional.

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la Capitalización de hacienda nacional adicional correspondiente principalmente a (1) donaciones recibidas del Grupo BID a través del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), (2) Incorporación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a la Superintendencia según Ley N° 29038 y (3) Capitalizaciones anuales del Reconocimiento a la Ejecución de Inversiones (REI), incentivo presupuestario del Ministerio de Economía y Finanzas, hasta el año 2014.

b. Resultados no realizados

Mediante Resolución Directoral N° 006-2014-EF/51.01 de fecha 19 de mayo 2014 se aprobó la Directiva N° 002-2014-EF/51.01 “Metodología para la modificación de la vida útil de edificios, revaluación de edificios y terrenos, incorporación de edificios y terrenos en administración funcional y reclasificación de propiedades de inversión en las entidades gubernamentales”, la Superintendencia

efectuó tasaciones sobre sus terrenos, realizados por peritos independientes, la cual generó un excedente de revaluación de S/10,544,534.

Durante el 2020 y 2019, no se realizó la revaluación de los activos mantenidos por la Superintendencia.

18

Ingresos tributarios netos

Los ingresos tributarios se componen de lo siguiente:

	2020	2019
	S/	S/
Instituciones financieras y seguros	293,677,823	284,882,160
Administradoras de fondos de pensiones	29,261,530	31,557,094
Intermediarios auxiliares	7,243,397	7,765,137
Cooperativas de ahorro y crédito	8,957,247	7,516,440
Registro de peritos valuadores (R.E.P.E.V.)	485,527	478,784
Empresas de transporte de custodia y administración	439,218	375,121
Empresas de transferencias de fondos	291,358	310,735
	340,356,100	332,885,471

19

Ingresos financieros netos

Los ingresos financieros se componen de lo siguiente:

	2020	2019
	S/	S/
Intereses por depósitos (Nota 5(c))	12,311,219	16,858,464
Ganancia (Pérdida) por diferencia en cambio	9,489,995	(495,553)
Intereses por contribuciones	51,904	67,004
Otros menores	1,481,315	1,656,931
	23,334,433	18,086,846

20

Otros ingresos

Los otros ingresos se componen de lo siguiente:

	2020	2019
	S/	S/
Ingresos por multas (a)	2,711,462	3,534,815
Ingresos diversos de gestión (b)	120,878	823,458
Otros	101,309	341,456
	2,933,649	4,699,729

a. Durante el 2020, corresponde principalmente a infracciones de comercialización y multas a terceros por S/2,179,370 y S/228,120, respectivamente (durante el 2019, S/2,230,932 y S/901,380, respectivamente).

b. Los ingresos diversos de gestión del 2020 comprenden principalmente las penalidades a proveedores por un importe de S/95,936 (S/630,573 en 2019).

21

Situación Tributaria

La Superintendencia no es sujeto pasivo del Impuesto a la Renta de Tercera Categoría, al ser una Institución perteneciente al Sector Público Nacional, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 18° del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, concordante con lo establecido en el artículo 7° del Reglamento del referido impuesto. Dicha inafectación, comprende los ingresos que perciba como recursos propios, generados por la prestación de servicios, y/o por donaciones recibidas tanto de entidades nacionales, como internacionales. Esta inafectación no la exonera de las obligaciones del Impuesto a la renta de cuarta y quinta categoría y del impuesto general a las ventas.

La SUNAT tiene la facultad de revisar las declaraciones de los demás impuestos y aportaciones a los cuales se encuentra afecta la Superintendencia.

Los pagos por retención del impuesto a la renta de cuarta y quinta categoría de los años 2016 a 2020, están pendientes de revisión por la administración tributaria, la cual tiene la facultad de efectuar dicha revisión dentro de los cuatro años siguientes al año de presentación de los correspondientes pagos realizados. La Superintendencia considera que no surgirán pasivos de importancia como resultado de las revisiones pendientes.

22

Gastos en bienes y servicios

Los gastos en bienes y servicios se componen de lo siguiente:

	2020	2019
	S/	S/
Gastos en bienes		
Otros bienes	622,415	1,673,181
Materiales y útiles	516,878	428,747
Suministros para mantenimiento y reparación	145,270	277,026
Alimentos y bebidas	86,073	216,380
Combustibles, lubricantes y afines	61,121	122,690
Repuestos y accesorios	49,742	22,919
Medicamentos	11,455	10,241
Enseres	629	2,085
	1,493,583	2,753,269
Gastos en servicios		
Servicios básicos de comunicaciones, publicidad	3,555,033	9,047,298
Servicio de procesamiento de datos e informática	11,785,144	8,090,313
Alquileres de muebles y estructuras	6,551,251	6,740,591
Servicios de limpieza y seguridad	4,086,737	5,786,203
Servicios de consultoría y asesoría	1,128,535	5,745,454
Viajes	883,208	4,597,415

Convenio FENACREP	5,187,500	4,488,480
Servicio de capacitación y perfeccionamiento	2,503,765	2,627,627
Servicios de mantenimiento y reparación	1,654,579	2,177,660
Practicantes	1,660,125	1,697,842
Servicios administrativos, financieros y de seguros	1,736,559	1,695,657
Servicios de organización de eventos	208,881	1,235,679
Servicio por atenciones y celebraciones	7,107	50,438
Otros servicios	2,319,656	1,704,620
	43,268,080	55,685,277
Total de gastos en bienes y servicios	44,761,663	58,438,546

23

Gastos de personal

Los gastos de personal se componen de lo siguiente:

	2020	2019
	S/	S/
Personal contratado a plazo indeterminado	137,434,977	128,050,601
Gratificaciones, aguinaldos, bonificación por escolaridad	23,664,995	22,633,372
Bono de productividad	16,016,861	21,824,629
Compensación por tiempo de servicios	13,726,630	12,814,513
Vacaciones	11,616,349	10,384,583
Contribuciones a EsSalud	10,490,924	10,170,097
Uniformes y gastos de estacionamiento	3,577,643	3,308,800
Otros gastos variables y ocasionales	2,828,236	3,116,802
Personal contratado a plazo fijo	1,497,776	1,226,190
Régimen de pensiones decreto Ley N° 20530	216,417	749,575
	221,070,808	214,279,162

24

Gastos por pensiones, prestaciones y asistencia social

Los gastos por pensiones, prestaciones y asistencia social se componen de lo siguiente:

	2020	2019
	S/	S/
Seguro médico familiar	11,710,924	11,390,924
Otros bienes de asistencia social	3,221,006	3,045,574
Subvención personal activo, sepelio, luto	313,322	162,000
	15,245,252	14,598,498

25

Transferencias, subsidios y subvenciones sociales otorgadas

Las transferencias, subsidios y subvenciones sociales otorgadas se componen de lo siguiente:

	2020	2019
	S/	S/
Aportes al FAT (a)	26,885,548	25,865,480
Transferencias corrientes (b)	3,837,385	2,468,960
	30,722,933	28,334,440

a. Corresponde a los aportes otorgados al FAT, equivalente al 14% de las remuneraciones brutas mensuales que hace la Superintendencia con cargo a su presupuesto anual.

b. Corresponde principalmente a los aportes otorgados al Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estimulo – CAFAE, por un importe de S/2,686,000 en al 31 de diciembre de 2020 (S/2,450,000 al 31 de diciembre de 2019).

26

Estimaciones y provisiones del ejercicio

Las estimaciones y provisiones del ejercicio se componen de lo siguiente:

	2020	2019
	S/	S/
Depreciación de propiedades, mobiliario y equipo (Nota 9)	4,326,693	6,531,444
Cuentas de cobranza dudosa (a)	868,847	1,166,242
Amortización de intangibles (Nota 10)	3,463,749	3,668,107
	8,659,289	11,365,793

a. Corresponde a las provisiones del ejercicio de las cuentas por cobrar a contribuyentes por S/67,784 en 2020 (S/91,174 en 2019), y de las cuentas por cobrar diversas las cuales ascendieron a S/801,063 en 2020 (S/1,075,068 en 2019).

27

Otros gastos

Los otros gastos se componen de lo siguiente:

	2020	2019
	S/	S/
Otras indemnizaciones y compensaciones (a)	135,956	467,303
Otros gastos diversos	107,274	289,585
Impuestos (b)	964,909	251,968
Baja de propiedades, mobiliario y equipo	3	1,722
	1,208,142	1,010,578

a. En 2020 corresponde principalmente a la indemnización de tres colaboradores por un total de S/130,972.

En 2019 corresponde principalmente a la indemnización otorgada al Superintendente Adjunto de Banca y Microfinanzas por su retiro de S/427,200.

b. Corresponde principalmente a gastos por impuestos y arbitrios municipales de los inmuebles de propiedad de la Superintendencia y de los inmuebles alquilados pagados a la Municipalidad de San Isidro.

28

Cuentas de orden

Las cuentas de orden se componen de lo siguiente:

	2020	2019
	S/	S/
Valores y documentos (a)	836,237,959	899,992,518
Contratos y órdenes aprobados (b)	200,469,722	193,444,212
Intereses por devengar (c)	21,098,987	15,669,351
Bienes en préstamo custodia y no depreciables (d)	5,526,709	5,068,200
Civiles PN	298,092	290,700
	1,063,631,469	1,114,464,981

a. Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, corresponde principalmente a las cartas fianza y garantías emitidas por proveedores de bienes y servicios a favor de la Superintendencia, las cuales respaldan el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

b. Al 31 de diciembre de 2020, corresponde a las órdenes aprobadas por compra de bienes y prestación de servicios por S/5,328,415 y S/195,141,306, respectivamente (S/2,765,823 y S/190,678,389, respectivamente al 31 de diciembre de 2019).

c. Al 31 de diciembre de 2020, incluye intereses por devengar de contribuciones por S/11,501,906 de empresas que se encuentran liquidadas y proceso de liquidación e intereses por devengar por depósitos a plazo por S/9,597,081 (S/10,121,376 y S/5,547,975, respectivamente al 31 de diciembre de 2019).

d. Al 31 de diciembre de 2020, corresponden principalmente a equipos de cómputo, maquinaria y equipo, y muebles y enseres no depreciables por S/2,250,699, S/1,190,939 y S/1,687,467 (S/1,945,051, S/1,160,545 y S/1,564,999 al 31 de diciembre de 2019), respectivamente.

29

Contingencias

Mediante Directiva Administrativa N° SBS-DIR-ADM-457-01 de fecha 26 de enero de 2011, se aprobaron las normas para el registro de provisiones y de pasivos contingentes, la cual establece la metodología para efectuar el registro de las provisiones y de los pasivos contingentes a cargo de la Superintendencia. La citada norma fue puesta en conocimiento de la Dirección Nacional de Contabilidad Pública, actualmente Dirección General de Contabilidad Pública a través del Oficio N° 5909-2011-SBS del 1 de febrero de 2011.

Durante el ejercicio 2020, se han realizado los ajustes correspondientes a las contingencias reportadas trimestralmente por el Departamento de Asuntos Contenciosos en cumplimiento de la Directiva antes mencionada. Por lo tanto, no se ha considerado necesaria una provisión mayor que la registrada en el rubro "Provisiones" del estado de situación financiera, por S/27,075 (S/39,187 al 31 de diciembre de 2019).

30

Instrumentos financieros

Las actividades de la Superintendencia la exponen a una variedad de riesgos financieros cuyos potenciales efectos adversos son permanentemente evaluados por la Administración a efectos de minimizarlos. A continuación, presentamos los riesgos financieros a los que está expuesta la Superintendencia:

a. Categorías de instrumentos financieros

Los activos y pasivos financieros de la Superintendencia se componen de:

	2020	2019
	S/	S/
Activos Financieros		
Al costo amortizado		
Efectivo y equivalentes al efectivo	478,768,683	457,782,464
Cuentas por cobrar, neto	148,132	149,671
Otras cuentas por cobrar, neto	21,803,317	9,673,755
	500,720,132	467,605,890
Pasivos financieros		
Al costo amortizado:		
Cuentas por pagar a proveedores	4,077,745	9,244,197
Otras cuentas del pasivo	4,232,521	1,870,965
	8,310,266	11,115,162

b. Riesgos financieros

1. Riesgos de mercado

Riesgo de tipo de cambio

La Superintendencia celebra ciertas transacciones denominadas en moneda extranjera y, en consecuencia, están expuestas a las variaciones en el tipo de cambio. La Superintendencia considera que sus actividades no la exponen a un riesgo significativo de fluctuaciones en los tipos de cambio del dólar estadounidense debido a que los saldos en moneda extranjera no son significativos.

Al 31 de diciembre de 2020, los tipos de cambio utilizados por la Superintendencia para las transacciones en moneda extranjera, principalmente en dólares estadounidenses era de S/3.618 por US$1 para la compra y S/3.624 por US$1 para la venta (S/3.311 y S/3.317 por US$1 al 31 de diciembre de 2019, respectivamente).

Los activos y pasivos en moneda extranjera se resumen como sigue:

	2020	2019
	US$	US$
Activos		
Efectivo	19,904,724	28,662,571
Servicios y otros pagados por anticipado	7,240,727	4,507,937
	27,145,451	33,170,508
Pasivos		
Cuentas por pagar a proveedores	(12,980)	(21,354)
	(12,980)	(21,354)
Posición activa, neta	27,132,471	33,149,154

En 2020, la Superintendencia ha registrado ganancia por diferencia de cambio por S/13,528,108 y pérdidas por diferencia de cambio por S/4,038,113 (ganancias por diferencia de cambio por S/5,717,722 y pérdidas por diferencia de cambio por S/6,213,275 en el 2019), que se incluyen en los rubros de "Ingresos financieros, neto", respectivamente, del estado de gestión.

Riesgo de tasas de interés

La Superintendencia no está expuesta a riesgos de variaciones significativas en las tasas de interés. Los certificados bancarios o de depósitos son pactados a tasas de interés fijas, producto de las cotizaciones respectivas.

2. Riesgo de crédito

La Superintendencia no tiene riesgos significativos de concentración de crédito y considera que los riesgos de incobrabilidad son mínimos, en la medida que las entidades supervisadas cumplen con el pago oportuno de sus contribuciones mensuales y trimestrales.

3. Riesgo de liquidez

La Administración prudente del riesgo de liquidez implica disponer de suficiente efectivo y equivalente de efectivo y tener la disponibilidad de las contribuciones de las entidades supervisadas. La Superintendencia mantiene adecuados niveles de efectivo, en la medida que sus gastos son presupuestados en función de los ingresos estimados de las contribuciones. Asimismo, la Superintendencia mantiene sus fondos disponibles en entidades bancarias de reconocido prestigio.

c. Valor razonable de instrumentos financieros

La Superintendencia Adjunta de Administración General estima que los valores en libros de los instrumentos financieros de la Superintendencia (activos y pasivos financieros) al 31 de diciembre de 2020 y 2019, no difieren significativamente de sus valores razonables.

31

Hechos subsecuentes

No se tiene conocimiento de eventos subsecuentes importantes ocurridos entre la fecha de cierre de los estados financieros y la fecha de autorización para su emisión, que puedan afectarlos significativamente, excepto por lo mencionado a continuación:

La crisis sanitaria causada por el brote y avance del COVID-19 a principios de 2020, ha afectado la actividad comercial y económica a nivel mundial, con efectos importantes en Perú. Desde entonces, el coronavirus COVID-19 se ha extendido a múltiples países, incluidos Perú, declarándose el 11 de marzo de 2020 como una pandemia global por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El 26 de enero de 2021, entró en vigencia el Decreto Supremo N° 008-2021-PCM que prorrogó la cuarentena focalizada hasta el 28 de febrero de 2021, por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la COVID-19.

Durante la presente prórroga del Estado de Emergencia Nacional quedó restringido el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio, comprendidos en los incisos 9, 11 y 12 del artículo 2 y en el inciso 24, apartado f) del mismo artículo de la Constitución Política del Perú.

Asimismo, el 19 de febrero de 2021, entró en vigencia el Decreto Supremo N° 009-2021-SA, el cual prorrogó nuevamente el Estado de Emergencia Sanitaria por 180 días calendario adicionales, esto es, hasta el 02 de septiembre de 2021.

En opinión de la Superintendencia, estos efectos no han generado impactos significativos en los estados financieros en la Superintendencia dado que es una entidad del Estado y sus ingresos se encuentran asegurados, ya que provienen de sus contribuyentes, por lo que considera que cuenta con liquidez suficiente para garantizar su continuidad.

CONCEPTO ESTRATÉGICO,
CREACIÓN GRÁFICA Y
DIAGRAMACIÓN

—

ícono™

ICONO COMUNICADORES

HOLA_ICONO

www.sbs.gob.pe

Los Laureles 214, San Isidro - Lima